

# “QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO”

OF. NO. 1139.

ASUNTO: SE REMITE TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO EN REVISIÓN, SU EXPEDIENTE ORIGINAL [REDACTED] LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO DE AMPARO [REDACTED] TRES SOBRES (LEGAJOS DE PRUEBAS), 1 DISCO Y SE SOLICITA ACUSE DE RECIBO.

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

P R E S E N T E .

En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Tribunal Colegiado en la resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el amparo en revisión [REDACTED] [REDACTED] interpuesto por [REDACTED], me permito remitir copia certificada de la citada resolución, el CD que la contiene, los originales del toca [REDACTED] y del juicio de amparo [REDACTED] tres sobres (legajos de pruebas), del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes.

Suplicándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo correspondiente.

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017.

A T E N T A M E N T E .



EL SECRETARIO DEL QUINTO TRIBUNAL  
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO.

INTO TRIBUNAL COLEGIADO EN  
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

CARLOS FELIPE ALCÁNTARA ORTIZ

049431

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

1115/2017  
17 OCT 17 PM 12:50

OFICINA DE  
JUDICIAL Y DE FISCALIA

Recibi de un enviado con:

- un testimonio resolutive en (41) F.L.
- un disco compacto
- toca 2.A 171/2016 en (342) F.L.
- Juicio de amparo 2159/2015 en (337) F.L.,  
según sus últimos folios
- (3) sobres de haberes leonados

VICTOR JUAN RUIZ BARCENAS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**AMPARO EN REVISIÓN**

[REDACTED]

**QUEJOSO Y RECURRENTE:**

[REDACTED]

**RECURRENTE ADHESIVO:**

**PRESIDENTE DE LA  
REPÚBLICA**

**MAGISTRADO RELATOR:**

**PABLO DOMÍNGUEZ  
PEREGRINA**

**SECRETARIO:**

**CARLOS FELIPE ALCÁNTARA  
ORTIZ**

Ciudad de México. Acuerdo del Quinto Tribunal  
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,  
correspondiente a la sesión de **trece de septiembre de  
dos mil diecisiete.**

**VISTOS;**

**Y,**

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Por escrito presentado el dos de  
diciembre de dos mil quince, en la Oficina de  
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en

Materia Administrativa en la Ciudad de México, y recibido en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito de la propia materia, con residencia en la misma entidad federativa el tres siguiente, [REDACTED]

[REDACTED] por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes:

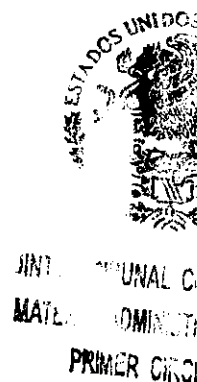
**“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:**

- 1.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
- 2.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, y
- 3.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
- 4.- Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

**IV. ACTOS RECLAMADOS:**

- a) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 237, 245, 247, 248, 368 y 479.
- b) De las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, reclamo la expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.
- c) Del Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se le reclama la aplicación en mi perjuicio de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.
- d) Los efectos y consecuencias, incluyendo actos y procedimientos, que deriven o puedan derivar de los referidos actos reclamados”.

(Fojas dos y reverso del juicio de amparo).

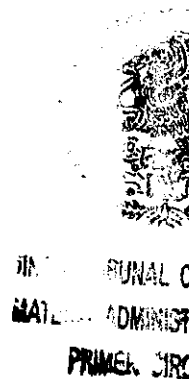


En el propio escrito el quejoso señaló infringidos los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 19, 25, 29, 73, fracciones XVI y XXI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el preámbulo y artículos 1º y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el numeral 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preámbulo y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el numeral 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; narró los antecedentes de los actos reclamados; expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes y ofreció las pruebas conducentes.

**SEGUNDO.** De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por auto de cuatro de diciembre de dos mil quince, ordenó registrarla con el número [REDACTED] requirió a la parte quejosa que

precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, e indicara si reclamaba al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 234 y 235 de la Ley General de Salud.

En acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, el Juez de Distrito recibió el escrito del quejoso, en el que dio cumplimiento al requerimiento, manifestando que no era su intención señalar como autoridad responsable al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y que sí reclamaba al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 234 y 235 de la Ley General de Salud.



Asimismo, en dicho auto, el Juez de Distrito admitió la demanda a trámite; solicitó a las autoridades responsables que rindieran su informe con justificación; dio la



intervención que legalmente asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional y acordó lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas.

Seguido el juicio por las etapas procesales correspondientes, el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el juez celebró la audiencia constitucional, quien dictó sentencia que fue firmada el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en la que se resolvió:

**"PRIMERO.** Se **SOBRESEE** en el presente juicio de amparo, promovido por [REDACTED] respecto del acto y autoridad precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, en términos de los argumentos ahí vertidos.

**SEGUNDO.** La **Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE** a [REDACTED] en contra de la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, específicamente por lo que hace a los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 así como respecto del acto concreto de aplicación, consistente en la determinación contenida en el oficio del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, de conformidad con los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución.

**NOTIFÍQUESE...**" (Fojas doscientos cincuenta y cuatro, reverso y doscientos cincuenta y cinco del juicio constitucional).

**TERCERO.** Inconforme con la sentencia anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer por razón de turno a este tribunal colegiado; donde por auto de presidencia de **veintitrés de mayo de dos mil dieciséis**, se admitió a trámite, se ordenó su registro con el número [REDACTED] y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

**CUARTO.** Por acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional agregó a sus autos el oficio signado por la Subdirectora de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con el que interpuso **recurso de revisión adhesiva**.

**QUINTO.** En proveído de trece de junio de dos mil dieciséis, se ordenó turnar el asunto al Magistrado **Pablo Domínguez Peregrina**, para la formulación del proyecto







de sentencia correspondiente, en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo.

**SEXTO.** En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, este tribunal colegiado resolvió, lo siguiente:

**“PRIMERO.** En la materia del recurso competencia de este tribunal colegiado, **no se sobresee** en el juicio de amparo.

**SEGUNDO.** Se **reserva competencia** originaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud.

**TERCERO.** Previa formación del cuaderno de antecedentes, **remítanse los autos** a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**NOTIFÍQUESE...”.**

(Fojas ciento ochenta a ciento noventa y cuatro de este expediente).

**SÉPTIMO.** Mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil dieciséis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó asumir la competencia originaria para que ese Alto Tribunal de la Nación conociera del asunto registrándolo como el amparo en revisión [REDACTED] y ordenó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala, para que éste se avocara a su conocimiento.

En sesión de uno de marzo de dos mil diecisiete la Primera Sala resolvió lo siguiente:

**“ÚNICO.** Devuélvanse al **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, el recurso de revisión y los autos para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

**Notifíquese...**”.

(Fojas doscientos treinta y cinco a doscientos noventa y uno de este tomo).

**OCTAVO.** En acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, este tribunal colegiado dio cumplimiento a lo ordenado por la superioridad y ordenó se devolvieran los autos a la ponencia del Magistrado Pablo Domínguez Peregrina para efectos del artículo 92 de la Ley de Amparo; y,



### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados



Unidos Mexicanos; 80, 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto, fracción I, inciso b), del Acuerdo General **5/2013** del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo establecido en los puntos Primero, fracción I, Segundo, fracción I, apartado 1 y Tercero, fracción I, del Acuerdo General número **3/2013** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se recurre una sentencia dictada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que reside dentro del circuito en que este tribunal colegiado ejerce jurisdicción.

**SEGUNDO.** El medio de impugnación fue interpuesto por el quejoso, dentro del término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que

la sentencia controvertida le fue notificada el **veintinueve de abril de dos mil dieciséis** (foja doscientos cincuenta y nueve del juicio de amparo), de modo que esa notificación surtió sus efectos el día siguiente, dos de mayo, conforme al artículo 31, fracción II, del ordenamiento en cita.

Por lo que el plazo para la presentación del recurso transcurrió del **tres al diecisiete de mayo del año en cita**, si se toma en consideración que se descuentan los días siete, ocho, catorce y quince, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el cinco, según el acuerdo 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En tanto que el recurso de revisión fue recibido el **dieciséis de mayo de dos mil dieciséis**, en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México como se desprende del sello fechador que obra a foja tres del presente tomo.



JUNTO TRIBUNAL  
MATERIA ADMINISTRATIVA  
PRIMER I



Asimismo, la revisión adhesiva se interpuso dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo, toda vez que el auto de admisión del recurso principal se notificó a la autoridad recurrente el **veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis** (folio sesenta y siete de este tomo), de modo que surtió sus efectos el mismo día, en términos del artículo 31, fracción I, del ordenamiento en cita.

Por lo que el plazo para la presentación del recurso transcurrió del **veinticinco al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis**, si se toma en consideración que se descuentan los días veintiocho y veintinueve, por haber sido sábado y domingo inhábil, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tanto que el recurso de revisión adhesivo se recibió el **treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis**, en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados, como se desprende del sello fechador que obra a foja setenta del tomo en que se actúa.

**TERCERO.** No es materia del presente recurso el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, que se reflejó en el resolutivo primero, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 63, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que por una parte la quejosa no formuló concepto de violación alguno a fin de demostrar la inconstitucionalidad de la **orden de publicación** de los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley de Salud.

Por otra parte, queda intocado el sobreseimiento decretado en relación con el artículo **479** de la Ley General de Salud, dado que se actualizó a juicio del juez de distrito, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acreditó la existencia del primero acto de aplicación.

Lo anterior, debido a que no fue impugnada esa parte de la resolución, por quien pudiera perjudicar.



QUINTO TRIBUNAL  
MATERIA AD  
PRIMER



Sirve de apoyo a esta conclusión, la tesis de jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación del año de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis cuatrocientos setenta y uno, página trescientos trece, que dice:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** Cuando algún resolutive de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutive debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente”.

**CUARTO.** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los argumentos vertidos en la revisión adhesiva deberán estudiarse, excepcionalmente, antes que los de la principal, cuando en ellos se aleguen cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de amparo, lo que es un aspecto de orden

público que conforme a la estructuración procesal debe dilucidarse preliminarmente al tema de fondo debatido.

En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia P./J. 69/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto que dicen:

**"REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.** La regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla. Sin embargo, si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo".



Así, en virtud de que el análisis de las causas de improcedencia es una cuestión de estudio preferente y en atención a lo ordenado en el considerando quinto de la





ejecutoria del Amparo en Revisión [REDACTED] de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que determinó devolver el presente asunto a este tribunal colegiado para que **examinara todos los motivos** que se hubieran aducido, en relación a la **procedencia del juicio de amparo**, dado que existían argumentos concretos, hechos valer por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su revisión adhesiva y que seguían sin resolverse, así como aquellos que pudiera advertir oficiosamente, al determinar lo siguiente:

"(...)

*Sin embargo, es evidente de autos y de lo reseñado en el considerando anterior, que este último aserto del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no resulta correcto.*

*Ello, pues basta dar lectura al Capítulo de 'PROCEDENCIA DEL RECURSO', para advertir que, en el mismo, se incorporan distintos argumentos identificados como '**Segundo**' y '**Tercero**'.*

*En cuanto al argumento identificado como 'Tercero', se vierten alegaciones adicionales relacionadas con la denuncia de que el quejoso carece de interés jurídico/legítimo, pues en el oficio de respuesta a la solicitud de autorización, sólo se citaron los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, sin que ello constituya acto de aplicación alguno, para lo cual, se citó la tesis de rubro: '**LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN**'.*

*Sobre ello, puede decirse que si bien de forma general, el Tribunal Colegiado que conoció*

previamente del asunto, respondió a las alegaciones que sobre la falta de interés jurídico/legítimo del quejoso, realizó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que dicha respuesta no fue puntual, y no agota lo planteado por dicha autoridad responsable en cuanto a los motivos específicos por los que en los apartados 'Primero' y 'Tercero', se aduce que el quejoso carece de interés jurídico/legítimo.

Lo anterior, máxime que en el apartado 'Primero' se hace referencia a cuestiones afines a la naturaleza heteroaplicativa de las normas impugnadas y en el tercer apartado, a que la sola cita de preceptos, no constituye un acto de aplicación; cuestiones que si bien están relacionadas, no parecen haber sido exhaustivamente analizadas en el cuarto considerando de la sentencia de seis de julio de dos mil dieciséis.

Esto es así, pues el estudio de improcedencia que realizó el Tribunal Colegiado, se centra, en general en el motivo de improcedencia denunciado en el sentido de que no existió un acto de aplicación de los numerales reclamados, pero sin que en ello se diera respuesta específica en cuanto a, por ejemplo, lo alegado en el sentido de que tales preceptos, únicamente fueron citados más no aplicados, ni menos aún, en cuanto a si resultaba o, no, aplicable la tesis invocada por la referida autoridad responsable. De hecho, en el apartado 'Tercero', se alega también que el quejoso no acredita de manera fehaciente que normalmente lleva a cabo el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, y dicha cuestión tampoco fue analizada por el órgano colegiado que antecedió en el conocimiento del asunto.

En tal sentido, si bien es permitido que los argumentos de las partes en general, y en el caso, de las causales de improcedencia que hacen valer las partes, pueda realizarse de manera conjunta, ello no excusa la omisión de estudio de cada motivo específico por el que se alegue que existe una razón por la que deba sobreseerse en el juicio de amparo.

A mayor abundamiento, si bien del fallo dictado por el Tribunal Colegiado que nos ocupa, se advierte que el mismo enfoca su respuesta genérica a la causal de improcedencia que en los apartados



UNTO TRIBUNA  
MATE ADAM  
P. 1000R



'Primero' y 'Segundo' del Capítulo de Procedencia del escrito de revisión adhesiva del Presidente de la República, se hace valer en cuanto a la falta de interés jurídico/legítimo del quejoso, no queda claro de dicho análisis en qué forma se responden los motivos específicos por los que la autoridad responsable señalada, en dos apartados diferentes, consideraba que se actualizaba dicha causal de improcedencia.

Por otro lado, lo que sí resulta incuestionable, es que en ninguna forma, el Tribunal Colegiado se ocupa de estudiar lo planteado por el Presidente de la República en el apartado 'Segundo' del capítulo de 'PROCEDENCIA DEL RECURSO', contenido en el oficio de revisión adhesiva presentado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y es que, en efecto, dicho Tribunal centró su estudio de improcedencia únicamente en cuestiones afines al interés jurídico/legítimo del quejoso.

Sin embargo, en el apartado 'Segundo' referido, se incluyen distintos argumentos que abonan nuevos posibles motivos de improcedencia, relacionados con los efectos de la eventual concesión de amparo, en cuanto a la **inviabilidad de que la misma pueda tener efectos materiales y en cuanto a la posible violación al principio de relatividad de la sentencia.**

Y es que, si bien es cierto que dichas causales, en lo general, ya habían sido hechas valer ante el Juez de Distrito en el informe justificado respectivo, quien la desestimó, no menos cierto es, que en el oficio de revisión adhesiva se incluyen entre otros; los siguientes nuevos posibles motivos que actualizarían dichas causales y que no fueron planteados ante el juez ni menos aún estudiados por el mismo:

- **No es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar el consumo de Marihuana, conlleva la comisión de un delito.**
- **No fue motivo de análisis el proceso de adquisición, comercio o recepción del narcótico.**
- **El quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita.**

**- De concederse el amparo se violarían distintos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.**

**- De concederse el amparo, no quedan exentos de la comisión del delito quienes provean al quejoso de la droga ni el propio quejoso.**

De hecho, en la forma en que son planteados, los argumentos referidos no necesariamente estarían vinculados a las causales de improcedencia relativas a los efectos prácticos de la ejecutoria de amparo y a la posible violación del principio de relatividad de la sentencia, sino que dichos motivos, se plantean también para ser estudiados propiamente como causales de improcedencia en sí mismas y no sólo como motivos de una causal diversa, pues, por ejemplo, el que la sentencia de amparo, de ejecutarse conlleve la comisión de uno o más delitos, está relacionado no sólo con la posibilidad de que una sentencia se materialice y con que ello pueda tener efectos sobre personas distintas al quejoso, sino también, con los fines y la naturaleza del juicio de amparo.

Ello se afirma así, pues en el propio apartado 'Segundo' citado, la autoridad responsable precisa distintas cuestiones que, si bien tienen relación entre sí, merecen una respuesta concreta en cada caso, pues parten de la imposibilidad legal que existe para que el quejoso acceda a la semilla de la 'cannabis' o a la propia droga, siendo que, en el caso, no se solicitó el amparo con respecto a actos relacionados con adquisición.

Pero más aún, lo anterior lleva a interrogantes relacionadas con el hecho de que, si el quejoso accediera a la droga, podría estar cometiendo un delito quien le proporcionare la misma, y el propio quejoso como receptor del producto de un delito, cuestiones todas ellas que, entre otras, se refieren en el oficio de revisión adhesiva y no son estudiadas por el Tribunal Colegiado, ni fueron tampoco merecedoras de mención alguna de las razones por las que no se estudiaron.

Así, es indudable que el Tribunal Colegiado, sólo atendió o respondió parcialmente los argumentos de improcedencia que le fueron planteados por el Presidente de la República, como autoridad responsable y revisionista adhesiva, y que, por tanto, existen aún cuestiones que deben estudiarse



JUNTO TRIBUNAL  
MATERIA ADMINISTRATIVA  
PRIMER



*y, en su caso, desestimarse o estimarse procedentes, antes de que se proceda al fondo del estudio del asunto".*

(Folios doscientos ochenta y dos reverso a doscientos ochenta y cinco de este tomo).

Del texto previamente transcrito, se derivan los lineamientos establecidos en la ejecutoria relativa al Amparo en Revisión [REDACTED] emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este tribunal colegiado debe observar a efecto cumplimentar dicha resolución.

En atención a ellos se precisa que el Presidente de la República, en su recurso de revisión adhesiva, expone diversos motivos de improcedencia del juicio de amparo en tres apartados.

En el **primero** manifiesta en esencia que, respecto del artículo 479 de la Ley General de Salud, procede dictar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los

diversos numerales 5, fracción I y 107, fracción I, todos del mismo ordenamiento jurídico.

Lo anterior, debido a que el quejoso reclamó dicho precepto en su carácter de heteroaplicativo; sin embargo, no acreditó su aplicación, pues si bien exhibió copia simple del oficio [REDACTED], emitido por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, del mismo no se observa que este precepto haya sido aplicado.

Este argumento es **inoperante**.

Se dice lo anterior, porque en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, el Juez Federal, advirtió de oficio, que respecto del artículo 479 de la Ley General de Salud, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Ello porque indicó que, dicho numeral, establece la tabla de las dosis máximas de consumo personal e inmediato de diversos narcóticos, entre otros, el aplicable



JUNTO TRIBUNAL  
MATERIA ADMINISTRATIVA  
PRIMER



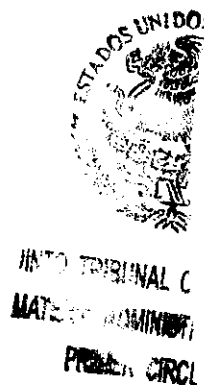
a la "*cannabis sativa, indica o mariguana*" (5 gramos), el cual estaba relacionado con lo establecido en el párrafo primero del diverso numeral 478, de ese mismo ordenamiento jurídico, que regula la excluyente de responsabilidad del delito de narcomenudeo por la posesión simple, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor en igual o inferior cantidad.

Por lo que concluyó el juzgador que el artículo **479** de la Ley General de Salud, no se citó en el acto de aplicación impugnado, ni lo dispuesto en él se concretó implícitamente, pues la respuesta emitida por la autoridad administrativa no guardaba relación con la existencia de una conducta delictiva o la posibilidad de considerar que se actualizaba la posesión del narcótico respectivo en una cantidad que permitiera considerar que ésta se destinaba exclusivamente para consumo personal y menos aún se trataba de la excluyente de responsabilidad por farmacodependencia.

Ante ello, determinó el juez que al no acreditarse la existencia de un acto de aplicación de lo previsto en el numeral 479 de la Ley General de Salud, en perjuicio del quejoso, se colegía que no afectaba su interés jurídico y, por ende, el juicio de amparo resultaba improcedente en su contra por lo que debía **sobreseerse** en este respecto del citado precepto, al tenor de lo señalado en el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Por tal razón, toda vez que el Juez de Distrito sí analizó tal causal de improcedencia y al efecto resolvió que en el caso se actualizaba; el argumento expuesto por la recurrente adhesiva en el apartado primero del capítulo de improcedencia de su recurso, deviene inoperante, puesto que en la sentencia recurrida se sobreseyó ante la falta de interés jurídico, por no existir aplicación del numeral 479 de la Ley General de Salud.

Sobreseimiento que en el considerando tercero de la presente ejecutoria quedó intocado debido a que el quejoso no impugnó esa determinación.







Por otro lado, no pasa inadvertida la consideración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que debe estudiarse el carácter heteroaplicativo de los artículos reclamados y su falta de aplicación en el oficio controvertido, pues del análisis que realizó este tribunal colegiado al apartado primero del capítulo de procedencia del recurso de revisión adhesiva, planteado por el Presidente de la República, se advierte que a través de los argumentos ahí expuestos, solo alega la naturaleza heteroaplicativa del artículo 479 de la Ley General de Salud, y la falta de interés jurídico del quejoso, al no haber sido aplicado en el oficio en el que el Encargado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios le negó su solicitud, más no se refirió a todos los numerales reclamados, pues sus argumentos no fueron genéricos, sino específicos.

Por otro lado, en una sección del apartado **tercero**, la autoridad recurrente indicó que debía sobreseerse el juicio de amparo, porque el quejoso **carecía de interés jurídico/legítimo**, ello con fundamento en el artículo 61,

fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Lo anterior, debido a que en el oficio emitido por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, sólo se citaron los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, **sin que ello constituya acto de aplicación alguno.**

Pues, a través del oficio en cita, la responsable solo daba respuesta a la consulta formulada por el particular en el sentido de que por el momento no podía ser expedida la autorización solicitada, sin que pudiera considerarse que dicho oficio obligaba al quejoso a realizar una acción, tampoco que se le sancionara, o bien que se vedara derecho alguno adquirido por el accionante del juicio de amparo.

Apoyó su conclusión en la tesis 1a. V/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la



SECRETARÍA DE SALUD  
COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA  
PRIMER CIRCULO



Nación, de rubro: "LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN".

A fin de analizar la causal de improcedencia planteada, es oportuno referir el marco jurídico que la prevé y en tal propósito se invoca el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es:

**"Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

I. (...)

**XII.** *Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;*

**XIII (...)"**.

El numeral previamente transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación.

Como se indicó previamente, el recurrente adhesivo considera que los artículos precisados en el oficio que contiene la respuesta emitida por el Comisionado de

Autorización Sanitaria, no fueron aplicados sino solo se citaron en tal documento.

En relación a la diferencia entre la cita y aplicación de los artículos reclamados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, **prohíben** o permiten a las personas la realización de una conducta específica y que ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa.



ALTO TRIB  
MATERIA A  
PRIM

Explicó el Alto Tribunal del País que, ante la actualización de las hipótesis o supuestos contemplados en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de sus consecuencias jurídicas, por lo que una ley sólo puede considerarse **aplicada** cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas.



En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley.

Tales consideraciones se encuentran contenidas en la tesis de rubro, texto y datos de publicación siguientes:

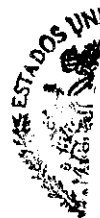
**“LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.** Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuestos previstos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que

*siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley.*

(Tesis: 1a./J. 18/2012 (9a.). Primera Sala del Máximo Tribunal del País. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2. Página: 812).

En la especie, el quejoso [REDACTED]

[REDACTED], por propio derecho; reclamó los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, con motivo del que llama su primer acto de aplicación y que hizo consistir en el oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.



JUNTO TRIBU  
MATERIA AL  
PRIME

Al respecto, es oportuno referir que de las constancias que integran el juicio de amparo de origen, se aprecia que la autoridad responsable, Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consulta de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; al rendir su informe justificado, remitió al juez



diversas copias certificadas dentro de las cuales se encuentran el escrito libre signado por [REDACTED]

[REDACTED], por propio derecho, mediante el cual solicitó:

*"Se promueve la autorización para que el peticionario pueda consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos"* de fecha doce de noviembre de dos mil quince, y fue registrada con el folio [REDACTED] según se lee del "Comprobante de Trámite" respectivo (fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cuarenta y seis).

Asimismo del oficio que se identifica como el primer acto de aplicación de los numerales reclamados, el cual fue anexado a la demanda de amparo, en la parte que a este estudio interesa, se destaca:

*"(...)*

*México, D.F. 24 de Noviembre de 2015*

**Asunto:** Autorización de consumo.

*Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 17 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracciones XXIV y XXX, 4 fracción III, 17 bis fracciones IV y VI, 194, 194 bis, 244, 245, 247, 283, 284, 285, 289, 290, 368, 369, 371 y 375 fracción IX de la Ley General de Salud;*

(...) y en relación a su solicitud con número de entrada [REDACTED] de fecha 13 de noviembre de 2015, en la que solicita autorización sanitaria para que el peticionario el C. [REDACTED], pueda consumir Cannnabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (Tetrahydrocannabinol), al respecto se informa:

Conforme al artículo **235** y **237** (sic) de la Ley General de Salud indica 'Queda prohibido en el territorio nacional, la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones'.

Conforme al artículo **245**, **247** y **248** de la Ley General de Salud se indica 'Queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245 entre las sustancias enlistadas en la fracción I del Artículo 245 se encuentra THC (Tetrahydrocannabinol).

Por lo anterior expuesto hasta el momento no puede ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahydrocannabinol).

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
EL COMISIONADO DE AUTORIZACION  
SANITARIA.

(...)" [Foja ciento cuarenta y cinco].





De la transcripción que se hace del contenido del oficio en comento, claramente se advierte que el mismo constituye la respuesta a la petición que por escrito formuló el ahora quejoso a la autoridad responsable, consistente en que por el momento no podía ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (Índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahidrocannabinol), pues tales actos estaban prohibidos por disposición expresa de los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud.

Bajo ese contexto, si como se anticipó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que una norma jurídica se aplica cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas.

Y por otro lado se tiene que, en el caso, la autoridad responsable determinó que por el momento no podía ser expedida la autorización para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, **uso o consumo** de Cannabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahidrocannabinol), porque dichos actos estaban expresamente prohibidos en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud, se obtiene que lo que realmente hizo la autoridad sanitaria fue **aplicar el contenido de tales preceptos legales**.

Ello porque, en observancia a su contenido informó al gobernado que no podía otorgar la autorización solicitada, pues tales numerales contemplan una prohibición expresa a la autorización que pretende el gobernado, por lo que se aprecia que realmente la autoridad responsable aplicó los artículos reclamados y no solo los citó.





Por tal razón, la tesis 1a./J. 18/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, invocada por el Presidente de la República en su revisión adhesiva, sí resulta aplicable al asunto, pues en ella se exponen los lineamientos necesarios para diferenciar entre la configuración de una hipótesis normativa y su sola cita en una resolución administrativa; sin embargo en atención a su contenido, este tribunal colegiado llegó a la conclusión de que en el oficio reclamado se ordenaba la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de lo previsto en los artículos 235, 327, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, al determinar que por el momento, no podía ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de marihuana.

Asimismo, al emitir esa respuesta, la autoridad responsable indicó que su expedición era de conformidad con diversos artículos de la Ley General de Salud, dentro de los que se encuentra el precepto 368, el cual establece

que la **autorización sanitaria** es el acto administrativo mediante el cual se permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determina esa disposición jurídica, así como las demás disposiciones generales aplicables, teniendo las autorizaciones sanitarias el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario.

De donde se advierte claramente la aplicación del numeral **368** de la Ley General de Salud, en el oficio de respuesta emitido por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

Sin que pase inadvertido para este órgano constitucional que en el oficio de respuesta, la autoridad responsable no haya citado el numeral **234** de la Ley General de Salud, pues tal como lo determinó el Juez de Distrito, en el considerando quinto de la sentencia recurrida (foja doscientos ocho, reverso, de los autos de amparo), de la demanda de amparo promovida por el





quejoso se advierte que la impugnación que propone el accionante, es en virtud de que tales preceptos, forman parte de la regulación prohibitiva del consumo de marihuana, de ahí que se controviertan como un sistema normativo.

Pues tal artículo únicamente explica que se debe entender por estupefaciente, al referir *"Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: (VÉASE ARCHIVO ANEXO). Los isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, a menos que estén expresamente exceptuados. Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga sustancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra sustancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación"*.

Determinación que al no haber sido controvertida por el recurrente adhesivo, ni por cualquier otra autoridad

responsable, debe seguir rigiendo el sentido del fallo que se analiza.

En otra sección del apartado **tercero** el revisionista adhesivo aduce que con motivo de los artículos de la Ley General de Salud reclamados, no se afecta la esfera jurídica/legítima del quejoso, dado que éste no lo acredita de manera fehaciente con documento idóneo.

Sostiene que el quejoso acude al juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; sin embargo, no acredita con prueba alguna que la emisión de tales ordenamientos legales le causen perjuicio o agravio en su esfera de derechos fundamentales, pues para empezar, no acredita de manera fehaciente que efectivamente lleve a cabo el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente "marihuana o cannabis".

Indica que al no existir elementos de convicción palpables e idóneos con los que la impetrante acredite de



INTERIOR  
MATERIA  
PRII



qué forma su esfera jurídica se ve afectada, debe sobreseer el juicio de amparo, ya que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla, situación que acontece en el presente asunto.

En relación a los argumentos del revisionista adhesivo relativos a que no existe una afectación jurídica al quejoso, porque no acredita de manera fehaciente con prueba alguna la transgresión a su esfera jurídica, debe destacarse que la afectación al interés jurídico del gobernado, nace cuando existe una transgresión a algún derecho público subjetivo que esté previsto en un ordenamiento jurídico.

En el caso, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad, entre otros, de los artículos: 235, 237, 245, fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en los que se basó la autoridad responsable para negar la autorización que le solicitó.

Solicitud de autorización para el autoconsumo regular de marihuana, con fines meramente lúdicos y recreativos, así como para ejercer los derechos correlativos como son la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y en general todo acto que estuviese relacionado, excluyendo los relativos al comercio; tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

Así la afectación a la esfera jurídica del quejoso se constituye ante la negativa a su solicitud, pues el justiciable alega que con dicho acto se transgredió su derecho humano de autodeterminación personal y corporal, **libertad individual** y dignidad humana, contemplados en los artículos 1º, 2º, 3º y 25 de la Constitución Federal, 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 11 del Pacto San José, Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de la protección a la libertad personal prevista en la parte







sustantiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De donde se deriva que la aplicación de los artículos de la Ley General de Salud, que contemplan el sistema de prohibiciones administrativas, que no permite la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, es suficiente para advertir una transgresión a la esfera jurídica del gobernado, pues la aplicación de tales disposiciones jurídicas, impide al particular llevar a cabo el autoconsumo regular de marihuana, con fines meramente lúdicos y recreativos, pues actualmente ese acto está prohibido por la Ley General de Salud.

Recapitulando, si el quejoso funda su demanda de amparo en el derecho a la autodeterminación y libertad personal, consagrados en los preceptos 1º, 2º, 3º y 25 de la Constitución Federal, y se duele de la aplicación de los diversos 235, 237, 245, fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud, que prohíben su pretensión; acceder al otorgamiento de una autorización para que pueda llevar a cabo el autoconsumo regular de marihuana, con fines meramente lúdicos y recreativos, es evidente la afectación a su esfera jurídica, pues en virtud de la observancia del marco legal, el particular no puede consumir la sustancia psicotrópica que solicita para ejercer de forma independiente su derecho de libertad personal.



QUINTO TRIBUNAL  
MATERIA ADMINISTRATIVA  
PRIMER JUICIO

Sin para ello sea necesario la exhibición de una prueba técnica que demuestre tal situación, pues basta con presentar el escrito de solicitud ante la autoridad competente, y la respuesta recaída a su escrito, para demostrar la violación a su derecho de **autodeterminación personal**, que estima infringido, pruebas que si obran en el expediente de amparo, a fojas treinta y nueve y cuarenta y uno, respectivamente.



Por otro lado, en relación al hecho de que el justiciable no acredita que efectivamente lleve a cabo el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente "marihuana o cannabis", esta exigencia es insostenible, pues como se vio, actualmente el marco legal que rige la situación particular, prohíbe a los gobernados la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de dicho estupefaciente, por lo que es ilógico que se pida se acredite el consumo de marihuana, si el marco jurídico actual no lo permite.

En este contexto, si bien el interés legítimo implica una violación a la esfera jurídica del gobernado en virtud de su situación particular frente al orden jurídico, ello no implica que el quejoso deba demostrar que lleva a cabo un consumo regular de marihuana para que acredite la afectación a su interés legítimo.

Pues, justo en virtud de que el marco legal actual prohíbe el consumo de marihuana, es que el quejoso decide instar el juicio de amparo contra leyes, a efecto de demostrar la contravención de lo dispuesto en los numerales 235, 237, 245, fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud, con los preceptos 1°, 2°, 3° y 25 de la Constitución Federal.

De ahí que no sea necesario que el quejoso acredite que consume regularmente marihuana para que pueda actualizarse la afectación a su esfera jurídica, pues justo en razón de tal prohibición es que acude al juicio de amparo.

Máxime que atendiendo a la finalidad de la autorización solicitada "autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos", no se advierte que lo solicite para un fin médico, pues este es una modalidad diversa y en este supuesto, sí está permitido su consumo por ley, en cantidades mínimas (5 gramos), de conformidad con el artículo 479 de la Ley General de Salud.



UNTO TRIBU  
MAL A ADA  
PRIMER



Tiene aplicación al asunto, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

**"INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.** La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica,

*sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella."*

([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736).

Ahora se procede a analizar los nuevos posibles motivos de improcedencia contenidos en el apartado **segundo** del recurso de revisión adhesiva, advertidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el considerando quinto de la ejecutoria del Amparo en Revisión [REDACTED]

En dicho apartado, la autoridad recurrente considera que en relación con los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 todos de la Ley General de Salud, es improcedente el juicio de amparo de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo y con los preceptos 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X y 133 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para contextualizar las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad recurrente, es necesario,



UNTO TRIBUN  
MATERIA ADP  
PRIM

traer a colación, el contenido de los preceptos de la ley de la materia, que son del tenor siguiente:

**Ley de Amparo**

**“Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:  
(...)

**XXIII.** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

**Artículo 77.** Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

(...)”.

Del texto normativo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo.

Atendiendo a esa cláusula abierta, el Presidente de la República, sostiene que el juicio de amparo es improcedente porque no fue motivo de análisis el proceso de adquisición, comercio o recepción del narcótico.

Aduce que sólo podría sembrarse, cultivarse, cosecharse, prepararse, poseerse o transportarse marihuana, si existe como presupuesto la adquisición o importación de dicha droga, conductas que siguen constituyendo ilícitos penales previstos en normas que no fueron impugnadas y por tanto tampoco fueron **materia de análisis en el presente juicio.**



A efecto de dar solución a estos argumentos, debe tenerse presente el contenido del escrito de solicitud presentado por el gobernado, en el que expresó:

“  
[Redacted]  
México, D.F. a 12 de noviembre de 2015.  
C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa.  
Comisionado Federal de la  
Comisión para la Protección Contra  
Riesgos Sanitarios.  
Presente.

El suscrito [Redacted] mexicano, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y recibir





notificaciones el ubicado en (...) México, Distrito Federal; comparezco a exponer:

En pleno ejercicio de mis derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y salud, solicito se me otorgue la autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros  $\Delta^6$  (7),  $\Delta$  7,  $\Delta$  8,  $\Delta$  9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente 'marihuana' o 'cannabis'). Se promueve la autorización para que el peticionario pueda consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos.

Asimismo, se pide la citada autorización para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo, **importación** y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

En espera de que se me otorgue la multicitada autorización, quedo de usted.

Atentamente

[Redacted Signature]

(Foja ciento cuarenta y seis del juicio de amparo).

Del texto transcrito, se advierte que el particular, solicitó autorización al Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, para el consumo individual de marihuana, así como de los

derechos correlativos para ejercerlo, dentro de los que señaló la **importación** de dicha droga.

El Comisionado de Autorización Sanitaria, negó tal solicitud, e informó que hasta el momento no podía ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, **adquisición**, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa, (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahidrocannabinol), de conformidad con los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, dado que los mismos establecían tal prohibición.

Frente a esa determinación, el quejoso promovió juicio de amparo en contra de la expedición de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil quince, específicamente por lo que respecta a los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479.





Luego, es menester traer a contexto el contenido de los numerales 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, que establecen:

**“ARTÍCULO 235.** La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, **adquisición**, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

*I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;*

*II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*

*III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;*

*IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;*

*V. (DEROGADA)*

*VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.*

*Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.*

*(...).*

**ARTÍCULO 237.** Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias

señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

(...).

**ARTÍCULO 245.** En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

(VÉASE ARCHIVO ANEXO).

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son:

(...)

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

(...)

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

(...)

Y sus sales, precursores y derivados químicos

(...)

V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

**ARTÍCULO 247.** La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, **adquisición**, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER C

cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

- I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;*
- II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*
- III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;*
- IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;*
- V. (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997)*
- VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.*

*Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y **requerirán, al igual que las sustancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.***

**ARTÍCULO 248.** *Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245".*

Como se observa, de los artículos transcritos se desprende que prevén una prohibición expresa a la adquisición de marihuana, por lo que si el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de dichos numerales, en consecuencia su contenido sí será materia de estudio del fondo del asunto, por lo que el argumento de la autoridad recurrente, deviene **infundado**.

En otro argumento, la autoridad recurrente alega que una concesión del amparo, acorde a lo estrictamente solicitado por el quejoso, en nada le beneficiaria, pues podría implicar la comisión de uno o más delitos, o cuando menos, la continuación de los efectos de los ya cometidos, así como violación a diversos ordenamientos legales administrativos e incluso internacionales. Ello, porque aunque se autorice la siembra o cosecha de marihuana, la obtención de una semilla, que resulta indispensable para dichos procesos, sigue constituyendo un ilícito.

Aduce que la acción constitucional es improcedente, en virtud de que los efectos de la ejecutoria de amparo, que en su caso se dicte, no podrían concretarse porque **no es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar el consumo de marihuana, conlleva la comisión de un delito, por parte de quienes vendan, suministren o entreguen por cualquier medio dicha droga o su semilla a quien la consumirá; la posible comisión de delitos por parte del propio accionante del juicio de amparo al recibir la droga necesaria para su siembra y cosecha, e**



JUNTO TRIBUNAL  
MATERIA ADMINISTRATIVA  
PRIMER C



incluso, la eventual comisión de ilícitos diversos por parte de la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Para dar solución a estos argumentos, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente:

***“Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:*

*(...)*

***II.** Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo **sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere**, en el caso especial sobre el que verse la demanda.*

*(...)”.*

El texto constitucional transcrito, prevé el principio de relatividad de las sentencias de amparo, conforme al cual, se dispone que **las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y**

**protegerlos, si procediere**, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Este principio rector de las sentencias constitucionales, obliga a los tribunales de amparo a otorgar su protección, solo respecto del caso particular que haya dado lugar al juicio; es decir, al quejoso que instauró la demanda de amparo -ya sea un particular, una persona moral, privada u oficial- y respecto del acto de autoridad que constituyó la materia del juicio, sin poder dar a sus sentencias efectos generales.

Bajo ese tenor, la causa de improcedencia que hace valer el recurrente adhesivo es **infundada**, porque en atención al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, conforme al cual, solo se protege al promovente del medio extraordinario de defensa, la concesión que en su caso se llegara a dictar, solo ampararía al quejoso, permitiéndole adquirir la marihuana o su semilla para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con independencia de los tipos penales que prohíban la enajenación de la misma.



JUNTO TRIBUNAL  
MATERIA AD  
PRIME





Pues basta atender al último párrafo del artículo 235 de la Ley General de Salud, que establece que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, **adquisición**, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, **sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.**

De ahí que, si la Ley General de Salud, establece por excepción que tales actos -dentro de los que se encuentra la adquisición de marihuana- pueden llevarse a cabo, cuando se trate de fines médicos o científicos, en caso de que se resuelva la inconstitucionalidad de los artículos reclamados, que establecen el sistema de prohibiciones administrativas contemplado en el ordenamiento jurídico en cita, es viable que pueda cumplirse la sentencia concesoria que en su caso se dicte, permitiéndole al justiciable adquirir una semilla o una cantidad necesaria de

marihuana para que pueda ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Pues, en caso de que se resolviera otorgar el amparo solicitado al quejoso, este tendría la autorización plena para adquirir una semilla de marihuana, lo que tornaría lícito dicho acto, por contar con el permiso expedido por la autoridad competente; Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

En otra sección del apartado segundo del capítulo de procedencia del recurso de revisión adhesiva, aduce el Presidente de la República que **de concederse el amparo, no quedan exentos de la comisión del delito quienes provean al quejoso de la droga ni el propio quejoso.**

Este argumento es **infundado.**

Se dice lo anterior porque si bien el sistema punitivo de prohibiciones que se comprende por los tipos penales



UNTO TRIB  
MATERIA A  
PRIME



contenidos en los numerales 194, fracción I, 195, 195 BIS y 196 TER, del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, los cuales sancionan a aquel que produzca, comercie, suministre, prescriba o posea algún narcótico, entre otros actos, cuentan con el elemento típico de carácter normativo consistente en que tales conductas deben realizarse "sin la autorización correspondiente".

Esta condicionante, en caso de dictarse una sentencia protectora, no operaría en este caso, porque el quejoso contaría con tal autorización, lo que no haría ilícita la adquisición de marihuana o su semilla, de manera que incluso la obtención del psicotrópico por parte de terceros no sería ilegal, al contar con el permiso correspondiente, el promovente del amparo, estaría facultado para acceder a dicha droga.

De igual forma, la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no cometería ilícito alguno.

Se afirma lo anterior, porque debe tenerse presente el contenido del numeral 290 de la Ley General de Salud, que regula lo siguiente:

**“Artículo 290.** La Secretaría de Salud otorgará autorización para **importar** estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan exclusivamente a:

*I. Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficinales que el propio establecimiento elabore, y*

*II. Los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría. Su proceso quedará sujeto a lo establecido en los Capítulos V y VI de este Título, quedando facultada la propia Secretaría para otorgar autorización en los casos especiales en que los interesados justifiquen ante la misma la importación directa”.*



JUNTO TRIBUN  
MATERIA ADM.  
HONOR

Del texto legal transcrito se deriva que la Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan exclusivamente a:

1. Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficinales que el propio establecimiento elabore, y

2. Los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría.

Asimismo se establece que la Secretaría de Salud, está facultada para otorgar autorización en los casos especiales en que los interesados justifiquen ante la misma la importación directa.

Disposición normativa de la que se deduce la posibilidad de que el justiciable pueda importar directamente el psicotrópico en comento, al tratarse de un caso especial por tener la autorización correspondiente, o incluso podría adquirir tal sustancia o su semilla en aquellos establecimientos que entran dentro del margen legal y que están autorizados y controlados por la propia Secretaría de Salud, como son las droguerías o los establecimientos destinados a producción de medicamentos.

Por consiguiente, contrario al dicho del recurrente adhesivo, los efectos de la ejecutoria de amparo, que en su caso se dictara, sí podrían concretarse, porque el

otorgamiento de la autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, es el presupuesto necesario para que el quejoso pueda adquirir marihuana o su semilla, lo que hace lógico que el promovente del amparo no pueda cometer los delitos en cuestión, pues con los efectos de la protección constitucional estaría facultado para adquirir dicha droga incluso de parte de terceros o de los establecimientos autorizados y controlados en el marco legal por parte de la Secretaría de Salud, de ahí que resulte infundada la causal de improcedencia hecha valer por el Presidente Constitucional en una sección del segundo apartado de su recurso de revisión adhesivo.



INTROITO EN  
MATERIA AL  
PRIME

Así en relación a la afirmación del recurrente adhesivo relativa a que **el quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita**, deviene **infundada**, porque como se indicó previamente, toda vez que el accionante promovió el juicio de amparo en contra de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, que prohíben de forma expresa: la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, **adquisición**, posesión, comercio,



transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de estupefacientes como lo es la marihuana, en el caso de que se concediera el amparo al justiciable, el efecto sería desaplicar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de tales normas.

Lo que se traduce en la obligación de que la autoridad sanitaria, no podría emitir la negativa a su solicitud, sustentada por tales numerales, lo que conllevaría irremediablemente al otorgamiento de la solicitud y no a la emisión de una respuesta en sentido negativo.



COLECCIÓN DE  
TRATADOS DE  
RECIBIDO.

En concordancia a la afirmación del recurrente adhesivo consistente en que **de concederse el amparo se violarían distintos Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano**, también es **infundada**.

Se determina lo anterior, porque de concederse el amparo, no se contravendría lo dispuesto en instrumentos

internacionales de la materia, en específico: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Para dar sustento a la determinación anterior, es necesario conocer el texto normativo de los tratados internacionales mencionados, en lo que a este estudio interesa, los cuales indican lo siguiente:

**Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.**

**"Artículo 36. Disposiciones penales**

1. a) [...]

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38".

**Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971:**

**"Artículo 22. Disposiciones penales**

1. a) [...]

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL





declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20".

**Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.**

**"Artículo 3. Delitos y sanciones**

[...].

2. A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno cuando se cometan intencionalmente, la posesión la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971".



COLEGIO DE  
ISTRADORES DEL  
CIRCUITO.

De las disposiciones internacionales previamente transcritas, se obtiene que si bien establecen obligaciones para los Estados miembros de criminalizar determinadas conductas relacionadas con narcóticos, las primeras dos convenciones mencionadas establecen la posibilidad de someter a las "personas que hagan uso indebido" de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a "medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social", en lugar de sancionarlas penalmente.

Adicionalmente, de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 se deriva que los Estados miembros podrán no sancionar la posesión, adquisición o cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal, cuando sea contrario a "sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico"; situación que se actualiza en el presente asunto, pues como se ha señalado, el autoconsumo de marihuana se encuentra protegido por el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, prerrogativa derivada de la Constitución.

De ahí que si la Constitución Federal protege el derecho de libertad en su más amplio aspecto a favor del gobernado, y de este dimana el derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin que se afecte a terceros, en consecuencia no se transgreden los tratados internacionales sobre la materia suscritos por el Estado Mexicano, debido a que los mismos dan libertad de regulación en los ordenamientos fundantes de cada país, conforme al cual, nuestra República Mexicana ha decidido proteger el derecho humano de autodeterminación y libre ejercicio de



la personalidad de cada individuo que resida en ella sin afectar a la sociedad en general.

Máxime que los tratados internacionales invocados, no prohíben en concreto el autoconsumo para fines lúdicos y recreativos de marihuana.

Por otro lado, en cuanto hace al argumento referente a que el Presidente Constitucional está facultado para suspender o modificar los convenios internacionales, debe decirse que si bien a él le compete denunciar dichos tratados, lo cierto es que no debe perderse de vista, que de conformidad con el Derecho Internacional, el Estado Mexicano, al suscribir un tratado, se obliga en todos sus términos, salvo que realice una reserva expresa, de modo que no deben pasar desapercibidas las obligaciones que ha contraído nuestro país al firmar diversos tratados en materia de Derechos Humanos, tales como son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José de Costa Rica, abierta a firma el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y EGRESOS  
TRATADO DEL  
CONSTITUCIONAL

nueve, que en su artículo primero, numeral 1, dispone lo siguiente:

**Convención Americana Sobre Derechos  
Humanos**

***“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos***

***1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.***

Disposición Internacional de la que se deduce el deber de los Estados Partes de la Convención, de **respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.**

Bajo ese contexto, si bien al Presidente de la República es al poder público que le compete denunciar,



suspender y hacer reservas de los tratados internacionales que suscriba el Estado Mexicano, lo cierto es que sobre la materia, el recurrente adhesivo no aduce que exista reserva alguna en relación a la prohibición del autoconsumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, máxime que de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro país se encuentra obligado a respetar **los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento internacional y a garantizar su libre y pleno ejercicio.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COLECCIÓN  
PARA EL  
RECURSO

Lo que además es acorde al marco constitucional conforme al cual se protegen los derechos de libertad del individuo, a fin de que éste pueda ejercer de forma integral su autonomía, de donde se deriva su derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuya efectividad en su ejercicio pretende el quejoso al promover el juicio de amparo indirecto, que es recurrido en esta instancia.

De ahí que el argumento que expone el recurrente adhesivo, no configura un motivo de improcedencia del

medio extraordinario de defensa de que se trata, por lo que no puede sobreseerse.

En el mismo sentido, con relación a la expresión del Presidente de la República relativa a que es facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; se tiene que dicha facultad encuentra un límite implícito en las relaciones individuales que no interfieren en la órbita de la acción de otra u otras personas.

Esto es, si bajo el marco constitucional se protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, las facultades con que cuenta el Senado no pueden interferir en la esfera jurídica de cada ser humano, pues el ejercicio del derecho de su autonomía no puede ser vedado por ninguna autoridad, siempre que se respeten los límites del mismo, situación que propone defender el quejoso en el presente asunto.



JUAN CARLOS  
MARTINEZ ADAM  
PRIMER



De ahí que la afirmación del recurrente adhesivo, no configure causa de improcedencia alguna.

Ahora, por lo que hace a los argumentos en los que el recurrente adhesivo aduce que el juicio de amparo promovido por [REDACTED] es improcedente porque con su pretensión se afectan derechos de la sociedad en general, deja de protegerse a la institución de la familia, su eventual concesión infringiría la naturaleza y fines perseguidos del medio extraordinario de defensa y que tal protección viola la Ley Suprema de la Unión, que está conformada por la Constitución, las leyes federales que emanen de ella, así como los Tratados Internacionales que estén de acuerdo con la misma, tales motivos de improcedencia implican un estudio del fondo del asunto, por lo que deben desestimarse.

Se estima lo anterior porque el análisis del fondo del asunto, involucra el estudio de proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada *-prohibición del consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos-*, que a su vez implica el examen de los fines perseguidos



COLO  
NOTA DEL  
CIRCUITO.

con el sistema de prohibiciones administrativas, su idoneidad y es este ámbito; la afectación a la salud, el desarrollo de la dependencia, la propensión a utilizar drogas "más duras" y la inducción a la comisión de otros delitos.

Por consiguiente, los argumentos relativos a que el juicio de amparo es improcedente, porque de concederse se afectaría a la sociedad en general, a la familia, e iría en contra de su naturaleza y fines perseguidos, dado que su solución involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, tales alegaciones deben desestimarse.

UNO TIO.  
MATERIA AL  
PRIMER

Esa determinación encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro, texto y datos de publicación siguientes:

**"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.** Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente





*relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.*

(Jurisprudencia: P./J. 135/2001. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XV, Enero de 2002. Página: 5).

**QUINTO.** Al no existir alguna otra causa de improcedencia propuesta por las partes, o bien, que se advierta de oficio, con fundamento en los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo del dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, este tribunal considera que carece de competencia legal para conocer del tema de constitucionalidad que subsiste, porque ello es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A fin de corroborar la afirmación anterior se toma en cuenta el sentido de lo resuelto en la sentencia recurrida,



COLEGIO DE JUECES  
DE LA FEDERACIÓN  
CIRCUITO.

por lo que hace al fondo del asunto, la cual se sustentó en los razonamientos que enseguida se resumen:

—En primer término el Juez de Distrito destacó su competencia legal para conocer y resolver el asunto, y luego precisó que los actos reclamados consistían en la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, así como su respectiva aplicación a través del oficio de doce de noviembre de dos mil quince.

—Asimismo indicó que en virtud de que no se impugnaron por vicios propios se dejaban de tener como actos reclamados el refrendo de los ordenamientos impugnados, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo.

—Enseguida, advirtió la certeza de los actos reclamados y posteriormente analizó las causales de





improcedencia invocadas por las autoridades responsables.

- Hecho lo anterior, el juez procedió al examen de los conceptos de violación reiterando que la parte quejosa reclamaba la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, con motivo del primer acto de aplicación, mismo que hizo consistir en el oficio de doce de noviembre de dos mil quince, signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, se comunica a la parte quejosa que no podía serle expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (índica y americana o



SECRETARÍA DE  
JUSTICIA  
INSTRUMENTO DEL  
JURISDICTO.

marihuana, su resina, preparados y semillas); así como Tetrahidrocannabinol (THC).

- Al respecto, precisó que de las constancias que integraban el juicio de amparo se advertía la existencia del oficio de doce de noviembre de dos mil quince, en el que se aplicaron los preceptos reclamados; el que constituía el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucional al no advertirse que exista alguno previo en su perjuicio.

- Luego, refirió que antes de abordar el análisis de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, convenía realizar una reflexión sobre los temas medulares que el impetrante de garantías señaló en el escrito de demanda, siendo esos temas: “El derecho a la salud y la dignidad humana”, y en tal propósito efectuó un examen al marco constitucional, así como al marco jurídico internacional y la doctrina respectiva.

UNTO TRI  
MATERIA A  
PRON



— Con base en todo lo anterior, concluyó que eran infundados los conceptos de violación, y por tanto determinó que debía negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra de los preceptos legales reclamados, negativa que debía hacerse extensiva respecto de su acto concreto de aplicación, en virtud de que dicho acto no se atacó por vicios propios, sino como una consecuencia directa de la aplicación de las normas impugnadas.

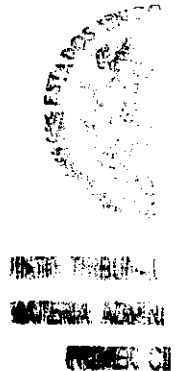


AL C. J. E.  
MEXICO  
CIRCUITO.

Por su parte, de la lectura a los agravios esgrimidos en el presente recurso de revisión, se advierte que la parte quejosa, ahora recurrente, combate exclusivamente los aspectos relativos a la constitucionalidad de la ley reclamada, a saber, la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, por considerarlos violatorios de los derechos a la dignidad humana, identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal,

derecho a disponer de la salud propia, dignidad y pluralismo, aduciendo además la transgresión a los límites objetivos de la facultad del Estado de legislar en materia de salubridad general y de establecer delitos y faltas contra la Federación.

De acuerdo con lo antes expuesto, es patente que la materia de fondo del asunto, que subsiste y debe abordarse en el recurso de revisión, versa sobre la inconstitucionalidad de una Ley Federal, como lo es la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, por cuanto hace a artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368; por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia originaria para conocer del presente asunto corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





En efecto, si bien conforme a la esfera de competencia que establece el punto cuarto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo del dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, se delegaron facultades a los tribunales colegiados para que conocieran asuntos de constitucionalidad de leyes, resulta que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para resolver el problema en cuanto a la constitucionalidad de esas normas porque el tema del asunto no está comprendido en las hipótesis que dicho acuerdo prevé en el punto cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), según se expone a continuación:

A) Las normas combatidas no corresponden a un ordenamiento local o a un reglamento;

B) No existe jurisprudencia sobre el tema debatido, inclusive, aún pendiente de publicación; y

C) Sobre los temas planteados no existen tres precedentes del pleno o de las salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia.

Por último, la cuestión relativa a si el asunto en sí mismo considerado o por el estudio que deba realizarse reviste interés excepcional o sea inédito y se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un aspecto que sólo ese alto tribunal puede decidir.

Por virtud de la conclusión alcanzada por este Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria, se estima que por el momento resulta innecesario realizar el análisis de los argumentos formulados por el Presidente de la República y el Secretario de Salud, en su oficio de revisión adhesiva, dado que por virtud de las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes de este fallo, han quedado desestimadas las razones de improcedencia



IMP. 1000  
MATERIA ADJ.  
PRIMER





propuestas y de la lectura de los conceptos de agravio esgrimidos, se advierte que se encuentran relacionados con el fondo del asunto, y cuyo estudio dependerá de lo que resuelva el Máximo Tribunal de la Nación respecto de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo del dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, procede remitir los autos al alto tribunal para los efectos legales procedentes.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** En la materia del recurso competencia de este tribunal colegiado, **no se sobresee** en el juicio de amparo.

**SEGUNDO.** Se **reserva competencia** originaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud.

**TERCERO.** Previa formación del cuaderno de antecedentes, **remítanse los autos** a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**NOTIFÍQUESE, personalmente** al quejoso, con testimonio de esta resolución y por medio de oficio al Juzgado de origen; remítase el expediente de amparo indirecto y las demás constancias que integran este cuaderno, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes, y con copia de las constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; en su oportunidad, archívese el presente asunto.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, **Pablo Domínguez Peregrina**, Presidente, **María Elena Rosas López** y **Marco Antonio Bello**



JUNTO TRIBU  
MATERIA ADU  
PRIMER



**Sánchez;** lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

Firman los Magistrados con la Secretaria de Acuerdos, **Aurora Álvarez Plata**, que autoriza y da fe.

EL QUE SUSCRIBE, **CARLOS FELIPE ALCÁNTARA ORTIZ**, SECRETARIO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, CERTIFICA: QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN, CONSTANTES DE **CUARENTA Y UN** FOJAS ÚTILES, SON FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL AMPARO EN REVISIÓN **[REDACTED]** DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO **2155/2015**, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO **PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**, INTERPUESTO POR **[REDACTED]** SE CERTIFICAN EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN INSERTA. CIUDAD DE MÉXICO; **DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**. DOY FE.

**EL SECRETARIO DEL QUINTO TRIBUNAL  
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO**

**CARLOS FELIPE ALCANTARA ORTIZ**



INTO TRIBUNAL COLEGIADO  
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

<u>C/Beis</u>	Copias
<u>Sin</u>	Anexos
<u>---</u>	Tomos
<u>Can</u>	Firma
<u>---</u>	Autógrafo
<u>---</u>	Recibió

## JUICIO DE AMPARO

Asunto: Se interpone recurso de revisión.

**CC. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO.**

Por conducto del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

**P R E S E N T E.**

[REDACTED] promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] así como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los Licenciados en Derecho [REDACTED]

[REDACTED] los cuales pueden actuar de manera conjunta o separadamente, ante Ustedes, con el debido respeto comparezco para exponer:

8725

Que por medio del presente escrito vengo a interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo al rubro citado, en términos de los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Amparo, y conforme a los siguientes:

### ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de noviembre de 2015, se solicitó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una autorización para el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (Índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros Δ6a (10ª), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"). Esto es, se solicitó la autorización para que el peticionario pueda consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos.

Asimismo, solicité la autorización para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de

comercio tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

2. Con oficio No. de ingreso [REDACTED] del 24 de noviembre de 2015, notificado el mismo día, el C. Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios negó la autorización solicitada por la parte quejosa para el consumo de cannabis sativa y THC, lo que implica el primer acto de aplicación de los artículos impugnados.

3. Con fecha 2 de diciembre de 2015, el que suscribe presentó demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades responsables y por los siguientes actos:

a) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 237, 245, 247, 248, 368 y 479.

b) De las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, reclamo la expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479.

c) Del Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se le reclama la aplicación en mi perjuicio de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

d) Los efectos y consecuencias, incluyendo actos y procedimientos, que deriven o puedan derivar de los referidos actos reclamados.

4. Lo anterior, pues se vulneran los derechos a la dignidad humana identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de la salud propia. Asimismo, se transgrede la obligación de que cualquier restricción a los derechos humanos persiga un bien imperativo, sea instrumental para conseguir los fines deseados y que sea proporcional. Finalmente, se vulneran los principios de libertad, dignidad y pluralismo y se transgreden los límites objetivos de la facultad del Estado de legislar en materia de salubridad general y de establecer delitos y faltas contra la federación.

Los derechos y principios transgredidos se encuentran dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 19, 25, 29, 73, fracciones XVI y XXI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el preámbulo y

5

artículos 1° y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el preámbulo y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. La demanda de amparo se admitió a trámite por auto de 17 de diciembre de 2015, por parte del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

6. El 18 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional.

DES  
7. Con motivo de la celebración de la audiencia constitucional, por acuerdo de 28 de abril del año en curso, se ordenó notificar a la quejosa por medio de lista la sentencia dictada en el amparo citado al rubro.

#### **II. OPORTUNIDAD.**

ADMINISTRATIVA DE

La presentación del presente recurso es oportuna, toda vez que el viernes 29 de abril del año en curso se notificó por lista a la quejosa – ante la imposibilidad de notificarla personalmente, conforme a lo instruido por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo– la resolución ahora recurrida, por tanto, el plazo para su interposición vence el martes 17 de mayo siguiente.

Ello en virtud de que, conforme a lo previsto en los artículos 19 y 86 de la Ley de Amparo, se computa el plazo de 10 días a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la resolución, es decir, a partir del martes 3 de mayo, sin tomar en cuenta los días sábados y domingos, así como el jueves 5 de mayo.

#### **II. AGRAVIOS.**

##### **PRIMERO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ADECUADAS, CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, EN RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS A LA IDENTIDAD PERSONAL Y A LA DIGNIDAD HUMANA**

En la sentencia de amparo, el Juez de Distrito transgredió los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de

4

las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la demanda de amparo, se sostuvo que la aplicación de los artículos que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud) vulnera los derechos a la identidad personal, derivada de la dignidad humana.

Se alegó que la política prohibicionista contenida en los artículos impugnados vulnera, en perjuicio del quejoso, el derecho a la identidad personal, derivada del derecho a la dignidad humana.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos en la demanda ya que no realizó pronunciamiento alguno en relación con la violación a este derecho, sino que su estudio se limitó al derecho a la salud.

AL COLEGIADO E

Los argumentos que el juzgador de amparo omitió analizar fueron los siguientes:

Los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de marihuana.

No obstante, el autoconsumo de marihuana no es sino la proyección que hace uno mismo de sus preferencias y rasgos que lo diferencian y singularizan del resto de las personas. La prohibición de la siembra, transportación y autoconsumo de marihuana en la Ley General de Salud es una forma inequívoca de apagar, silenciar y desconocer el verdadero ser social de la persona y negar el derecho a la diferencia.

En efecto, los rangos de uso actual han fluctuado en los últimos 40 años, pero se puede decir que el cannabis es una droga que forma parte de la cultura, usada particularmente durante la etapa de la vida de exploración juvenil y de emancipación, en una gran cantidad de países ricos.

El consumo de marihuana y la alteración consecuente del estado de ánimo se lleva a cabo por una pluralidad de motivaciones. La marihuana se consume por curiosidad, búsqueda espiritual, búsqueda de placer,

por aburrimiento, interacción social e, inclusive, por búsqueda de identidad.<sup>1</sup>

Todas éstos son motivos orientados a la definición del propio Yo en sociedad y a la singularidad personal.

En síntesis, la prohibición del consumo de Marihuana para quien de manera consciente decide utilizarla implica, no solo proscribir el uso de una sustancia particular, sino también la negación y supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad y a sus propios caracteres y acciones. Por lo anteriormente expuesto, la prohibición a la siembra, transportación y autoconsumo de marihuana debe ser declarada inconstitucional.

Así las cosas, se debe declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan el derecho a la identidad personal.

No obstante lo anterior y que el Juez de Distrito omite realizar un pronunciamiento en relación con la violación a este derecho, por lo que la sentencia viola los principios de congruencia y externa y exhaustividad.

En efecto, todos los argumentos del Juez de Distrito se limitan a analizar si la política prohibicionista se trata de una restricción válida al derecho a la salud, sin analizar previamente si se restringe el derecho a la identidad personal.

Inclusive, si se adujera que los derechos a la identidad personal, el principio de pluralismo y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

Como ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes judiciales, para restringir un derecho fundamental se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria e instrumental para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una

<sup>1</sup> Dorothy E. Dusek y Daniel A. Girdano, "Drogas: un estudio basado en los hechos", (trad. Del inglés: Piar Candela Martín), México, SITEA, 1990, Cap. 2, pp.23-31.



afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.<sup>2</sup>

En primer lugar, la política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido. La imposición de un estándar único de una vida saludable no es admisible para un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. La salud del individuo es algo que no atañe a nadie salvo a él y no puede ser impuesta contra su propia voluntad.

En segundo lugar, la política prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones, ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma<sup>3</sup>. Esto es, resulta evidente que la Política Prohibicionista no es un medio adecuado para conseguir el fin deseado. Finalmente, la política prohibicionista no es proporcional, toda vez que: 1) suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos; 2) existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores, y 3) los perjuicios que genera la política pública son mayores a los beneficios que genera.

En este sentido, es claro que el Juez de Distrito omitió realizar este análisis de proporcionalidad de los artículos reclamados, a la luz del derecho a la identidad personal.

**SEGUNDO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ADECUADAS, CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, EN RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS A LA PROPIA IMAGEN, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA.**

Violación de las disposiciones de los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, debida fundamentación y

<sup>2</sup> RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, la. LXVI/2008; pág. 462.

<sup>3</sup> Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pág. 43.

a

motivación, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la demanda de amparo, se sostuvo que la aplicación en su perjuicio de los artículos que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud) vulnera los derechos a la personalidad, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la dignidad humana.

Se alegó que la política prohibicionista contenida en dichos preceptos vulnera los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la dignidad humana.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso, puesto que no realizó estudio ni pronunciamiento alguno en relación con la violación a los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

Los razonamientos expuestos en la demanda de amparo y que indebidamente omitió analizar el Juez de Distrito son los siguientes:

Los artículos 234, 235, 237, 245, 248 y 368 de la Ley General de Salud prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de marihuana.

Si se resolviera que la prohibición de sembrar, transportar y auto consumir marihuana es constitucional, tal parecería que la ventaja y derecho de disponer sobre el cuerpo propio solo se conferiría a quienes ejercen los derechos en la forma y términos que los órganos del Estado mejor lo consideran. Si solo se protegen los derechos del adepto y del partidario de la política de Estado, entonces no hay razón para considerar que existe el derecho a desarrollar la singularidad personal de manera libre, a disentir y a perseguir la propia visión de una vida buena.

Los artículos impugnados de la Ley General de Salud nos expresan que no se puede utilizar el cuerpo y la imagen para las metas y objetivos que uno considera relevantes; que no se puede disponer de forma libre y autónoma de la persona, y que el disidente y el opositor deben ser perseguidos penalmente. Esto es, los artículos impugnados son una señal inequívoca que el Estado abandona su papel de centinela y

127  
protector de los derechos humanos, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

De acceder a la visión de Estado que propugna la Ley General de Salud, los derechos a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad se barren de todo sentido y relevancia en una sociedad liberal y democrática.

Solo bajo la plataforma del respeto al libre desarrollo de la personalidad es que se puede proteger la singularidad de todos los seres humanos. El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre, informada y responsable su proyecto de vida, así como la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.

Respecto a los argumentos hechos valer en la demanda de amparo sobre la violación a los derechos de la personalidad, propia imagen, intimidad y libre desarrollo de la personalidad, el Juez de Distrito guarda silencio, en contravención a los principios de congruencia externa y exhaustividad, por ello, remito al *ad quem* a los argumentos sobre alcance y aplicación dichos derechos, los cuales acreditan que la política prohibicionista es restrictiva de los mismos.

Por lo pronto, es suficiente manifestar que si el quejoso pretende individualizarse y proyectar una imagen hacia terceros, de una persona que a consciencia y deliberadamente consume Cannabis, el Estado no puede restringir tal proyección de sí mismo, salvo que hubiere violaciones a derechos de terceros (lo que no sucede en el caso concreto). Esto es, la política prohibicionista viola el derecho a la propia imagen, toda vez establece una injerencia extraña en la imagen de sí mismo que el quejoso pretende mostrar.

Por otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege la libertad para que cada particular pueda vivir su vida conforme a sus propios ideales de vida buena, haciendo todo aquello que para sí mismo sea correcto, siempre que no afecte derechos de terceros. En el caso concreto, la utilización de la vida, el cuerpo y el tiempo para consumir Cannabis es una conducta que desea desempeñar el quejoso, dentro de su propio proyecto de vida. Es inevitable arribar a la conclusión que si el Estado le prohíbe llevar a cabo tal conducta les está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por otro lado, no obstante que en la demanda se llevó a cabo un análisis jurídico exhaustivo de las razones por las que se violaba el derecho a los derechos de la personalidad, el Juez de Distrito se limita a negar el

que la política prohibicionista viole los derechos invocados o imponga coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

El quejoso ha decidido usar su cuerpo y su vida conforme a su propia concepción de lo que es bueno para ellos, mediante el consumo responsable y consciente de Cannabis, pero el Estado Mexicano les prohíbe utilizarlo de tal forma, basado en prejuicios sociales y con la pretensión de protegerlos contra sí mismos. Es evidente que el Estado pretende imponer coercitivamente una visión de lo que es bueno y correcto, y les pretende imponer que utilicen su cuerpo de cierta forma.

Negar sin más ni más que el quejoso tenga razón, pero sin formular juicio alguno que desvirtúe los argumentos formulados, deja en evidencia que se omite dar respuesta a la demanda de amparo. Esto es, hay una violación a los principios de congruencia externa y exhaustividad respecto al análisis concreto de subsunción y aplicación de los principios de libre desarrollo de la personalidad, intimidad y propia imagen, hechos valer en la demanda.

Finalmente, en la sentencia se señala que no se vulneran los derechos de la personalidad porque, a su juicio, la Ley General de Salud tiene la finalidad importante de preservar la salud, sin embargo, el que el Estado tenga una finalidad importante no es una razón para sostener que se puede, sin más, restringir un derecho humano.

En todo caso, si la finalidad fuera importante, habría que también analizar si se cumple con los demás elementos de los exámenes de escrutinio fijados por la Suprema Corte para normas que restringen derechos humanos, tales como el que la medida sea instrumental o necesaria para alcanzar la finalidad deseada, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y que la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.<sup>4</sup> No obstante ello, el Juez de Distrito no realizó este estudio a la luz de los derechos fundamentales que se invocaron en la demanda de amparo, esto es, los derechos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

Inclusive si se adujera que los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra,

<sup>4</sup> RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, la. LXVI/2008; pág. 462.

2

cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

En efecto, para restringir un derecho fundamental se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria e instrumental para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

Como se desarrolló en la demanda de amparo, al llevar a cabo el examen respectivo resulta evidente que la medida adoptada restringe de manera excesiva el derecho a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, por lo que de ningún modo puede considerarse legítima.

COLEGIADO F  
STRATIVA DE  
RCUITO

Así las cosas, se debe concluir que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. En consecuencia, se debe revocar la sentencia recurrida y ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita al quejoso sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado.

### **TERCERO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ADECUADAS, CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, EN RELACIÓN AL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN PERSONAL Y CORPORAL, LIBERTAD INDIVIDUAL Y DE DIGNIDAD HUMANA**

Violación de las disposiciones de los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la demanda de amparo, se alegó que la aplicación de los artículos que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud) vulnera los derechos a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana.

Se adujo que la política prohibicionista no cumplía con los estándares de escrutinio fijados por la Suprema Corte para las leyes que transgreden derechos humanos, en el presente caso, los derechos a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y se limitó a establecer que la política prohibicionista no vulneraba el derecho a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana, sin dar razones concretas al respecto.

Los razonamientos expuestos por el quejoso y que omitió tomar en cuenta el Juez de Distrito son los siguientes:

Los artículos 234, 235, 237, 245, 248 y 368 de la Ley General de Salud prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de marihuana.

La elección a consumir marihuana es una decisión profundamente personal. Es el individuo quien toma la decisión y quien se ve afectado en su condición anímica. Solo el sujeto padece un cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia al consumir marihuana. Adicionalmente, es el sujeto quien responsablemente debe vivir con las consecuencias producto de su decisión.

El derecho a la autodeterminación personal y corporal implica que los seres humanos tienen para sí el derecho moral y la responsabilidad jurídica de afrontar las decisiones más importantes sobre el significado y valor de sus propias vidas. No es legítima la intervención por el Estado sobre la base de que se esté protegiendo moral o físicamente al individuo, contra su propia voluntad.

El derecho a la autodeterminación o autonomía personal garantiza al individuo el trato de adultos responsables que pueden asumir el control de sus vidas y afectar concienzudamente su integridad corporal y salud personal.

Por otro lado, el consumo personal y razonado de marihuana no perturba o afecta las acciones de tercero alguno. Los efectos de la

CH

marihuana los reciente, exclusivamente, la persona que la consume, sin que haya efecto pernicioso alguno para el resto de la sociedad. La afectación directa la sufre la persona que lo consume.

La prohibición al consumo de marihuana en la Ley General de Salud es una prueba clara de la forma en que desde el poder legislativo se han impuesto sobre la persona concepciones particulares de la santidad del cuerpo humano y se ha legislado en asuntos de conciencia personal, creencias, elección y autonomía personal.

Toda vez que la Ley General de Salud vulnera la autonomía individual del quejoso, debe ser revisado desde la óptica de un escrutinio severo. Dicha normatividad prohíbe el consumo de marihuana con el objeto de proteger la salud. Lo hace, pues considera su labor el disuadir, a su juicio, malos hábitos que pudieran afectar la salud particular del individuo. Esto es, el Estado asume que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su cuerpo, de su mente y de su persona.

Si bien existe consenso en que la protección a la vida, la salud e integridad de los seres humanos son algunas finalidades importantes y necesarias de todo Estado, éstas no son las únicas finalidades del Estado ni pueden protegerse a costa de otros intereses de la misma jerarquía. La Protección de la Salud, suponiendo que en el caso concreto estuviere en juego, puede ser un propósito valioso del Estado, pero no sagrado ni desprovisto de límites.

Los artículos impugnados de la Ley General de Salud plasman una concepción metafísica concreta sobre la integridad del cuerpo humano y de la persona. Estos artículos suponen que el cuerpo es algo sagrado que debe ser protegido de toda alteración, cambio de percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Adicionalmente, los artículos impugnados plasman la concepción que la potestad del Estado de proteger la salud y el cuerpo humano por encima de cualquier interés o derecho humano.

Si el derecho contra-mayoritario a la autodeterminación significa algo, es al menos una protección frente a la modernidad gestora del Estado para imponer valores sociales y la fijación de criterio y parámetros respecto de la vida buena y del uso apropiado del cuerpo humano.

En efecto, la obligación del Estado para defender la salud no está exenta de la confrontación con otros valores constitucionales y con regularidad debe ceder ante otros intereses, como en el caso de la muerte con dignidad, en el caso de los derechos reproductivos, libertad

de culto, cuando está en juego la autonomía, la auto-propiedad, la identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad y la propia imagen.

Desde una perspectiva secular y pluralista que respete la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos, no se puede admitir que el legislador imponga coercitivamente una visión de lo que es valioso para cada individuo. En efecto, a partir del derecho a la autodeterminación personal y corporal se debe admitir que cada persona puede decidir de qué forma vive, el trato que da a su cuerpo y los valores, metas y conductas bajo los cuales es digno tratar la vida y a la persona.

Así, en esta perspectiva secular y pluralista, no se puede sino concluir que la disposición que uno hace sobre su propio cuerpo corresponde única y exclusivamente a cada particular. Cuando, como en el caso concreto, el Congreso interfiere con la esfera privada de autonomía, bajo el argumento de proteger la salud del individuo, pero, en realidad, para imponer una ideología concepción política sobre la santidad del cuerpo, entonces la intervención en la autonomía personal y corporal no solo es inconstitucional, sino también intelectual y moralmente indefendible.

No obstante lo anterior, afirma erróneamente el Juez a quo en la sentencia recurrida que:

*"En este segundo aspecto, dada la afectación que el consumo de los referidos estupefacientes y psicotrópico generan para la salud, atendiendo a lo sostenido por los órganos emisores de la normativa impugnada, y de los diversos tratados internacionales a los que se ha hecho referencia, también debe tomarse en cuenta que los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de autodeterminación y a la identidad personal se encuentran delimitados por los derechos humanos que asisten a los terceros que pueden verse afectados por la conducta que desarrollen aquéllos con motivo del consumo de esos narcóticos, atendiendo al principio de interdependencia que existe entre todas esas prerrogativas, como se advierte de lo previsto en el artículo 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ahí que dentro de esos derechos humanos no encuentran cabida las conductas que con independencia de afectar o no los derechos de quien las pretende realizar, implican un grave riesgo para la eficacia de los derechos humanos de otras personas.*

*Por ende, si quien consume marihuana o THC sufre una alteración temporal que, entre otras consecuencias, se traduce en una reducción gradual de funciones cognitivas y motoras, y con motivo de su consumo continuo probablemente genere una adicción, debe estimarse que, en adición a los argumentos expresados sobre la afectación a la salud y a la dignidad de los consumidores de esas sustancias, la referida conducta también conlleva un riesgo considerable para terceros, por lo que se trata*



de conductas que por su afectación a los derechos humanos de quien las realiza y de terceros, obligan al Estado a adoptar diversas medidas para evitar su desarrollo.

(...)

Por lo expuesto, se estima que en el caso de la prohibición de la conducta consistente en el consumo de marihuana o THC con fines recreativos o lúdicos, los órganos del Estado Mexicano que han establecido la regulación materia de análisis, si han expresado razones suficientes para determinar que esa conducta dada su afectación a la dignidad y a la salud de quien pretende realizarla, así como a la eficacia de los derechos humanos de terceros, se encuentra fuera del ámbito de tutela de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de autodeterminación y del derecho a la identidad personal.

Incluso, tomando en cuenta el referido alcance el derecho a la protección a la salud reconocido en el artículo 4º, párrafo quinto, constitucional, tampoco puede sostenerse válidamente que la prohibición en comento lo transgrede, pues aun suponiendo que ese derecho fundamental tuviera una expresión que permita disponer de la salud personal para no gozar de buena salud, lo cierto es que dentro de esa prerrogativa no podría encuadrarse la consistente en realizar conductas que colocan a los individuos en una situación de riesgo para la eficacia de los derechos humanos de las personas con las que necesariamente se interrelacionan, y de la sociedad en general.

En efecto, si bien a decir del quejoso la salud es una cuestión que no incumbe a nadie más que al propio individuo, lo cierto es que el Estado tiene la obligación de proporcionar a toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de enfermedades, así como de las adicciones y la lucha contra ellas, no sólo a un individuo en particular como lo sostiene el impetrante de amparo, sino a la población en general, pues el hecho de que éste no desee tener un nivel de vida acorde a lo que el derecho nacional como internacional considera como saludable, no significa que se esté coartando su derecho de elegir lo que considere mejor para su desarrollo de la personalidad o su autodeterminación, sino únicamente el Estado cumple con la obligación constitucional y legal que le atañe, esto es, la protección del derecho a la salud de todos los individuos, esto es, de la sociedad en general.

En este orden de ideas, no existe violación al principio de autodeterminación, porque se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz los derechos de los gobernados, como resulta ser en la especie el de la dignidad humana, e incluso el de la salud, de la población en general."

Respecto a que supuestamente el Estado tiene la obligación de proteger la salud física y mental de la población general, se trata de una afirmación gratuita del Juez de Distrito, ya que constituye una afirmación absoluta en la que no se tomaron en cuenta los argumentos sostenidos por la quejosa en el escrito de demanda, esto es, sin que se haga un estudio sobre los derechos que se aducen vulnerados, pues, en todo caso, el Juez de Distrito únicamente hace referencia al derecho a la salud.

17

Negar sin más ni más que el quejoso tenga razón, pero sin formular juicio alguno que desvirtúe los argumentos formulados, deja en evidencia que se omite dar respuesta a lo sostenido en la demanda de amparo. Esto es, hay una violación a los principios de congruencia externa y exhaustividad respecto al análisis concreto de subsunción y aplicación de los principios de autodeterminación y libertad individual que fueron desarrollados en el escrito de demanda.

Finalmente, si se adujera que los derechos a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

En efecto, para restringir un derecho fundamental se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria e instrumental para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.<sup>5</sup>

Por lo tanto, si se lleva a cabo el examen de escrutinio respectivo, se llega a la conclusión que la medida consistente en la política prohibicionista resulta una restricción ilegítima de los derechos constitucionales, como a continuación se sintetiza:

En primer lugar, la política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad, bajo ninguna óptica puede ser permitido. Adicionalmente, la imposición de un estándar único de una vida saludable no es admisible para un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. La única excepción válida para la autodeterminación es el que estén en juego derechos de terceros, lo que no sucede en el caso concreto.

En segundo lugar, la política prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones, ya

<sup>5</sup> RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, la. LXVI/2008; pág. 462.

que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma. Esto es, de la medida impuesta no se siguen los fines buscados, por lo que no se puede hablar de instrumentalidad de la medida.

Finalmente, la política prohibicionista no es proporcional, toda vez que suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos, en este caso el derecho a la autodeterminación; existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores, y porque los perjuicios que genera la política pública son mayores a los beneficios que genera.

Respecto a la obligación de llevar a cabo un análisis de proporcionalidad y escrutinio, en lo que concierne al derecho a la autodeterminación y libertad individual, el Juez de Distrito se limita a sostener erróneamente que la política prohibicionista persigue la finalidad importante de tutelar la salud, que se trata de una restricción válida a la autodeterminación, que la autorización de consumir marihuana afecta a terceros y que las medidas son necesarias y proporcionales para que el Estado cumpla con su obligación de proteger la salud a la sociedad en general.

Además, de omitir llevar a cabo un test de proporcionalidad de la medida a la luz de los derechos de autodeterminación y libertad individual, el Juez de Distrito, a lo largo de la sentencia recurrida, hace una indebida motivación cuando parte del perjuicio de que el consumo de marihuana genera afectación a la salud de terceros. No existe ninguna evidencia científica de que el consumo de marihuana pueda afectar a alguien otro que quien la consume. La marihuana es una sustancia cuyo consumo única y exclusivamente genera riesgos de salud para quien la consume. No tiene efectos contagiosos, no puede ser utilizada para dañar a terceros y no puede ser utilizada como arma. En resumidas cuentas, es una simple planta. Así las cosas, es absurdo afirmar que la autorización para su producción o consumo afecte a la *"sociedad en general"* o que se trate de alguna excepción al derecho a disponer sobre la propia persona y sobre la salud personal.

A menos que por *"afectación de terceros"* la sentencia se refiera a un daño concreto, comprobable científicamente, el supuesto daño a terceros realmente se refiere al rechazo moral o reacción emocional adversa que le genera el que alguien consuma marihuana. Si ese es el caso, el supuesto daño a terceros se sustenta en un prejuicio social, no en un daño constatable científicamente. El derecho y las restricciones a los derechos humanos no se pueden basar en supuestos daños basados en estigmas o prejuicios. En una democracia liberal, por

encima de los prejuicios o supuestos daños hipotéticos, el Estado está obligado a aceptar las diferencias. Así las cosas, no se puede afirmar que hay una excepción al derecho de autodeterminación personal y corporal porque se afectara a terceros, pues no existe tal daño.

Por todo lo anteriormente expuesto, se debe concluir que la sentencia viola en perjuicio del quejoso los principios de congruencia y exhaustividad, así como indebida fundamentación y motivación.

En consecuencia, es procedente revocar la sentencia de amparo impugnada y se debe ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita al quejoso sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado.

**CUARTO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ADECUADAS, CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, EN RELACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALUD PERSONAL**

ADMINISTRATIVA DE  
CIRCUITO

Violación de las disposiciones de los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la demanda de amparo, se sostuvo que la política prohibicionista sobre la siembra, cultivo, cosecha, preparación para el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud) vulnera el derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar buena salud.

Se alegó que la política prohibicionista transgredía el derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la obligación del Estado de respetar las decisiones y disposición de la salud que hace cada cual sobre su propio cuerpo.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y se limitó a establecer que la política prohibicionista no vulneraba el derecho a la salud, como disposición de la salud propia, sin más ni más.

20

Los razonamientos expuestos por el quejoso y que omitió tomar en cuenta el Juez de Distrito son los siguientes:

El derecho a la salud se encuentra reconocido en los artículos 4° de la Constitución, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo de San Salvador, conforme a los cuales el quejoso es titular de este derecho.

En cuanto al alcance del derecho a la salud, la Ley General de Salud dispone lo siguiente:

*"Artículo 2°.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:*

*I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;*

*II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;*

*III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;*

*IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;*

*V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población."*

Asimismo, el Protocolo de San Salvador establece lo siguiente:

*"Artículo 10. Derecho a la Salud.*

*1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social."*

Para analizar de manera integral el derecho a la salud y su complejidad, es preciso hacer referencia a la naturaleza del derecho a la salud como un derecho subjetivo, tanto de recibir servicios de salud como de no recibirlos; de tener un alto nivel de bienestar físico y de no tenerlo.

Daniel Mendonca, en su libro "Los Derechos en Juego" propone una definición de derecho subjetivo, en los términos siguientes:

*"[D]ecir que alguien tiene un derecho a hacer algo es decir que tiene la libertad de hacerlo. Esa circunstancia se presenta, fundamentalmente, a partir de la concepción de la libertad como la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a hacer u omitir: una libertad es lo opuesto a una obligación. Esta manera de entender la libertad y, consiguientemente, los derechos, consiste, pues, en la ausencia de impedimento o la ausencia de constricción. Pero si se entiende por «impedir» no permitir a otros hacer algo y por «constreñir»*

12

obligar a otros a hacer algo, ambas direcciones parecen parciales, puesto que la libertad, así concebida, comprende, por lo común, tanto la ausencia de impedimento como la ausencia de constricción. De este modo, de acuerdo con el primer componente, un sujeto puede obrar por que no existe norma que prohíba la acción que él considera deseable y, de acuerdo con el segundo componente, el sujeto puede abstenerse de obrar porque no existe norma que imponga la acción que él considera no deseable. Una persona, en suma, está en libertad, o tiene un derecho, para hacer algo, cuando no tiene la obligación de hacerlo u omitirlo.<sup>6</sup>

Ahora bien, parafraseando a Daniel Mendonca, alguien tiene derecho a la salud, y no un mera obligación a la salud, cuando tiene la posibilidad de recibir asistencia médica o de rechazar asistencia médica; cuando tiene la posibilidad de recibir servicios médicos y de oponerse a los mismos; y cuando puede ser ayudado para evitar los riesgos asociados al consumo de Cannabis y puede rechazar cualquier ayuda y asumir los riesgos del consumo de Cannabis.

Por su parte, Eduardo García Máynez, en su libro *Filosofía del Derecho*, explica que los derechos subjetivos tienen una implicación normativa derivada de su carácter optativo, esto es, aun cuando la norma otorgue un solo derecho, de manera implícita está otorgando un segundo derecho, el de escoger entre el ejercicio del derecho o no. Esto implicaría que el derecho a gozar de buena salud conlleva un segundo derecho a disponer de la propia salud y, si uno lo desea, gozar de mala salud.

Así, cuando hablamos del derecho a la salud, forzosamente tenemos que reconocer que el mismo implica la posibilidad de ejercer el derecho a la salud y el de no hacerlo. Con ello se respeta el derecho a la salud como un verdadero derecho y no como una mera obligación jurídica.

Considerar lo contrario, es decir, que el derecho a la salud no incluye la posibilidad de elegir no ejercer el derecho u oponerse a las prestaciones de salud pública, llevaría al absurdo de afirmar que el derecho a la salud tiene el carácter de obligación.

Para explicar este argumento se demuestran aquí las implicaciones lógicas de un derecho y una obligación:

Derecho	D= Px y P-x	Donde "P" es permitido, y "x" es la conducta. Derecho es igual a permitido llevar a cabo la conducta y permitido no llevar a cabo la conducta.
---------	-------------	---

<sup>6</sup> Mendonca, Daniel, *Los Derechos en Juego Conflicto y Balance de Derechos*, Ed. Tecnos, Madrid, 2003, pág. 23.

Obligación	O= Px y Ph-x	Donde "P" es permitido, "Ph" es prohibido y "x" es la conducta. Obligación es igual a permitido llevar a cabo la conducta y prohibido no llevar a cabo la conducta
------------	--------------	---

En este sentido, es claro que la única manera en la que se puede interpretar o disgregar el derecho a la salud es de la siguiente manera: el derecho a la salud implica que la persona titular del derecho tiene permitido disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y, a su vez, que tiene permitido no disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

A la misma conclusión arriba el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general N° 14, en los términos siguientes:

*"El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) (...)*

*8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales."*<sup>7</sup>

En el mismo sentido, es preciso traer a colación la distinción de Isaiah Berlin entre la libertad positiva y la libertad negativa.<sup>8</sup> La libertad negativa consiste en que nadie interfiera en mi actividad o fin, esto es, se viola mi libertad en sentido negativo cuando se me impide hacer algo más allá de lo admisible, que de otra manera podría llevar a cabo. Por otro lado, la libertad positiva consiste en el autogobierno, en la posibilidad de conducir mi vida según mi razón y mis deseos.

Así, a pesar de que todos los hombres tienen derecho a la libertad, existe un límite intrínseco al derecho, esto es, la libertad de las demás personas. Es decir, al vivir en sociedad, se deben de establecer ciertos límites en aras de que cada uno pueda gozar y ejercer dicha libertad. Así las cosas, el Estado establece normas o leyes que regulen la relación entre los hombres, para no caer en una situación de injusticia en que unos cuantos disfruten de la libertad a expensas de la libertad de otros.

<sup>7</sup> Observación general N 2 14 (2000). El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 22 2 período de sesiones, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas.

<sup>8</sup> Berlin, Isaiah, *Dos conceptos de libertad y otros escritos*, Alianza Editorial, Madrid 2011, p. 43-114.

No obstante la legitimidad de estas limitaciones, lo cierto es que hay una esfera del actuar de un sujeto que le corresponde únicamente a él: esto es, una esfera donde no hay afectación a ningún tercero y por lo tanto no resulta válida la intervención de nadie, ni siquiera del Estado.

En conclusión, el Estado no puede interferir en la libertad del sujeto para controlar su salud y su cuerpo; no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia. Asimismo, el sujeto tiene un derecho a no ser sometido a tratamientos o injerencias médicas con en aras de proteger su salud, si no consensu y admite las mismas.

Respecto a esta dimensión del derecho a la salud, el Juez de Distrito no realiza pronunciamiento alguno.

Dicho lo anterior, se sostiene que la política prohibicionista al consumo de marihuana, contenida en los artículos reclamados de la Ley General de Salud, fue establecida para *"combatir el consumo indebido de estupefacientes y sicotrópicos"* como consecuencia de que el mismo se ha convertido *"en una de las adicciones que representan más graves problemas de salud pública"*<sup>9</sup>.

Esto es, el objetivo de la política establecida por el legislador es proteger el derecho a la salud. El problema es que ignora absolutamente el derecho a disponer sobre la salud personal y consumir Cannabis y con ello ejercer el derecho a no perseguir el *"bienestar físico, mental y social"*.

Esto es, el legislador adopta una postura paternalista y opta por no permitir a los ciudadanos gozar de uno de los elementos fundamentales de su derecho a la salud, pues considera que en tratándose del consumo de Cannabis, los ciudadanos no cuentan con el derecho de elegir si ejercen su derecho o no.

En consecuencia, la política prohibicionista que prohíbe la siembra, preparación, posesión y otras conductas relacionadas con el Cannabis vulnera el derecho a disponer sobre la salud propia, pues supone que la salud personal es una obligación y no un derecho subjetivo, el cual los particulares pueden elegir disfrutar o no.

El Estado justifica la política de prohibición al consumo de las sustancias referidas, en la protección a la salud de los ciudadanos. De esta manera, actúa de una manera paternalista injustificada e incurre en un

<sup>9</sup> Exposición de Motivos de la Ley General de Salud, 15 de noviembre de 1983.



desconocimiento absoluto de la racionalidad, madurez intelectual, derechos y dignidad de sus gobernados.

- *La prohibición parte de prejuicios basados en valoraciones morales.*

El uso de marihuana ha sido repudiado legal y moralmente. Se ha generado un estereotipo en torno al consumo de estas sustancias, que parte de suposiciones que son altamente cuestionables. Lo cierto es que la política prohibicionista no está sustentada en un estudio científico del daño que genera el consumo de Cannabis a los particulares, sino en juicios morales con una aparente neutralidad ética, para que la sociedad crea que no hay alternativas para decidir sobre el uso de la marihuana, como si fuera una decisión entre el bien y el mal, decisión de rechazo que un ser moral no puede dejar de tomar.

En otras palabras, el Estado adopta una actitud panglosiana -según la cual, el rechazo es el mejor de los mundos posible- y procede a engrasar los engranajes del mecanismo social que fija la selección de repudio. En última instancia, ser moral no es adoptar la decisión del Estado, sino que consiste en saber libremente que las cosas pueden ser buenas o malas. Pero no significa saber, y mucho menos saber con certeza, qué cosas son buenas y qué cosas son malas.

En este sentido, se podría decir que la prohibición es más de tipo moral que de salud pública. Esto es, el Estado busca implementar cierto tipo de ideologías y formas de vida buena que considera adecuadas, a expensas de los deseos, ideas y creencias de cada persona.

- *Implicaciones de la postura paternalista en torno a la salud.*

Ahora bien, si consideramos que entre los fines legítimos del Estado está el proteger la salud de los gobernados mediante la prohibición del consumo y producción de sustancias como el marihuana, forzosamente tenemos que aceptar que esta medida estatal es legítima respecto de cualquier sustancia que cause daños a la salud.

En este sentido, sería legítimo prohibir sustancias como el tabaco y el alcohol, e incluso el Estado podría decidir prohibir el consumo de azúcar porque causa diabetes; el consumo de grasa, porque causa colesterol; el consumo de cafeína porque causa dependencia, etc.

Por reducción al absurdo, si el Estado decide tratar a sus ciudadanos como seres que no son suficientemente racionales y maduros para tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y persona, entonces

52

podría suprimir cualquier derecho y libertad con la que cuentan e imponer exclusivamente un modelo de vida buena. Así caeríamos en el absurdo de pensar que el Estado puede suprimir el derecho a votar, el derecho a contraer matrimonio o a procrear, sin mayor limitación que la coyuntura política de cada momento y la elección de las mayorías en las asambleas legislativas.

Inclusive si se adujera que el derecho a la salud, en su vertiente de la libre disposición sobre la salud propia o la permisión a gozar de una mala salud, no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

En efecto, para restringir un derecho fundamental se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

En primer lugar, la política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido. La salud, a menos que haya derechos de terceros en conflicto, como en el caso de una epidemia, es un área restringida exclusivamente al individuo. La imposición de un estándar único de una vida saludable no es admisible para un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. La salud del individuo es algo que no atañe a nadie salvo a él y no puede ser impuesta contra su propia voluntad.

En segundo lugar, la política prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones, ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma.

Adicionalmente, la política no es instrumental, pues no hay evidencia que todo el consumo de Cannabis genere adicción o que necesariamente genere un daño a la salud.

Finalmente, la política prohibicionista no es proporcional, toda vez que suprime más allá de lo estrictamente necesario del derecho a la salud; existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores, y porque los perjuicios que genera la política pública son mayores a los beneficios que genera.

En efecto, si la Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho a la salud y el derecho a la disposición sobre la salud propia, es obligación del Estado garantizar y respetar ambos. En el caso que aquí nos ocupa, esto implicaría la permisión de sembrar, producir, poseer Cannabis para autoconsumo si a parecer del quejoso no causa daños suficientes a la salud para disuadir que por iniciativa propia lo consuma.

En este sentido, queda claro que los artículos 235, 237, 247 y 248 de la Ley General de Salud que prohíben consumo de Cannabis o cualquier producto que los contenga, violan el derecho a disponer sobre la salud propia por las siguientes razones:

1) Por no contemplar que el derecho a la salud implica la permisión a no ejercer dicho derecho y no buscar el bienestar físico, mental y social, y

2) Por no respetar el derecho a la salud y prohibir realizar conductas que solo afectan el ámbito estrictamente privado, adoptando una postura paternalista contraria a los ideales de un Estado liberal respetuoso de los derechos y dignidad de sus ciudadanos.

Ahora bien, en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito omite pronunciarse en relación con el derecho a la libre disposición de la salud, y únicamente se refiere al derecho a la salud como una obligación del Estado hacia la población en general, como se puede advertir de la transcripción siguiente:

*"En ese orden, debe estimarse que la prohibición contenida en las normas impugnadas constituye, incluso, una medida adoptada por el Estado Mexicano para garantizar los derechos humanos de las personas, en primer lugar, el derecho a la salud y a la dignidad de los individuos evitando que consuman sustancias que ponen en grave riesgo su salud mental e incluso física y emocional, y en segundo término, para que evitar que esa conducta (consumo de marihuana), constituya un riesgo para la eficacia de los derechos fundamentales de las diversas personas con las que entablen relaciones, y de la sociedad en general. En esa virtud, la prohibición de la conducta consistente en consumir marihuana o tetrahidrocannabinol (THC), para fines recreativos y lúdicos, se traduce en una medida que en el marco constitucional y convencional vigente en el orden jurídico del Estado Mexicano, tiene como finalidad*

12

esencial garantizar el pleno ejercicio del derecho a la dignidad y a la salud de los individuos, más allá de su trascendencia a la protección de la salud pública, por lo que puede considerarse como una expresión del mandato establecido en el párrafo tercero del artículo 1° constitucional en el sentido de que 'Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad', en tanto que al impedir que se realice la conducta de mérito se logra que el ser humano logre un mayor nivel de salud física, mental y emocional, como lo sostienen los órganos que en ejercicio de su competencia constitucional emitieron la regulación referida.

(...)

Por lo tanto, ante tales circunstancias, es que se justifica la medida prohibitiva impugnada, pues no debe perderse de vista que también es una obligación del Estado de preservar la seguridad de la sociedad en general y un derecho de ésta, dado que si bien los efectos inmediatos de la marihuana de que se ha dado noticia, son reversibles y pudieran no representar riesgo directo para la salud del consumidor, no obstante, no puede arribarse a la misma conclusión en el sentido de que no afectan otros derechos humanos de terceros y de la sociedad en general como son la dignidad, salud, la integridad física y el orden público, dado que aun cuando dichos efectos sean reversibles o de efecto no permanente, ello no implica que el consumidor mientras se encuentre bajo los influjos de la marihuana tenga control de sí mismo, toda vez que como se ha precisado, diversos estudios afirman que puede experimentar sensaciones de pánico, irritabilidad y falta de autocontrol; de ahí que atendiendo a las conductas que puede desplegar incluso de manera involuntaria mientras se encuentra intoxicado el usuario, es que el Estado se encuentra obligado a proteger a la colectividad.

(...)

En ese tenor, se puede afirmar que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz el derecho humano a la dignidad humana y a la salud, esto es, el Estado tiene la obligación de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, tal protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud y establecer limitantes que protejan los derechos de terceros, concretamente los de la población en general y/o los miembros que conforman la sociedad, lo que se traduce en evitar que conductas de particulares, grupos o empresas la dañen."

Como se puede apreciar de las transcripciones anteriores, las afirmaciones del Juez de Distrito no se refieren a si el quejoso es titular del derecho a la salud; tampoco a si el derecho a la salud implica un aspecto negativo, como derecho disponer sobre la salud personal; ni tampoco se analiza en la sentencia si la política prohibicionista transgrede tal dimensión del derecho a la salud, sino que se limita a sostener que el Estado tiene una obligación de garantizar la salud y la seguridad de terceros, sin sustento alguno. En consecuencia, la sentencia viola los principios de congruencia y externa y exhaustividad,

2

pues omite analizar los argumentos expresados en la demanda de amparo.

No obstante lo anterior, el Juez de Distrito también vulneró la garantía de debida fundamentación y motivación, en lo siguiente:

**1. Indebida afirmación de que la política prohibicionista es una medida que tiene como fin proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas.**

El Juez afirma que las disposiciones reclamadas tienen como fin proteger la vida, salud y seguridad de las personas, no solo el quejoso, sino el resto de la población, sin embargo, ello lo realiza bajo simples manifestaciones de los efectos que puede tener la marihuana sobre la persona, sin proporcionar las bases científicas suficientes que lo corroboren.

**2. Indebida afirmación de que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de las personas, inclusive pese a la voluntad de los beneficiarios de la política reclamada.**

El que el Estado tenga una finalidad importante no es una razón para sostener que se puede, sin más, restringir un derecho humano. En todo caso, si la finalidad fuera importante, habría que también analizar si se cumple con los demás elementos de los exámenes de escrutinio fijados por la Suprema Corte, tales como el que la medida sea instrumental o necesaria para alcanzar la finalidad deseada, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y que la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

El Estado mexicano no sólo no tiene la obligación de proveer salud en contra de la voluntad de los beneficiarios, sino que lo tiene estrictamente prohibido a partir del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general dispone que el derecho a la salud implica el derecho a controlar la salud y cuerpo y prohíbe que los particulares sean objeto de injerencias y tratamientos de salud no consensuales.

**3. Indebida afirmación que el consumo de la marihuana afecta a la sociedad en general.**

El Juez de Distrito formula una afirmación sin ningún sustento teórico o empírico, en cuanto a que el consumo de la marihuana puede afectar a la sociedad en general.

Contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, no existe ninguna evidencia científica de que el consumo de marihuana pueda afectar a alguien otro que quien la consume. La marihuana es una sustancia cuyo consumo única y exclusivamente genera riesgos de salud para quien la consume. No tiene efectos contagiosos, no puede ser utilizada para dañar a terceros y no puede ser utilizada como arma. Así las cosas, es absurdo afirmar que la autorización para su producción o consumo afecte a la "sociedad en general."

Por todo lo anteriormente expuesto, se debe concluir que la sentencia viola en perjuicio del quejoso los principios de congruencia y exhaustividad, así como las garantías de debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica.

En consecuencia, es procedente revocar la sentencia de amparo impugnada y se debe ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacentes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita al quejoso sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado, excluyendo todo acto de comercio.

**QUINTO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ADECUADAS, CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, EN RELACIÓN A LA TRANSGRESIÓN DE LOS EXÁMENES DE PROPORCIONALIDAD Y ESCRUTINIO FORMULADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LAS NORMAS QUE RESTRINGEN DERECHOS HUMANOS**

Violación de las disposiciones de los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la demanda de amparo, se alegó que la aplicación de la política prohibicionista, que prohíbe la siembra y autoconsumo de Cannabis Sativa no supera los exámenes de escrutinio formulados por la Suprema Corte para analizar restricciones a derechos fundamentales, en relación con los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal,

libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia.

Se adujo que siempre que una norma general restringe derechos humanos, tales normas deben ser analizadas a la luz de los exámenes de proporcionalidad y escrutinio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se expusieron las razones por las que la política prohibicionista no superaba los exámenes previamente referidos.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de la mayor parte de los argumentos vertidos en el escrito de demanda, bajo la siguiente afirmación:

*"No pasa inadvertido que el quejoso refiere que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero contrario a lo aducido, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por el quejoso, habida cuenta que al juzgador constitucional no le corresponde dilucidar si existen otras opciones más idóneas para alcanzar la finalidad pretendida con la normatividad reclamada, sino únicamente verificar que ésta cumpla con los presupuestos constitucionales.*

*Se expone tal aserto, pues no es la función del juzgador constitucional implementar la política pública a seguir entorno al uno lúdico o recreativo de la mariguana, sino verificar si tiene asidero constitucional su restricción en la actualidad."*

Como puede observarse el Juez de Distrito expresamente se niega a realizar un test de proporcionalidad sobre la medida reclamada, pasando por alto los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, mismos que se exponen a continuación:

*"Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, la. LXVI/2008; Página, 462.*

**RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.  
ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN  
CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.**

*Ningún derecho fundamental es absoluto y\_ en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargó, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser*

admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática."

Esta tesis dispone que para restringir un derecho fundamental (tal como los derechos a la autodeterminación, libertad individual, libre desarrollo de la personalidad, propia imagen, dignidad humana y libre disposición sobre la salud propia) se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

"Novena Época; Registro, 169489; Instancia, Segunda Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVII, Junio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 2a. LXXXIV/2008, y página: 440.

**IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.**

La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es



discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual en cuestión. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que quepa exigir que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya de modo alguno a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."

JOE  
AL COLEGIO  
INISTRAT  
CIRCUITO

En síntesis, los pasos a seguir según este segundo examen son los siguientes: primero, definir si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida; segundo, determinar si la diferenciación es adecuada para lograr el fin (si es una categoría del artículo 1 de la

Constitución, la medida debe estar directamente conectada con el fin), y tercero, determinar si la medida resulta proporcional.

"Novena Época; Registro, 174247; Instancia, Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXIV, Septiembre de 2006; Materia, Constitucional; Tesis, 1a./j. 55/2006, y página: 75.

**IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.**

La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.

Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."

En síntesis, los pasos a seguir según este Examen son los siguientes: primero, determinar si la distinción persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; segundo, analizar la racionalidad o adecuación de la distinción, y tercero, ver si cumple con el requisito de proporcionalidad.

De los exámenes aquí analizados, los pasos a seguir para determinar si una distinción es discriminatoria en términos de la Constitución y los tratados internacionales consisten en determinar lo siguiente:

1. Si el fin perseguido por el Estado es constitucionalmente legítimo.
2. Si la medida adoptada guarda una relación de instrumentalidad con la finalidad buscada. Esto es, si la restricción a los derechos humanos en la Ley General de Salud es un medio razonablemente adecuado para la consecución de la finalidad perseguida por la política pública, o bien, si hay una instrumentalidad medio-fin.
3. Proporcionalidad de la medida, en sentido estricto. Es decir, que sea la medida menos restrictiva posible, si se genera una afectación innecesaria a los derechos humanos y si se generan efectos perjudiciales a otros derechos.

No obstante lo anterior, el Juez de Distrito deja de observar los criterios de la Suprema Corte transcritos, a pesar de que el quejoso, en el escrito de demanda, expuso los argumentos correspondientes para que el juzgador de amparo emitiera un pronunciamiento en relación con la proporcionalidad de la medida reclamada.

Lo anterior, bajo el argumento de que los juzgadores constitucionales no tienen la función de implementar políticas públicas, sin embargo, el Juez a quo pasa por alto que la política prohibicionista reclamada se encuentra establecida en dispositivos legales, los cuales sí pueden ser materia de un estudio de proporcionalidad, conforme a los criterios antes enunciados, ya que se trata de una medida que el legislador optó por prever en la Ley General de Salud.

Es por ello que se solicita a ese Tribunal Colegiado realizar el test de proporcionalidad que el Juez de Distrito omitió realizar, a partir de los siguientes razonamientos:

#### **A. Legitimidad del fin perseguido.**

Para determinar si el establecimiento de la Política Prohibicionista persigue un objetivo constitucionalmente imperativo, debemos primero discernir y escudriñar el fin o fines que busca la LGS al prohibir la siembra, cultivo, elaboración, preparación, acondicionamiento y transporte de Cannabis para el autoconsumo.

El artículo 1º de la Ley General de Salud establece lo siguiente:

*"Artículo 1º.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social."*

En el mismo sentido, en la exposición de motivos de la Ley General de Salud se señala que la finalidad del Título Duodécimo es la regulación de las adicciones y la farmacodependencia:

*"El Título Duodécimo regula las adicciones que actúan más desfavorablemente sobre la salud pública. El tabaquismo y la farmacodependencia."*

COLEGIO DE  
ADMINISTRATIVOS DE  
CIRCUITO

*La iniciativa da también particular importancia al combate del consumo indebido de estupefacientes y sicotrópicos, que se ha convertido en una de las adicciones que representan más graves problemas de salud pública."*

De lo expuesto se aprecia que la finalidad de la prohibición categórica a la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación y consumo de Cannabis tiene dos objetivos: primero, la protección de la salud de toda persona contra su voluntad, y segundo, el combate a las adicciones.

#### **i. Finalidad de proteger la salud contra la voluntad**

La finalidad objetiva de la norma es la protección de la salud de todo particular en contra de la voluntad de éstos. No es una finalidad legítima para el Estado pretender velar la salud de los ciudadanos, contra la voluntad de los afectados, a menos que estuvieren en juego derechos de terceros. Al respecto, Manuel Atienza afirma lo siguiente:

*"[E]l Estado sí que tiene un deber positivo de velar por la salud y la vida de los ciudadanos en general; lo que ocurre es que no puede tomar medidas encaminadas a este objetivo que vayan en contra de la voluntad de los afectados."*<sup>10</sup>

<sup>10</sup> "Dossier: Huelga de Hambre de los «Grapo», Derecho y Ética", *La argumentación jurídica en un caso difícil: la huelga de hambre de los presos del Grapo*, Manuel Atienza.

36

No hay ningún interés legítimo para que el Estado proteja coactivamente la salud de los particulares contra su voluntad, cuando no hay derechos de terceros de por medio. No es legítimo, pues se parte de la premisa que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su propio cuerpo, su mente y su persona. Así las cosas, podemos concluir que la primera finalidad de la prohibición a la siembra y preparación de Cannabis para el autoconsumo no es una finalidad constitucionalmente válida. El Estado no tiene un interés legítimo en proteger la salud de un individuo contra su voluntad, al no vulnerarse derechos de terceros.

## ii. Finalidad de combatir las adicciones

La finalidad de combatir las adicciones tampoco es una finalidad legítima del Estado en sí. Una adicción es la dificultad para dejar o disminuir el consumo de una sustancia. A menos que la sustancia que no se puede abandonar o disminuir en su consumo sea nociva para la salud, no hay un interés del Estado para pretender coactivamente que los seres humanos abandonen el consumo de sustancias, por la única razón que éstas pudieran ser difíciles de abandonar.

UNAL  
EN todo caso, para que el combate a las adicciones sea un fin legítimo del Estado, tal que pudiera considerarse admisible una restricción a un derecho fundamental, debe haber pruebas científicas de que la sustancia que genera la adicción es nociva para la salud y que, de no ser por la dificultad para abandonarla, los seres humanos objeto de la política pública renunciarían a su consumo.

Esto es, dentro del alcance del derecho a la salud no existe una obligación para el Estado Mexicano de proveer servicios de salud en contra de las decisiones y voluntad de sus beneficiarios. Ningún instrumento internacional, ni la interpretación que los órganos competentes para ello han hecho, autoriza la intromisión en las decisiones personales que los particulares toman sobre su cuerpo y su salud.

El derecho a la salud prescrito tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, genera diversos niveles de obligación para los Estados: el de respetar, de proteger y de proveer (o de cumplir) para el ejercicio de los derechos humanos. Primero, la obligación a *respetar* significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos humanos. Segundo, la obligación de *proteger* obliga a los Estados de proteger a los particulares y grupos contra violaciones de derechos humanos. Tercero, la obligación de *proveer* (o de cumplir)

3

significa que los Estados deben tomar acciones positivas para facilitar el ejercicio de sus derechos.

La primera obligación, de respetar, se asocia a las obligaciones negativas del Estado, de no hacer o no interferir en el ejercicio de los derechos. La segunda y tercer obligaciones, de proteger y proveer, se asocian con las libertades positivas del Estado, de hacer determinadas cosas para el ejercicio de los derechos.

Esta distinción no es meramente doctrinal, sino que se expresa en el mayor número de tratados de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte, como a continuación se acredita:

### **Deber de Respetar**

#### **• Pacto de San José.**

##### **Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos**

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella ya garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

#### **• Protocolo de San Salvador.**

##### **Artículo 4. No admisión de restricciones...**

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

##### **Artículo 5. Alcance de las restricciones y limitaciones**

Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

#### **• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.**

##### **Artículo 4.**

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

## Artículo 5.

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

## Deber de proteger y proveer.

### • Pacto de San José.

#### Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

### • Protocolo de San Salvador.

#### Artículo 1. Obligación de adoptar medidas...

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

#### Artículo 2. Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno.

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

### • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

#### Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Lo mismo se desprende de la Observación General N° 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en los términos siguientes:

*Observación General N° 14*

*"33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud."*

En el caso concreto, es posible armonizar las dimensiones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. Dentro de la dimensión de *cumplir*, el Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para proveer y proporcionar servicios de salud. No obstante, como también debe *respetar* las decisiones propias sobre el derecho a la salud, pues las medidas que tome para garantizar el acceso a la salud no pueden invadir la esfera de las decisiones que cada uno toma sobre su propio cuerpo y sobre su salud personal.

Esto es, para armonizar las diversas dimensiones del derecho a la salud se debe concluir que el Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud, pero que debe respetar las decisiones sobre salud que toman los particulares, omitiendo hacer injerencias directas o indirectas sobre las decisiones personales sobre salud de cada cual. En conclusión, del deber internacional de *respetar* la salud personal, el Estado tiene prohibido perseguir la salud particular en contra de la voluntad de sus beneficiarios, por lo que la finalidad de la política prohibicionista no sólo no es legítima, sino que se encuentra constitucionalmente prohibida.

Es posible discernir, hipotéticamente, algunas situaciones en las que se podría sujetar a particulares a tratamientos de salud forzosos, como



cuando de no llevar a cabo tales tratamientos forzosos se pudiera afectar la salud de diversas personas, mediante, por ejemplo, una pandemia. Así, el particular no puede oponerse a un tratamiento médico o a ser intervenido, si dejar de hacerlo pone en riesgo la vida o salud de las masas.

No obstante, en el caso concreto, no existe ninguna evidencia científica de que el consumo de marihuana pueda afectar a alguien otro que quien la consume. La marihuana es una sustancia cuyo consumo única y exclusivamente genera riesgos de salud para quien la consume. No tiene efectos contagiosos, no puede ser utilizada para dañar a terceros y no puede ser utilizada como arma. En resumidas cuentas, es una simple planta. Así las cosas, es absurdo afirmar que la autorización para su producción o consumo afecte a la "sociedad en general" o que se trate de alguna excepción al derecho a disponer sobre la propia persona y sobre la salud personal.

Sin bien proteger la salud es una finalidad importante, proteger la salud contra la voluntad del individuo no lo es. Por el contrario, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe a los estados a someter a los particulares a tratamientos médicos no consensuados.

Tal política no pasa el primer paso de los exámenes de escrutinio y proporcionalidad fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

### **B. Instrumentalidad medio-fin.**

Las normas emitidas por el legislador, con el propósito de restringir derechos fundamentales, como es el caso de la prohibición al autoconsumo de marihuana, deben ser instrumentales para conducir al objetivo que el legislador quiere alcanzar. Este análisis sobre instrumentalidad ha sido definido por la Suprema Corte como la necesidad que deben cumplir las medidas para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización.<sup>11</sup>

Esto es, se debe analizar si la prohibición al consumo de marihuana es un medio apto para conducir al fin u objetivo de proteger la salud y combatir las adicciones.

<sup>11</sup> RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, la. LXVI/2008; Página, 462.

En ese sentido, si la finalidad de la regulación es prevenir las adicciones y proteger la salud de los particulares, debe analizarse qué se entiende por salud.

Al respecto, el artículo 2°, fracciones I y II de la Ley General de Salud establecen que la salud se puede entender como el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana.

Adicionalmente, para analizar si el consumo de Marihuana genera daños a la salud y si genera adicción o dependencia debemos basarnos en estudios científicos y no en meros prejuicios sociales o conjeturas. El asentimiento de un daño sobre la salud de la persona no puede fundarse en una ideología política, sino en los métodos objetivos y procedimientos adecuados de la ciencia.

Salvo en la presencia de un daño a la salud, reconocido ampliamente y de buena fe por los expertos en la materia, probado de manera clara y convincentemente, el Estado no tiene ningún interés, menos aún uno trascendente, para justificar la interferencia en la autonomía, libre desarrollo e identidad de los particulares.

Así las cosas, parece apropiado remitirnos al estudio formulado por la Fundación Beckley, en el que se expresan los riesgos probados por la ciencia, que puede llegar a generar el consumo de Cannabis, en los términos siguientes:

*"Un conductor bajo los efectos del cannabis tiene un mayor riesgo de chocar. Fumar cannabis probablemente aumenta los riesgos de desórdenes respiratorios. Consumidores regulares corren el riesgo de generar dependencia en la droga -dificultad para disminuir el consumo o dejarlo. Entre las complejas interacciones entre cannabis y desórdenes mentales, el uso de cannabis parece aumentar el riesgo de síntomas psicóticos.*

*Claramente, en algunos mercados, el cannabis vendido se ha vuelto más fuerte en términos de contenido de THC en años recientes. Para un consumidor ingenuo, esto puede ser problemático, aunque es virtualmente imposible morir de sobredosis (con sólo dos muertes registradas a nivel mundial). Para un fumador que busca un estado particular de intoxicación, y cuantifica la dosis en concordancia, algunos han alegado que cannabis más fuerte es de hecho menos dañino para la salud, ya que el consumo del producto de la combustión potencialmente nociva es reducida. Algunas evaluaciones más rigurosas son necesarias para analizar las causas y consecuencias de superior contenido de THC y de los cambios en la racionalidad entre THC:CBC en el cannabis moderno.*

215

*Los daños a la salud por el cannabis son claramente suficientes para justificar regulación substancial sobre su disponibilidad y comercialización. Es importante que los riesgos a la salud por el cannabis sean comunicados a sus usuarios. Por otro lado, las políticas públicas deben tomar en cuenta los riesgos relativos en comparación a otras conductas comunes que generan ciertos riesgos. En un contexto comparativo, los riesgos son bajos. Por ejemplo, los daños a la salud asociados con el tabaco y el alcohol son claramente mayores que aquellos relacionados con el cannabis"*

El estudio citado concluye que se generan algunos riesgos a la salud, como eventuales riesgos de desórdenes respiratorios, así como el riesgo de que si se maneja un vehículo bajo la influencia del Cannabis, se podrían generar accidentes. Esto es, el consumo de Cannabis no genera un daño inmediato a la salud, pero genera riesgo de que posteriormente se generen daños a la salud.

Asimismo, se afirma que el consumo habitual y prolongado de Cannabis puede conducir a dependencia (dificultad para disminuir el consumo o dejarlo). El uso diario de Cannabis tiene aparejado el riesgo más claro de dependencia.

Esto es, parece que el consumo de Cannabis sí aumenta el riesgo de una afectación a la salud de la persona y que, habida cuenta de un uso reiterado y habitual, puede conducir a la dependencia en el consumo. Pero eso no es suficiente para que la política pública adoptada por el legislador sea necesaria.

En adición a la existencia de un riesgo de daño o vulneración de un bien jurídico tutelado, la medida adoptada debe tener una relación instrumental, medio-fin, para reparar el daño o lesión que se pretende evitar o corregir.

A continuación se expone cómo la política prohibicionista no es instrumental para mejorar la salud personal, cómo la despenalización no genera un mayor consumo y cómo el consumo de marihuana no necesariamente genera un daño a la salud.

#### ***i. La prohibición no es un medio al mejoramiento de la salud.***

La política prohibicionista no es instrumental para solucionar los daños a la salud que pueden generar el consumo de marihuana. No es instrumental, pues tras varias décadas de una política prohibicionista al consumo no solo no se ha disminuido el consumo de marihuana, sino que el mismo se ha aumentado.

Para analizar si la prohibición a la siembra y consumo de marihuana combate los riesgos a la salud generados por el consumo de la misma, parece apropiado remitirnos al estudio formulado por la Fundación Beckley, que concluyó lo siguiente:

*"Hay variaciones en el tiempo en los índices de consumo de cannabis entre países, pero esas variaciones no parecen verse afectadas por la probabilidad de arresto o sanciones por uso o cantidad, sin importar cuán draconianas sean las medidas.*

*(...)*

*Ha habido esfuerzos constantes para disuadir el uso de cannabis, mediante la prohibición y de policía. Esfuerzos para instrumentalizar la prohibición se han concentrado en el arresto de los consumidores. En los países desarrollados, con grandes poblaciones de consumidores de cannabis, las sanciones penales impuestas por posesión y consumo son usualmente modestas, en comparación con las que sería posible implementar. Más aún, la probabilidad de ser arrestado por un incidente relacionado con el uso de cannabis es en rango o menor de uno por cada mil. El esfuerzo prohibicionista no ha tenido mucho éxito para disuadir el consumo."*

En el mismo sentido, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, denominado "Guerra a las Drogas", de junio de 2011, dispuso la siguiente conclusión:

*"Los líderes políticos y las figuras públicas deberían tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen en privado: que la evidencia demuestra de manera abrumadora que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas, y que la guerra a las drogas no ha sido y no puede ser ganada. Los gobiernos tienen el poder de llevar a cabo una combinación de políticas que sean apropiadas para sus propias situaciones, y manejar los problemas causados por los mercados de drogas y el uso de drogas de una manera que tenga un impacto mucho más positivo sobre el nivel del crimen relacionado así como sobre los daños sociales y para la salud."<sup>12</sup>*

Finalmente, la Corte Suprema de justicia de la República Argentina, también se ha pronunciado al respecto. En el fallo Bazterrica 308:1392, del 29 agosto 1986, dispuso lo siguiente:

*"[N]o se encuentra aprobado, ni mucho menos, que la prevención penal de la tenencia, y aun de la adicción, sea un remedio eficiente para el problema que plantean las drogas."*

Esto es, no se puede sostener razonablemente que la política prohibicionista sea un medio adecuado objetivamente destinado a reducir y combatir los riesgos a la salud generados por el consumo de Cannabis. La prohibición a la siembra, transporte, posesión y consumo

<sup>12</sup> Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, "Guerra a las Drogas", Junio 2011, pág. 10.

24

para el autoconsumo de Cannabis no reduce el consumo de Cannabis, ni reduce riesgo alguno que se pudiera generar por su consumo.

Así las cosas, si la política no reduce el número de consumidores o, al menos, impide el incremento de los mismos, los artículos impugnados no constituyen un medio siquiera remotamente adecuado para evitar los riesgos a la salud que puede generar el consumo de marihuana ni para combatir las adicciones.

No es suficiente que la Ley General de Salud tenga la finalidad de proteger la salud y combatir las adicciones, sino que la medida debe ser, de hecho, un medio mínimamente eficiente para conseguir esos fines.

Lo que no sucede en el caso concreto, pues, como ya se mencionó, el número de consumidores de Cannabis en México no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado en los últimos años, como se desprende de las siguientes estadísticas oficiales publicadas por la Encuesta Nacional de Adicciones 2011:

1. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el consumo de Marihuana a nivel nacional entre adultos de entre 18 y 34 años ha aumentado de 1.0% de la población en el año 2002 a 1.9% de la población en el 2011.<sup>13</sup>

2. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el consumo de marihuana a nivel nacional entre adultos de 35 a 65 años ha aumentado de 0.2% de la población en el año 2000 a 0.6% de la población en el año 2011.<sup>14</sup>

Así las cosas, la sentencia deja sin atender los argumentos hechos valer en la demanda de amparo sobre la falta de instrumentalidad de la política prohibicionista y, en consecuencia, se transgreden los principios de congruencia externa y exhaustividad.

En efecto, el Juez de Distrito omite tomar en cuenta lo que ha fijado la Primera Sala de la Suprema Corte respecto al estándar de instrumentalidad. Ésta ha dispuesto, en la ejecutoria del amparo en revisión 563/2010, lo siguiente:

*"Si la relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria introducida por el legislador y el fin que éste pretende alcanzar no es clara, o si se llega a la conclusión de que la medida es patentemente*

<sup>13</sup> Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pág. 43.

<sup>14</sup> *Ibíd.*, pág. 44.

ineficaz para conducir al fin pretendido, será obligado concluir que la medida no es constitucionalmente razonable.

De modo similar, será necesario determinar que la medida legislativa esté directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales de envergadura antes mencionados, que sea realmente útil para su consecución, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con la consecución de tales objetivos."

En otras palabras, la Suprema Corte ha sostenido que la medida adoptada debe ser un medio eficaz o directamente conectado para la consecución del objetivo constitucionalmente válido que pretende perseguir el legislador. Así las cosas, para cumplir con el segundo estándar de los exámenes de escrutinio, no es suficiente que el Juez de Distrito considere que la política prohibicionista obedece a la obligación abstracta del Estado de proteger la salud y la seguridad de terceros, sino que realmente debe serlo.

Si la política prohibicionista y la prohibición categórica al Cannabis no inciden sobre el grado de consumo, pues entonces estos no son un medio eficaz para la consecución del objetivo de reducir el consumo de Cannabis. Si los mexicanos no responden a la norma que prohíbe el consumo de cannabis, acatando la norma y adecuando su conducta, pues entonces la norma no alcanza su finalidad objetiva y deja de ser una norma instrumental para alcanzar el objetivo para el que fue prevista.

Está ampliamente acreditado en la teoría económica que las prohibiciones no eliminan el mercado para bienes ilegales. Las prohibiciones, en cambio, sí incrementan la violencia e incrementan el riesgo de recibir bienes adulterados y de mala calidad. La prohibición de consumir una sustancia no elimina su uso. Lo único que hace la prohibición es orillar el mercado de sustancias ilegales, como la marihuana, al mercado negro.

En síntesis, no es plausible sostener que la política prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, prevista en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, sea un medio eficaz para proteger la salud, y, mucho menos, para combatir las adicciones. Los informes de la Fundación Beckley, de la Comisión Global de Políticas de Drogas y la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 son prueba irrefutable de la ineficacia y fracaso de la política prohibicionista.

Así las cosas, la política prohibicionista no cumple con el segundo estándar de escrutinio. No es un instrumento, medio-fin, para alcanzar los fines esperados por la legislatura.

**ii. La despenalización del consumo de Marihuana no genera mayor consumo.**

Pruebas estadísticas sólidas (Encuesta Nacional de Adicciones 2011) y estudios empíricos de la más alta sofisticación (el de la Beckley Foundation y el de la Comisión Global de Políticas de Drogas) permiten concluir que la política prohibicionista no es un medio que instrumentalmente reduzca el número de personas que consumen Cannabis ni sirve para combatir las adicciones.

A continuación se proporcionan razones empíricas que demuestran que en la experiencia comparada la despenalización del consumo de Cannabis tampoco tiene por efecto un incremento en el número de consumidores de la misma.

El estudio Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate, formulado por la Fundación Beckley, determina lo siguiente:

*... la evidencia de los estudios evaluativos es que remover o reducir las sanciones para uso o posesión parece no tener efectos en las tasas de consumo.*

*(...)*

*Medidas para reducir sanciones o para descriminalizar la posesión y uso han sido adoptadas en numerosas jurisdicciones sin un incremento significativo en el uso. Adicionalmente, estas reformas han tenido éxito en mejorar las consecuencias negativas del prohibicionismo."*

Esto es, la experiencia comparada antes citada nos demuestra que la despenalización del consumo de marihuana no tiene ningún efecto sobre el número de consumidores de Cannabis. Así, el temor de que un mayor número de personas consuman Cannabis no es razón para establecer prohibiciones categóricas, con sanciones penales. En efecto, diversos estudios han puesto en evidencia que la reducción o eliminación de sanciones no tienen ningún efecto en el índice de consumo por la población.

Esto conduce a la conclusión inequívoca de que la política prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, es completamente irrelevante para el problema de riesgos de salud que se pudiera generar por el consumo de Cannabis. La política prohibicionista no ha disminuido el número de consumidores,

12

no ha impedido que los consumidores aumenten y, a su vez, la ausencia de la política prohibicionista no implicaría un aumento en el número de consumidores.

En otras palabras, los índices de consumo de Cannabis son independientes de que haya o no una política prohibicionista al consumo de Cannabis. La política prohibicionista es un factor contingente e irrelevante para los índices de consumo de Cannabis. Esto es, se trata de una política pública que incumple con el segundo requisito de escrutinio. Una política que no es instrumental para afrontar un problema de salud y que no combate adicción alguna.

***iii. El consumo de Marihuana no genera un daño a la salud, sino un riesgo de daño a la salud.***

Por otro lado, los informes de la Fundación Beckley, antes citados, concluyen que el consumo de marihuana genera un riesgo de daño a la salud. Esto es, que el consumo de Cannabis puede generar un daño a la salud, pero que no necesariamente lo hace. Por consecuencia, si el consumo de marihuana no necesariamente genera un daño a la salud, una medida para evitar su consumo no necesariamente protege a los individuos de una afectación en su salud.

En síntesis, no es plausible sostener que la política prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, sea un medio instrumental para proteger la salud. Para ser un medio adecuado para proteger la salud, el consumo de Cannabis debería generar un daño a la salud; en cambio, el consumo de Cannabis solo genera un riesgo de daño a la salud.

El efecto inmediato generado por el consumo de Cannabis (de conciencia alterada) no es un daño a la salud. La única manera de suponer que la marihuana genera un daño a la salud, de forma inmediata y directa, es suponer que el cuerpo es algo sagrado que debe ser protegido de toda alteración, cambio de percepción, de ánimo, de estado de conciencia y de comportamiento.

Así las cosas, la Política Prohibicionista no cumple con el segundo estándar de escrutinio. No es una medida instrumental, medio-fin, para alcanzar los fines esperados por la norma, toda vez que no se acredita que el consumo de marihuana necesariamente genera un daño a la salud y, por lo tanto, la Política Prohibicionista no está ligada a la solución de una afectación en la salud.



43

En conclusión, la Política Prohibicionista no cumple con el segundo estándar de escrutinio. No es una medida instrumental, medio-fin, para alcanzar los fines esperados por la norma, toda vez que no se acredita que el consumo de marihuana necesariamente genera un daño a la salud, sino un mero riesgo de daño; no hay una relación entre la política prohibicionista y el número de personas que consumen Cannabis, y la política no reduce el número de consumidores o, al menos, impide el incremento de los mismos. Esto es, los artículos impugnados no constituyen un medio siquiera remotamente adecuado para evitar los riesgos a la salud que puede generar el consumo de Marihuana ni para combatir las adicciones.

### **C. Proporcionalidad y medio menos restrictivo.**

El último paso del escrutinio que se debe hacer respecto de las medidas emitidas por el legislador ordinario, con el propósito de restringir derechos fundamentales, es un examen de proporcionalidad en sentido estricto. Partiendo de los precedentes judiciales enunciados en párrafos precedentes, en el análisis de proporcionalidad se debe llevar a cabo el siguiente análisis:

De acuerdo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben cumplir con el requisito de proporcionalidad en sentido estricto, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.<sup>15</sup>

El análisis de proporcionalidad consiste en evaluar si la política prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, está confeccionada a la medida, que no se afecte los derechos restringidos más allá de lo estrictamente necesario, que la medida empleada sea la menos restrictiva posible y que se analice si se generan mayores ventajas o desventajas derivado de la medida.

<sup>15</sup> RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, la. LXVI/2008; Página, 462.

## **1. La Política Prohibicionista no es la alternativa menos restrictiva.**

Existen diversas alternativas menos restrictivas para alcanzar los fines que pretende perseguir el Estado. Es pertinente destacar las alternativas que otros países han adoptado o que se han utilizado en México para regular otras sustancias, para así contrastarlas con el modelo mexicano de prohibición al autoconsumo de marihuana y determinar si la medida adoptada por nuestra ley es la menos restrictiva y proporcional entre el fin buscado y la afectación a los derechos humanos de los particulares.

### ***i. Primera Alternativa.***

Una primer alternativa para regular el consumo es el de restringir los lugares donde se puede comprar y consumir Cannabis. Se generan espacios donde el Estado tiene control de la cantidad y calidad de las sustancias que se están consumiendo, pero sin anular el acceso al consumo de Cannabis.

### ***ii. Segunda Alternativa***

El exitoso sistema establecido por la Ley General Para el Control del Tabaco. Esta ley genera un eficiente sistema de orientación, educación, prevención, producción, distribución, comercialización, importación, consumo y publicidad del tabaco. De igual forma, se protege de manera efectiva la salud de los fumadores de tabaco, informándoles explícitamente de los riesgos inherentes al consumo de cigarrillos, sin caer en el extremo intrusivo de prohibir a cada cual fumar o no.

### ***iii. Tercera Alternativa.***

Si el Estado Mexicano verdaderamente considera pernicioso para la salud el consumo de Cannabis, puede implementar políticas públicas que reduzcan efectivamente el consumo y que reduzcan los daños relacionados con la política de fiscalización. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas de drogas. Remplazar la criminalización y el castigo de las personas que a conciencia utilizan drogas, por la oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que los necesitan. Éstas, por cierto, son algunas de las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas.<sup>16</sup>

### ***iv. Cuarta Alternativa.***

<sup>16</sup> La Guerra contra las Drogas y el VIH/SIDA: Cómo la criminalización del uso de drogas fomenta la pandemia global. Informe de la comisión global de políticas de drogas, junio de 2012.

Adicionalmente, se pueden implementar políticas de salud para cada uno de los riesgos específicos que genera el consumo de Cannabis, como a continuación se expone:

- Si uno de los únicos riesgos plausibles para terceros es que los consumidores de Cannabis pudieran generar accidentes de tránsito, ya hay instrumentos - similares a los alcoholímetros— para determinar si un conductor está bajo la influencia del Cannabis. Regulación y operaciones para disuadir que los conductores manejen vehículos bajo la influencia del Cannabis pueden ser implementados con facilidad. Asimismo, los empaques de Cannabis podrían tener advertencias similares a las de diversos medicamentos que advierten sobre el uso de automóviles y de maquinaria pesada.

Uno de los riesgos plausibles asociados con el consumo de Cannabis es el riesgo de generar enfermedades respiratorias. Este riesgo no está asociado con todo el consumo de Cannabis, sino exclusivamente con fumar Cannabis, mediante pipas, "cigarrillos" o "porros". Se pueden eliminar los riesgos respiratorios del uso del Cannabis al sustituir fumarlo por consumirlo oralmente. Si se insiste en fumar el Cannabis, se debe evitar la técnica de inhalar el Cannabis y retenerlo, pues aumenta la retención de partículas de materia y de alquitrán. Es posible minimizar los daños de fumar usando vaporizador. En otras palabras, uno de los pocos riesgos asociados con el consumo de Cannabis no es propio del consumo de Cannabis, sino de la forma específica de consumirlo fumándolo en "cigarrillos" o "porros". Para tales riesgos se podrían elaborar campañas de salud que tuvieran por objetivo desincentivar fumar el Cannabis, pero no otras formas de consumo.

- Si uno de los riesgos del consumo de Cannabis es la dependencia —dificultad para disminuir el consumo o dejarlo—, entonces se debe desincentivar el uso excesivo o habitual del mismo. Al respecto, el estudio de la Fundación Beckley establece que para evitar estado de dependencia se debe reducir el consumo de Cannabis a una vez por semana o en menor cantidad. Esto es, el consumo moderado y esporádico, de una vez a la semana o menos, no genera dependencia, por lo que sería menos restrictivo, para combatir las adicciones, el acotar cualquier política pública a los consumidores que ya se encuentran bajo la dependencia del Cannabis, o aquellos consumidores de uso

15

"intenso" que se encuentran bajo el riesgo de generar dependencia.

Como ya fue acreditado, de los anteriores ejemplos, existe una pluralidad de alternativas menos restrictivas de los derechos a la libre autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, libertad corporal e identidad personal, con los mismos o mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado mexicano en la legislación que se combate.

Así las cosas, la política prohibicionista no cumple con el tercer requisito del examen de escrutinio de las normas que restringen derechos humanos. El prohibicionismo no es proporcional, toda vez que existen diversas alternativas menos restrictivas del derecho que podría emplear el Estado mexicano para obtener los resultados que persigue mediante la política prohibicionista.

## **2. Se restringe más de lo estrictamente necesario.**

Se debe analizar si la medida que afecta los derechos de autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal, libertad individual y disposición sobre la salud personal, es aquella que restringe en menor medida los derechos del quejoso. En otras palabras, se debe analizar si las medidas son confeccionadas a la medida y si no abarcan o restringen los derechos más allá de lo estrictamente necesario.

Debemos analizar si la política prohibicionista es sobre-incluyente en la restricción a los derechos del quejoso para perseguir los dos objetivos de la norma. Así, si el objetivo de la política prohibicionista es la protección de la salud y el combate a las adicciones, entonces solo se debe prohibir el consumo de marihuana ahí donde pudiera generarse un daño a la salud o donde hay adicción o dependencia a la marihuana.

Como se expondrá a continuación, la política prohibicionista prohíbe mayor autoconsumo de marihuana que el estrictamente necesario para proteger la salud y combatir su adicción.

Para llevar a cabo este análisis, es apropiado retomar una vez más el estudio formulado por la Fundación Beckley, que expresa los riesgos a la salud que puede generar el consumo de Cannabis:

*"Un conductor bajo los efectos del cannabis tiene un mayor riesgo de chocar. Fumar cannabis probablemente aumenta los riesgos de desórdenes respiratorios. Consumidores regulares corren el riesgo de generar dependencia en la droga -dificultad para disminuir el consumo o*

25

dejarlo. Entre las complejas interacciones entre cannabis y desórdenes mentales, el uso de cannabis parece aumentar el riesgo de síntomas psicóticos.

Claramente, en algunos mercados, el cannabis vendido se ha vuelto más fuerte en términos de contenido de THC en años recientes. Para un consumidor ingenuo, esto puede ser problemático, aunque es virtualmente imposible morir de sobredosis (con sólo dos muertes registradas a nivel mundial). Para un fumador que busca un estado particular de intoxicación, y cuantifica la dosis en concordancia, algunos han alegado que cannabis más fuerte es de hecho menos dañino para la salud, ya que el consumo del producto de la combustión potencialmente nociva es reducida. Algunas evaluaciones más rigurosas son necesarias para analizar las causas y consecuencias de superior contenido de THC y de los cambios en la racionalidad entre THC:CBC en el cannabis moderno.

Los daños a la salud por el cannabis son claramente suficientes para justificar regulación substancial sobre su disponibilidad y comercialización. Es importante que los riesgos a la salud por el cannabis sean comunicados a sus usuarios. Por otro lado, las políticas públicas deben tomar en cuenta los riesgos relativos en comparación a otras conductas comunes que generan ciertos riesgos. En un contexto comparativo, los riesgos son bajos. Por ejemplo, los daños a la salud asociados con el tabaco y el alcohol son claramente mayores que aquellos relacionados con el cannabis”

Se puede apreciar que el consumo de Cannabis genera algunos riesgos específicos a la salud, tales como los siguientes:

- Aumento de probabilidad de desórdenes respiratorios.
- Riesgo de generar dependencia en consumidores regulares.
- Riesgo de síntomas psicóticos.
- Riesgo de generar accidentes si se maneja bajo la influencia del Cannabis.

Se debe aclarar que los primeros tres son riesgos a hacia la salud propia y el último –sobre riesgo de accidentes de tránsito– es un riesgo tanto a la salud personal, como a la de terceros. Éste último riesgo es el único que plausiblemente genera el consumo de cannabis hacia terceros. No obstante, este riesgo no es derivado exclusivamente del consumo de Cannabis, sino de la conjunción entre el consumo de cannabis y el manejo de vehículos.

Si estos son los riesgos que el consumo de Cannabis genera a la salud, entonces solo en aquellos casos se podría plausiblemente restringir el acceso y consumo del Cannabis, sujeto a que se cumpla con los otros elementos de los exámenes de escrutinio de la Corte. Cualquier

restricción adicional sería una medida sobre-incluyente que limitaría los derechos de los consumidores más allá de lo estrictamente necesario.

### ***i. Riesgo de generar desórdenes respiratorios.***

Uno de los riesgos asociados con el consumo de Cannabis es el riesgo de generar enfermedades respiratorias. Este riesgo no está asociado con todo el consumo de Cannabis, sino exclusivamente con fumar Cannabis, mediante, por ejemplo, pipas, "cigarrillos" o "porros". Se pueden eliminar los riesgos respiratorios del uso del Cannabis al sustituir fumarlo por consumirlo oralmente. Si se insiste en fumar el Cannabis, se debe evitar la técnica de inhalar el Cannabis y retenerlo, pues aumenta la retención de partículas de materia y de alquitrán. Es posible minimizar los daños de fumar usando vaporizador. En otras palabras, uno de los pocos riesgos asociados con el consumo de Cannabis no es propio del consumo de Cannabis, sino de la forma específica de consumirlo.

Así las cosas, cualquier medida orientada a salvaguardar la salud de los consumidores y evitar desórdenes respiratorios debería estar directamente orientada al consumo reiterado y habitual de Cannabis, mediante "cigarrillos" y "porros", pero es sobreincluyente si también abarca el consumo oral y el consumo mediante vaporizadores. Así las cosas, la política prohibicionista restringe más allá de lo estrictamente necesario para prevenir desórdenes respiratorios.

### ***ii. Riesgo de generar dependencia.***

Si Consumidores regulares corren el riesgo de generar dependencia en la droga, entonces parecería apropiado restringir el consumo regular, o bien, regular el consumo de las personas que ya son dependientes de la misma, pero no el consumo eventual. En efecto, un gran número de personas que consumen Cannabis no son dependientes de la misma.

Al respecto, el estudio de la Fundación Beckley establece que para evitar estado de dependencia se debe reducir el consumo de Cannabis a una vez por semana o en menor cantidad. Esto es, el consumo moderado y esporádico, de una vez a la semana o menos, no genera dependencia. En consecuencia, la política prohibicionista que no distingue entre el consumo moderado que no genera dependencia y aquel que sí genera dependencia restringe los derechos invocados más allá de lo estrictamente necesario. Igual parámetro debiera aplicarse en la venta de alcohol y no se establece.

### ***iii. Riesgo de generar desórdenes psicóticos.***

55

Si el consumo de Cannabis puede aumentar el riesgo de síntomas psicóticos, entonces la restricción estrictamente necesaria sería aquella orientada a combatir los factores de riesgo para ese tipo de afectaciones. El estudio de la Fundación Beckley manifiesta que los riesgos están comúnmente asociados con el consumo de Cannabis con alto grado de THC, que son más comúnmente encontrados en las formas genéticamente modificadas y en las formas cultivadas mediante hidroponía.

Así las cosas, se deben llevar a cabo estudios para determinar si en efecto el Cannabis genéticamente-modificado o hidropónico genera síntomas psicóticos. Solo si se comprobase que estas especies pudiesen generar daños, se podrían llegar a regular. En este modo, la prohibición del consumo de Cannabis que no es genéticamente modificado ni cultivado mediante hidroponía es excesiva y restringe más de los derechos invocados de lo estrictamente necesario para combatir el riesgo de algunos síntomas psicóticos.

#### ***iv. Riesgo de accidentes de tránsito.***

Si manejar vehículos bajo los efectos de la marihuana puede generar accidentes, entonces la prohibición estrictamente necesaria sería aquella que prohibiera simplemente consumir marihuana cuando se fuera a conducir un vehículo o maquinaria peligrosa.

Esto es lo que sucede actualmente con el alcoholímetro en la Ciudad de México, en relación con el alcohol, que ha funcionado satisfactoriamente. Así las cosas, la política prohibicionista restringe más allá de lo estrictamente necesario para proteger a los particulares de accidentes de tránsito.

Insisto que la posibilidad de generar accidentes de tránsito es el único riesgo a la salud de terceros que plausiblemente podría generar el consumo de marihuana. No obstante, este riesgo puede ser satisfactoriamente solucionado mediante la prohibición a la actividad conjunta de consumir Cannabis y manejar vehículos o maquinaria peligrosa.

Así las cosas, existen políticas alternativas a la Política Prohibicionista que son menos intrusivas y restringen en menor medida los derechos del quejoso. La política prohibicionista va más allá de lo estrictamente indispensable para combatir los riesgos a la salud plausibles generados por el consumo de Cannabis.

En consecuencia, la política prohibicionista no cumple con el tercer requisito del examen de escrutinio de las normas que restringen derechos humanos. El prohibicionismo no es proporcional, toda vez que restringe los derechos humanos más allá de lo estrictamente necesario.

### **3. Balance de efectos positivos y negativos.**

La restricción a los derechos a la autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y libertad individual, mediante la política prohibicionista, adicionalmente genera vulneración a otros bienes jurídicamente tutelados.

La política prohibicionista a partir de la cual se prohíbe la siembra, preparación, posesión y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de marihuana no solo no aporta un beneficio a la procuración de la salud y al combate de las adicciones, sino que genera un riesgo latente a la salud, seguridad e integridad personal de los consumidores de Cannabis y sus familias. En efecto, dada la actual política prohibicionista, para obtener y consumir marihuana es necesario involucrarse con el crimen organizado y con los narcomenudistas.

Por lo tanto, puede afirmarse válidamente que el ejercicio a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de la libertad, mediante la disposición del propio cuerpo para el consumo de marihuana sujeta a los consumidores a un riesgo mayor de perder su vida, ser víctimas de abusos y de consumir sustancias de mala calidad. Consecuencias que se apartan del mandamiento constitucional en el artículo primero, en el sentido de buscar la protección más amplia para las personas.

#### ***i. Riesgo de ser lastimado o de perder la vida.***

El incremento al riesgo de ser víctima de un delito o, inclusive, de ser privado de la vida se ha aumentado en la medida que se ha intensificado la política prohibicionista de consumo de marihuana.

En efecto, la política prohibicionista ha generado que las personas que consumen o quieren consumir Cannabis estén sujetas a un riesgo mayor a ser víctimas de actos de violencia relacionados con las drogas y los grupos criminales. Por lo que deviene inconstitucional, pues no se favorece en todo tiempo la protección más amplia, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución.

#### ***ii. Generación de un mercado negro.***



Como se señaló anteriormente, la política prohibicionista no es un factor que influya en el índice de personas que consumen Cannabis. Así las cosas, toda vez que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis están prohibidas, los consumidores de Cannabis se ven obligados a acercarse a los mercados negros de la sustancia, para satisfacer su deseo de consumir Cannabis. Esto somete a los consumidores de Cannabis en elevados riesgos a su integridad personal, salud y vida.

Esto es, como la política prohibicionista no tiene el efecto de disuadir del consumo de Cannabis, sí genera mercado negro, con efectos nocivos para los consumidores y, en general, para la población, tales como los siguientes:

- Precio elevado por el Cannabis: *"Un mercado negro es aquel en el que se venden los productos, ilegalmente, a un precio mayor que el precio tope."*<sup>17</sup>
- Asimetría en la información. En el mercado negro los vendedores de Cannabis, narcomenudistas y cárteles, no tienen ningún incentivo para informar de la calidad de su producto. Lo que en muchas veces ocasiona que los consumidores compren y consuman Cannabis de baja calidad, adulterada y que, inclusive, puede ser dañina para la salud.

Riesgo a ser privado de la libertad. El ejercicio de la autonomía personal y la disposición sobre el cuerpo propio mediante el consumo de Cannabis puede conducir a ser víctima de la Política Prohibicionista y ser sancionado por delitos a la salud.

La prohibición de consumir una sustancia no elimina su uso. Lo único que hace la prohibición es orillar el mercado de marihuana al mercado negro. En el mercado negro, cuando los productores tienen conflictos sobre el territorio de ventas, calidad del producto, sobre el pago de los bienes, el sistema de justicia no está disponible para solucionar tales problemas. Los consumidores no pueden reportar a las autoridades la venta de marihuana adulterada o de mala calidad. Productores y consumidores de marihuana deben solucionar sus propios conflictos y suelen depender en la violencia para hacerlo.

<sup>17</sup> Microeconomía, Antonio Bassols Zaleta, Ed. Cenage Learning, 2010, Ixtapaluca, Edo. de México, pág. 119.

5

Durante el periodo en que se ha extendido la "guerra contra las drogas" se ha incrementado el índice de mortandad relacionado con perseguir el consumo y tráfico de Cannabis.

Puede ser contra intuitivo que la prohibición no es una forma siquiera remotamente efectiva para combatir el consumo, pero las evidencias empíricas y la teoría económica acreditan que la prohibición genera mercado negro y que los mercados negros conducen a otros efectos adversos.

Bajo el anterior orden de ideas, el análisis de efectos positivos y negativos de la política prohibicionista debe llevar a la conclusión de que la prohibición a la siembra, posesión y consumo de Cannabis no tiene ningún beneficio y que, por lo contrario, genera una multiplicidad de perjuicios de carácter personal y social. No se genera ningún beneficio, pues como se desprende de los de las pruebas estadísticas elaboradas por la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y por el estudio empírico de la Fundación Beckley, la política prohibicionista no reduce el número de consumidores de Cannabis.

Nuestro aserto se confirma claramente de las siguientes observaciones de los investigadores comisionados por la Fundación Beckley:

*"Hay variaciones en el tiempo en los índices de consumo de cannabis entre países, pero esas variaciones no parecen verse afectadas por la probabilidad de arresto o sanciones por uso o cantidad, sin importar cuan draconianas sean las medidas.*

*(...)*

*Ha habido esfuerzos constantes para disuadir el uso de cannabis, mediante la prohibición y de policía. Esfuerzos para instrumentalizar la prohibición se han concentrado en el arresto de los consumidores. En los países desarrollados, con grandes poblaciones de consumidores de cannabis, las sanciones penales impuestas por posesión y consumo son usualmente modestas, en comparación con las que sería posible implementar. Más aún, la probabilidad de ser arrestado por un incidente relacionado con el uso de cannabis es en rango o menor de uno por cada mil. El esfuerzo prohibicionista no ha tenido mucho éxito para disuadir el consumo."*

En el mismo sentido, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, denominado "Guerra a las Drogas", de junio de 2011, llegó a la siguiente conclusión:

*"Los líderes políticos y las figuras públicas deberían tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen en privado: que la evidencia demuestra de manera abrumadora que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas, y que la guerra a las drogas no ha sido y no puede ser ganada. Los gobiernos tienen el poder*

15

*de llevar a cabo una combinación de políticas que sean apropiadas para sus propias situaciones, y manejar los problemas causados por los mercados de drogas y el uso de drogas de una manera que tenga un impacto mucho más positivo sobre el nivel del crimen relacionado así como sobre los daños sociales y para la salud.*"<sup>18</sup>

Insisto, aún bajo el riesgo de ser reiterativo que la política prohibicionista genera un mercado negro que propaga toda suerte de daños a los consumidores de Cannabis y a la población en general, y que, entre otros perjuicios, se produce el riesgo incrementado de perder la vida, o bien, de ser víctima de un delito, de perder la libertad o de consumir Cannabis adulterado.

En resumen, la política prohibicionista no cumple con el tercer requisito del examen de escrutinio de las normas que restringen derechos humanos. El prohibicionismo no es proporcional, toda vez que genera mayores perjuicios que beneficios para los particulares y para la sociedad en general.

Así, la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, previstas en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, deviene en una inconstitucionalidad, pues inhibe los derechos humanos a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y a no gozar de buena salud.

En primer lugar, la política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues proteger la salud de una persona contra su voluntad viola los derechos a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y libertad individual. En segundo lugar, la política prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones, ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma. Finalmente, la política prohibicionista no es proporcional, toda vez que suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos; existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores, y porque los perjuicios que genera la política pública son mayores a los beneficios que genera.

Por todo lo anteriormente expuesto, se debe concluir que la sentencia viola en perjuicio del quejoso los principios de congruencia y exhaustividad. En consecuencia, es procedente revocar la sentencia de amparo impugnada, declarar que los artículos impugnados de la Ley

<sup>18</sup> Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, "Guerra a las Drogas", Junio 2011, pág. 10.  
56

54

General de Salud son inconstitucionales y se debe ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita al quejoso sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado, excluyendo todo acto de comercio.

### III. SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DIGITAL DE LAS ACTUACIONES TRAMITADAS EN EL JUICIO DE AMPARO.

Se solicita a sus Señorías, la autorización para el uso de escáner portátil y/o cámara digital, por conducto de delegado designado, para la obtención de la correspondiente reproducción de las actuaciones tramitadas en el recurso de revisión que ahora nos ocupa, atendiendo a lo establecido en la Circular 12/2009, de 17 de marzo de 2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Apoya los anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el libro 17, tomo II, correspondiente al mes de abril de 2015, en la página 1830, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: **"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."**

### IV. SOLICITUD SOBRE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN.

En atención al contenido del artículo 107, fracción VIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente, se pone a consideración de sus Señorías, en uso de sus atribuciones, la presentación de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea este Máximo Tribunal quien conozca y resuelva en definitiva el presente recurso de revisión, por considerar que el asunto reviste las características de interés y trascendencia.

Al respecto, nuestro Máximo Tribunal fijó, en el siguiente criterio jurisprudencial, los requisitos para ejercer dicha facultad a saber:

“Novena Época  
Registro: 169885  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Abril de 2008  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 27/2008  
Página: 150

**FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.** La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos “interés” e “importancia” como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajudicial, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto “trascendencia” para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia, y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho.”

Por lo tanto, en un asunto de gran interés y trascendencia para el orden jurídico de nuestro país y la revisión constitucional de las políticas públicas que adoptan los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión en materia de salud, en lo tocante al consumo lúdico de la cannabis, es necesario que ese Tribunal Colegiado solicite a nuestro Máximo Tribunal ejerza su facultad de atracción, para el conocimiento y resolución del presente asunto, pues con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación generará la jurisprudencia necesaria para la resolución de asuntos posteriores.

61

Por lo antes expuesto y fundado a ustedes CC. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, atentamente pido se sirvan:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente escrito, señalando domicilio procesal para todos los efectos de ley.

**SEGUNDO.-** Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza la facultad de atracción para conocer y resolver el presente asunto.

**TERCERO.-** En su caso, y previo los trámites legales, revocar la sentencia recurrida y conceder al suscrito el Amparo y Protección de la Justicia Federal, en los términos del presente escrito.



AL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO

**PROTESTO LO NECESARIO**

Ciudad de México, a la fecha de presentación.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

2016 MAY 31 PM 10:17

2016 JUN -1 A 11: 06

**ASUNTO:** Se interpone Revisión Adhesiva.  
Expediente: [REDACTED]

PRIMER CIRCUITO  
DISTRITO FEDERAL

**ANTECEDENTES:** Relacionado con el recurso de revisión promovido por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada por el C. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Juicio de amparo número [REDACTED] promovido por [REDACTED]

México, DF, a 30 de mayo de 2014.

ORIGINAL: _____	COPIAS: <u>15</u>
EXPEDIENTES: _____	ANEXOS: _____
OTROS: _____	
RECIBIDO: Lic. Edgar Durán González	

II. Quinto Tribunal Colegiado en Materia  
Administrativa del Primer Circuito.  
**PRESENTE**

**Ana Lucia Tlahuech Rivera**, Subdirectora de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, **en representación de las autoridad señalada como responsable C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, con las facultades que me confiere el artículo 11 Bis, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004 y su reforma publicada en dicho medio informativo oficial el día 02 de febrero de 2010, en relación con el artículo Tercero, fracción XIV, numeral 5, del "ACUERDO General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamento de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 2014, ante usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a interponer **Revisión Adhesiva** al medio de impugnación promovido por la empresa quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada por el C. Juez Decimoprimer de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante de garantías, manifestándose para tal efecto lo siguiente.

### PROCEDENCIA DEL RECURSO

Si se toman en consideración los requisitos previstos por 82 y 94 de la Ley de Amparo establecidos en relación con el presente medio de impugnación, se concluye que el recurso de revisión adhesiva procede atendiendo a los siguientes requisitos.

- a) Puede ser promovido por la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo.
- b) La promovente se adhiere a la revisión interpuesta por otra de las partes en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo de que se trate.
- c) Se promueve dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, esto es, se contabilizan dichos días a partir de que el tribunal Colegiado correspondiente notifica la admisión del recurso de revisión.
- d) Se deben expresar los agravios correspondientes.

Lo anterior encuentra sustento en la Tesis XIV.2o..39 K, de la Novena Época, Instancia Segundo tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia común, página 1784, cuyo rubro es: **REVISIÓN ADHESIVA. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.**

En el caso en particular [REDACTED] interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo citado al rubro, en la cual se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia de la unión, por lo que resulta evidente que mi representado obtuvo sentencia favorable, cubriéndose por tanto los requisitos señalados en los incisos a) y b) que anteceden.

Asimismo, es de señalar que se notificó a mi representado el pasado 24 de mayo del 2016, el oficio No. [REDACTED] dictado en el [REDACTED] el cual contiene el auto de 23 del mismo mes y año, en el cual se admitió a trámite el recurso de revisión promovido por el referido quejoso en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en comento, por lo que el término para interponer el presente recurso de revisión adhesiva corren del 25 al 31 de mayo del año en curso, descontando de ellos los días 28 y 29 por ser inhábiles, por lo que se cubre el requisito señalado en la fracción c) que antecede.

Finalmente por lo que respecto al inciso d), es de mencionar que los respectivos



agravios se manifestaran en líneas posteriores. Por lo anterior, es de concluir que el presente medio de impugnación es procedente y debe ser admitido por sus Señorías al estar promovido en tiempo y forma de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo vigente, aplicable al presente asunto.

Previo a la expresión de agravios correspondientes, y atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo 93 de la Ley de Amparo vigente, me permito hacer valer ante esa Superioridad las causales de improcedencia que se actualizan en el presente juicio de garantías, misma que se expone a continuación:

**PRIMERO.** Respecto del artículo 479 de la Ley General de Salud, se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 107, fracción I, todos del ordenamiento legal citado con anterioridad. En efecto, tales disposiciones normativas establecen lo siguiente:

**Artículo 5o.** Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

**Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra **actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso**, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y **contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia**;

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.



AL COLEGIO DE  
ADMINISTRATIVOS DEL  
PRIMER CIRCUITO

**Artículo 63.** El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

**Artículo 107.** El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

(...)

**(El énfasis es propio)**

De la transcripción anterior se obtiene que el legislador hizo la distinción para la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico de la parte quejosa, entre aquellas normas generales que causan perjuicio por su sola entrada en vigor y aquellas que para que entrañen una afectación en la esfera de derechos del gobernado, requieran irreductiblemente de un acto posterior de aplicación.

Además, los artículos transcritos evidencian dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, a saber: que la disposición relativa se reclama a partir de su entrada en vigor; o bien que se reclame con motivo del primer acto de aplicación, siempre y cuando en ambos casos se irroge perjuicio al quejoso.

En el primer supuesto, cuando se reclama la disposición normativa por su sola entrada en vigor, esto es, en su carácter de autoaplicativa, para acreditar el interés que permita reclamar tal acto, el quejoso debe demostrar que se ubica en la hipótesis de la norma reclamada, es decir, que obligue a hacer o dejar de hacer una determinada conducta, lo cual le irrogaría un perjuicio, sin que sea necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad.

Para precisar la manera en que se han de distinguir las disposiciones que por su sola vigencia causan perjuicio (autoaplicativas), así como aquellas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativas), es conveniente transcribir el contenido de la tesis de Jurisprudencia número P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 198200 del IUS y en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

**LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.** Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de

- 5 -

individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

Conforme al criterio jurisprudencial indicado, para distinguir cuándo se está en presencia de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, que atiende a la manera en que se producen los efectos de la disposición impugnada, ya sea que éstos se actualicen de manera inmediata, o bien que para hacerlo se requiera de algún acto o evento (condición) que origine la actualización de la norma.

Por lo que se concluye, que cuando se reclama la ley por considerarla como autoaplicativa es necesario demostrar que los efectos de la disposición impugnada irroga una afectación en la esfera de derechos del gobernado que se actualiza de manera inmediata a partir de su entrada en vigor. Consecuentemente, si la norma en cuestión prevé alguna carga u obligación para el particular, pero el nacimiento de esa carga u obligación depende de alguna condición prevista en la ley, es claro que se está en presencia de una norma heteroaplicativa.

En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 479 de la Ley General de Salud, **en su carácter de heteroaplicativo**, pues considera que con la emisión del oficio No. [REDACTED], signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se aplicó el aludido ordenamiento legal, irrogándole perjuicio en la esfera de sus derechos humanos.

Sin embargo, en primer lugar, no debe pasar desapercibido que dicha disposición legal tildada de inconstitucionalidad, **no vincula al accionante de garantías a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia ya que no crea, transforma o extingue la situación concreta de derecho del quejoso**, aunado de que requieren de la actualización de una condición, por lo que es permisible afirmar que el acto admitido por mi representada, tiene el carácter de heteroaplicativo, sin que a la fecha exista un acto concreto de aplicación.

Esto es así ya que para determinar la aplicación de lo dispuesto por los preceptos normativos en cita, resulta indispensable que la parte quejosa acreditara que consume personalmente cannabis sativa, indica o mariguana, lo que deja de acreditar con prueba alguna permitida por la Ley de la materia.

Sin que pase por inadvertido que la impetrante de garantías exhibió copia simple del oficio [REDACTED] **no obstante en dicho documento no se aplicó el artículo 479 de la Ley General de Salud**, lo cierto es que de la propia documental que exhibe la accionante de garantías en su escrito inicial de demanda, se advierte que no se le está aplicando en su perjuicio dicho ordenamiento legal impugnado.

De lo que se colige, que dicho ordenamiento legal no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, debiéndose sobreseer en el juicio por el artículo 479 de la Ley General de Salud, al **dejarse de acreditar plenamente el acto de aplicación de la norma, o bien, que el accionante sea consumidor de dicho estupefaciente**. Corroboro lo manifestado en las líneas que anteceden, la tesis número II.3o.C.3 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el registro 191475 del IUS y en la página 1205, del tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

**LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN.** En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma

- 7 -

automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia.

**Segundo** En relación con los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, todos de la Ley General de Salud, es improcedente conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, en virtud de que el otorgamiento implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad general, así como a diversos ordenamientos legales. Lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X, 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su concesión sería nugatoria para al quejoso ante la inexistente de una plataforma política integral para autorizar el uso de marihuana con fines lúdicos; tal y como a continuación se acredita.

**1.** Por una parte los ordenamientos legales antes citados establecen a la letra lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Párrafo adicionado DOF 03-02-1983

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Párrafo adicionado DOF 07-02-1983

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2014

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la

7el

- 9 -

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Párrafo adicionado DOF 12-10-2011

Artículo reformado DOF 31-12-1974

Reforma DOF 14-08-2001: Derogó del artículo el entonces párrafo primero (antes adicionado por DOF 28-01-1992)

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Fracción reformada DOF 06-12-1977, 12-02-2007

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Fracción reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo reformado DOF 18-01-1934

De los anteriores ordenamientos legales se advierte lo siguiente:

- ✓ Que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece;
- ✓ Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia;
- ✓ Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud;
- ✓ Que es facultad exclusiva del Senado, entre otras, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
- ✓ Que es facultad y obligación del Presidente de la República, entre otros, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
- ✓ Que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:
  - Autodeterminación de los pueblos;
  - No intervención;
  - Solución pacífica de controversias;
  - Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
  - Igualdad jurídica de los Estados;
  - Cooperación internacional para el desarrollo;
  - Respeto, protección y promoción de los derechos humanos; y,
  - Lucha por la paz y la seguridad internacionales;
- ✓ Que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
- ✓ Que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

ESTADO LIBRE  
MATERIA ADM  
PRIMER





2. El accionante de garantías solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, específicamente con el objetivo de que se ordene a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que deje de observar el contenido de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, todos de la Ley General de Salud, y se le autorice el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) así como el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros  $\Delta 6a$  (10a),  $\Delta 6a$  (7),  $\Delta 7$ ,  $\Delta 8$ ,  $\Delta 9$  (11), y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico u personal de marihuana.

3. Los artículos 61, fracción XXIII y 77, ambos de la Ley de Amparo, establecen a la letra lo siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

OS MEH... Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

COLEGIADO E

ISTRATIVA DE

PROCURADO

De lo que se colige que el amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley, y que en caso de que el efecto de la concesión del amparo, se trate respecto de un acto de carácter negativo, como en el caso en particular, el juzgado deberá determinar con precisión los efectos del mismo, obligando a la autoridad a respetar el derecho de que se trate, en el caso en análisis, a decir del quejoso, sería el libre desarrollo de su personalidad.

Sin que pase por inadvertido, que en la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente, se dejó claro que un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la

persona humana, **racional y libre**, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios, en el cual se estableció:

“...  
En ese sentido, el juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado.  
Un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios tales como la libertad, igualdad y pluralidad, que estén reconocidos en una Constitución o Norma Fundamental, los cuales deben ser garantizados y protegidos ante su desconocimiento a través de los instrumentos jurisdiccionales que la propia Constitución prevea.

“...  
Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

**4.** Que actualmente la política pública en relación con el consumo lúdico de marihuana se encuentra prohibida e incluso tipificada como delito, su adquisición, comercialización u obtención por cualquier vía de la citada droga. Lo anterior, es así ya que tanto en la Ley General de Salud, como en el Código Penal Federal, prevalecen otras infracciones administrativas y penales que necesariamente tendrían que cometerse para que en el caso que nos ocupa, el amparo pueda surtir efectos, pues no existe hoy día una autorización para poseer drogas como la cannabis en cantidades mínimas y necesarias para el consumo personal e inmediato, sólo puede concluirse que implícitamente se tolera o permite la adquisición ilícita del producto a consumir (artículos 192, 477, 478 y 479, todos de la Ley General de Salud).

En este entendido, resulta evidente que en el sistema penal vigente, la posesión de marihuana, aún en cantidades mínimas (hasta 5 gramos), sigue constituyendo una conducta típica de delito, y que si bien, de acreditarse que el poseedor es farmacodependiente o consumidor, el Ministerio Público no ejercerá acción penal, ello sólo implica la existencia de una excluyente que debe probarse, pero de ninguna forma una autorización para consumir marihuana o para adquirir la misma o su semilla.

Actualmente se encuentra prohibido el uso lúdico de marihuana, de conformidad con la Ley General de Salud, concretamente los artículos 234, 237, 245, 247, 248, 456, 474, 478 y 479, y en particular, su posesión está sujeta a los límites estrictos de la cantidad (5 gr.) establecida en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, prevista en el artículo 479 del aludido ordenamiento.

Asimismo, dicha droga es regulada, entre otros ordenamientos legales, en los siguientes:

- Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Ley General de Salud, relativos a autorizaciones y vigilancia sanitaria;
- Código Penal Federal, en sus artículos 84, fracción III, inciso c), y 90, fracción II, inciso d), 194, 195, y 195 bis, fracción II;
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2, fracción I, y otros;
- Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972;
- Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971;
- Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
- NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones;

### Conclusión.

Una concesión del amparo, acorde a lo estrictamente solicitado por el quejoso, en nada le beneficiaría, pues podría implicar la comisión de uno o más delitos, o cuando menos, la continuación de los efectos de delitos ya cometidos, así como violación a diversos ordenamientos legales administrativos, e incluso internacionales. Ello, porque aunque se autorice la siembra o cosecha de marihuana, la obtención de una semilla, que resulta indispensable para dichos procesos, sigue constituyendo un ilícito.

En suma, no es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar el consumo de marihuana, conlleva la comisión de un delito por parte de quienes vendan, suministren o entreguen por cualquier medio dicha droga o su semilla a quien la consumirá; la posible comisión de delitos por parte del propio accionante de garantías al recibir la droga o la semilla necesaria para su siembra y cosecha, e incluso, la eventual comisión de ilícitos diversos por parte de la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Ante las circunstancias expuestas, no es permisible conceder el amparo al quejoso, ya que se insiste, el presupuesto necesario para que pudiese, en su caso, realizar los procesos para los que se solicita el amparo, derivados de la propia demanda de amparo, consistentes expresamente en sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, **implicarían necesariamente la comisión previa de uno o más de los delitos previstos en normas punitivas no impugnadas de la Ley**

**General de Salud y del Código Penal Federal**, esto es así ya que al día de hoy no se encuentra regulada la forma lícita para adquirir, importar ni acceder a la marihuana o a su semilla, y al no existir una regulación específica para uso con fines lúdicos o recreativos de marihuana, al permitir esta conducta, **no se garantiza la protección de terceros, incluida el núcleo esencial de la sociedad mexicana, la familia.**

A mayor abundamiento, sólo podría sembrarse, cultivarse y cosecharse marihuana, si existe como presupuesto la obtención de una semilla de dicha planta, a la vez que sólo podría prepararse, poseerse o transportarse la misma, si existe como presupuesto la adquisición o importación de dicha droga, conductas que finalmente, siguen constituyendo ilícitos penales previstos en normas que no fueron impugnadas ni por tanto, materia de análisis en el presente juicio.

Máxime que tampoco se solicitó a la autoridad sanitaria, autorización para adquirir o importar marihuana, ni menos se solicitó el suministro de la misma por parte del Estado, lo que deriva en el hecho de que aun concediéndose el amparo para la siembra, consumo y demás efectos previstos en la sentencia, prevalece la ilicitud en el acceso a la droga que nos ocupa.

De ahí que, si para sembrar o realizar cualquiera de las conductas planteadas por los solicitantes del amparo, debe previamente cometerse un delito por el quejoso o por quienes le provean la marihuana o su semilla, e incluso infringir tratados internacionales, por lo que resulta inconcuso que existe un impedimento grave para la emisión de un pronunciamiento de orden constitucional.

El artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el presente asunto en caso de concederse el amparo al quejoso, no quedan exentos de la comisión de un delito ni quién le provea de la droga, ni el propio quejoso en virtud de que no solicito la protección del amparo para efectos de adquirir la marihuana.

A la vez, un principio del juicio de amparo, es que no puede archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, lo que así se ordena en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. En esos términos, sólo puede concederse la protección de la justicia federal a partir del juicio de amparo, mediante una sentencia que sea de posible cumplimiento, por lo que si la ejecutoria de amparo se dictará en el extremo de ordenar algo que

- 15 -

conllevará la comisión de un delito o la continuación de sus efectos, me parece que ello destruye de origen la posibilidad de conocer de un juicio con dichas implicaciones.

Pero cuando, como en el caso, sólo se pidió autorización administrativa para ciertos efectos relacionados con el consumo de marihuana, quedan excluidos de la litis de amparo factores vinculados con el comercio y adquisición de la droga, luego entonces, es evidente que de conocerse el planteamiento que formulo el quejoso, la sentencia que se dictare, sólo podría suponer que se parte de la comisión de un delito.

Es decir, si una persona solicita autorización para sembrar, cosechar, poseer, transportar y consumir marihuana, es de suponerse que ya cuenta con la misma o que eventualmente accederá a la misma para poder realizar dichos actos; pero si hoy día, no existe vía lícita de adquisición de la marihuana o de su semilla, luego entonces, resulta jurídicamente imposible restituirlos en el goce del derecho al auto consumo lúdico de la marihuana que alegan.

Como he apuntado, distinto sería el supuesto si en el juicio que nos ocupa, hubiese sido también materia de análisis el proceso de adquisición, comercio o recepción del narcótico, a la vez que el sistema punitivo relacionado; sin embargo, ello no fue el caso, y deriva en un impedimento para conocer del asunto.

El artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXIII, señala que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley citada, por lo que si el propio artículo 214 de la propia ley, señala que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, en el caso, nos encontramos ante un supuesto que actualiza dicha improcedencia.

Así, si en el caso, la materia para la ejecución de la sentencia dictada, es que se ordene el otorgamiento de una autorización para el consumo de marihuana, a la que hoy, sólo puede accederse ilícitamente, luego entonces, **es de concluir que el quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita, o al menos, no dentro de la ley, pues sigue penalizada la adquisición de marihuana**, así como todas las posibles vías para que acceda al narcótico o a su semilla.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que dicha imposibilidad también deriva del contenido del artículo 89, Constitucional, en donde se establece como facultad del Presidente de la República celebrar tratados internacionales, así como terminar,

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en el caso en particular, nuestra país ha signado diversos convenios en materia de drogas, en los cuales se incluye la marihuana, de tal manera que constitucionalmente, sólo el C. Presidente Constitucional es el único facultado para suspender o modificar dichos convenios.

México es parte del "Sistema Internacional de Control de Drogas" (SICD), que se encuentra respaldado por tres tratados internacionales, a saber: La Convención Única sobre Estupefacientes de 1966, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Respecto la Convención Única sobre Estupefacientes, enmendada por el protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única, vale mencionar que ha influido en las leyes sobre prohibición de drogas en todo el planeta. Actualmente, cerca de 153 países han ratificado este instrumento y lo han incorporado a su derecho nacional. Las finalidades de la Convención Única son: "limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos". Este tratado dispone de un marco conceptual de sustancias sujetas a control, entre las que se encuentran la cannabis, la hoja de coca, el opio, etcétera.

La Convención Única contempla a dos organismos internacionales especializados de llevar a cabo el control de las sustancias: La Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico Social y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entre las funciones de la primera, destacan la modificación de las listas de estupefacientes y la emisión de recomendaciones; en contraste, las funciones de la segunda versan con la comprobación de obligaciones para limitar el cultivo, la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes para fines médicos y científicos. **En caso de incumplimiento, la Junta Internacional de Fiscalización puede ejercer sus facultades para solicitar explicaciones a un gobierno** cuando considere que la convención corre un grave peligro porque un país o territorio no ha cumplido con el tratado

En segundo lugar, tenemos la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Este tratado incluyó nuevas sustancias en un listado de cuatro tablas y su propósito es limitar a fines médicos y científicos, la fabricación, exportación, importación,



distribución, existencias, comercio, así como el uso y posesión de las sustancias de psicotrópicas.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, misma que ya contempla una obligación para los Estados que sean parte de dicho tratado de: "... adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal...".

Bajo tal contexto, resulta improcedente el presente juicio de amparo que tiene por objeto declarar inconstitucionales varios de los artículos de la Ley General de Salud, que apuntalaban la negativa de la COFEPRIS de emitir autorizaciones para la realización de una serie de conductas relacionadas con el consumo personal de marihuana con fines recreativos. De ahí que sus efectos rebasen los fines médicos y científicos a los que alude el SICD, particularmente la Convención Única de 1961 y la Convención de Estupefacientes de 1988. Por lo tanto, es de advertir que, **de concederse el amparo al quejoso, dicha acción genera el incumplimiento de obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.**

**Tercera.** En relación con los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, procede se dicte el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues el hoy quejoso también carece de interés jurídico/legítimo, ello con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Lo anterior ya que si bien la parte quejosa manifiesta que se ve afectada por la actuación de la autoridad ejecutora que señala en el presente juicio de garantías, pues a su decir con los ordenamiento legales citados, se le veda su derecho a la identidad personal, dignidad humana, autodeterminación personal y corporal, siendo que la política prohibicionista no tiene un fin legítimo y no es proporcional.

Sin embargo, lo cierto es que en el oficio emitido por el C. Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, sólo se citaron los referidos artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, sin que ello constituya acto de aplicación alguno.

Esto es así en virtud de que a través de dicho documento sólo se citó los ordenamientos legales de referencia, informándole que "... hasta el momento no puede ser

expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (...)" (Sic).

De lo anterior es evidente que por medio del oficio en cita, la responsable dio respuesta a la consulta formulada por la ahora recurrente en el sentido de que por el momento no podía ser expedida la autorización solicitada, de ninguna manera se puede considerar que dicho oficio obligue a la quejosa a realizar acción alguna o que se le sancione, o bien se vede derecho alguno adquirido por la accionante de garantías.

Apoya la anterior conclusión la tesis 1a. V/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 425, que establece:

**LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.** Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que esas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión; pues lo relevante para ello consiste en demostrar que en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley.

Es de resaltar que con motivo de los citados artículos de la Ley General de salud, no se afecta la esfera jurídica/legítima de la parte quejosa.

Se realiza tal afirmación porque si bien es cierto que la quejosa arguye que ser una persona física, mayor de edad en pleno uso de sus derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y salud quien pretende se le autorice el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) así como el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros  $\Delta 6a$  (10a),  $\Delta 6a$  (7),  $\Delta 7$ ,  $\Delta 8$ ,  $\Delta 9$  (11), y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembre, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte



en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico u personal de marihuana, también es cierto que el impetrante de amparo no acredita fehacientemente con documento idóneo la afectación de su interés jurídico-legítimo.

Ahora bien, de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 constitucional y 73, fracción V de la Ley de la Materia, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que resulta desconocido o violado a través de algún acto de autoridad, derivado de lo cual se otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea restituido.

En el caso que nos ocupa, el quejoso acude al juicio de garantías reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, sin embargo, no acredita con prueba alguna que la emisión de tales ordenamientos legales le causen perjuicio o agravio alguno en su esfera de derechos fundamentales, pues para empezar, no acredita de manera fehaciente que efectivamente lleve a cabo el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana.

Así, al no existir elementos de convicción palpables e idóneos con los que la impetrante acredite de qué forma su esfera jurídica se ve afectada, este H. tribunal Colegiado debe sobreseer el presente juicio de amparo, ya que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla, situación que acontece en el presente asunto. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia I. 1o. A. J/17, Gaceta del SJF, 8 a. época, Tomo: 60, Diciembre de 1992, página 35, cuyo rubro es el siguiente: **"INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". No debe pasar por inadvertido a ese H. Tribunal de alzada que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia,** bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden

actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, **es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor**, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme, por lo que resulta procedente se valore la causal de mérito bajo los argumentos apuntados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J.122/99, Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, visible a página 28, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.**

Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.

**AGRAVIOS**

**PRIMERO.-** Los agravios Primero a Cuarto vertidos por la quejosa recurrente son

infundados, por lo que la determinación del A quo no puede ser modificada o revocada, esto es así ya que la impetrante de garantías señala en su recurso que:

a) El quejoso alegó,... que eran titular del derecho a la identidad personal y la dignidad humana, ..., El Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por los quejosos y se limitó al derecho a la salud, ... " (sic);

b) El accionante de garantías, reitera los razonamientos que expuso en su demanda de amparo.

c) "En el caso concreto, ..., sino que se prohíbe toda conducta relacionada con el mismo". (Sic)

Dichos argumentos son infundados por un lado y por otro inoperantes, pues en el caso en particular efectivamente el Cannabis se encuentre restringido por la Ley impugnada, resaltando que las autoridades en materia de salud tomaron la medida de prohibir dicha sustancia para proteger el derecho a la salud, lo cual debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales, como es el caso.

Tiene aplicación al respecto la Tesis: 1a./J. 50/2009 de la Novena Época Instancia: Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Abril de 2009, visible en la página: 164, Materia(s): Administrativa, que establece lo siguiente:

AL COLEGIO DE  
ADMINISTRATIVA DE  
CIRCUITO

**DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.** El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a

*que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud.*

Además, la parte quejosa no acreditó con medio de convicción alguno lo que sostiene, es decir, que con las acciones tomadas por las responsables, contenidas en los artículos impugnados por este medio, no se protege, ni se promueve la salud de las personas, y que el uso de dicha sustancia constituya un medio más seguro para proteger la salud de las personas, benéfico para la sociedad y menos oneroso para el sector salud.

Por otro lado es de resaltar que la quejosa omitió exhibir constancias aptas para demostrar su dicho; por consiguiente no acredita interés jurídico/legítimo, pues deja de exhibir documentos idóneos que demuestren que el consumo lúdico que pretende no cause afectación a terceros. Esto es, si bien el quejoso manifiesta que en caso del consumo lúdico que pretende solo generaría un perjuicio a su persona, de ello no se sigue que efectivamente sea cierto para asumir que se ubica en el supuesto de prohibición.

Así, su situación de índole particular, en principio se considera que es una simple expectativa de derecho de la que quisiera gozar el quejoso, esto es, consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana, sin embargo dicho insumo no es lícito de conformidad con lo establecido en los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, por lo que el entorno jurídico del quejoso en cuanto a que no va a poder comercializar el producto que defiende por esta vía, no puede jurídicamente pretenderse que, amén al vacío legislativo, garantía de todas las manifestaciones de libertad del individuo y que por tanto tutele intereses particulares o individuales, este por encima de los intereses públicos o de la comunidad, ya que no se explica razonablemente la prerrogativa a favor de un individuo, cuando se afecte de manera notoria a la sociedad como lo evidencio el A quo, en el considerando Sexto de la sentencia que se impugna.

Esto se robustece, por las razones que la informan, con el contenido de la tesis I.4o.A.445 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1786, tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

**INTERÉS PÚBLICO. FACULTA PARA RESTRINGIR UN PRIVILEGIO QUE DEVINO ILEGAL, AL ESTABLECERSE CONDICIONES CONCRETAS PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO QUE AFECTA AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.**

La seguridad jurídica, concretamente la proscripción de la retroactividad, no puede llegar al extremo de proteger un derecho o privilegio que es opuesto a lo lícito o es ilegal, por ser inconveniente a la sociedad y, por ende, susceptible de restringir, incluso, la libertad de trabajo, industria o comercio. Por lo que, si se expide un permiso para exhibir cetáceos sin taxativas, y después de su emisión ese derecho está constreñido a obrar conforme a una disposición que establece las condiciones concretas para regular la conservación de mamíferos marinos en cautiverio, con el surgimiento de esta norma se restringió a la agraviada el margen de libertad que el orden público imperante ha determinado, deviniendo en ilegal lo que se oponga y facultando la consecuente limitación de la autorización que tenía, esto es, cambió el contexto en que se le expidió el permiso, sin que tal proceder pueda estimarse violatorio del artículo 14 constitucional. Lo anterior, porque el nacimiento, permanencia y vigencia de un derecho de índole particular, está determinado y regido por el contexto del entorno normativo que rija; por lo que, no obstante que el vacío legislativo sea la cuna y garantía de todas las manifestaciones de libertad del individuo, ese privilegio tutela intereses particulares o individuales que ceden frente a los públicos y de la comunidad, ya que no se explica, razonablemente, la preeminencia de un individuo cuando su status precede de manera ostensible a la sociedad. Por tanto, si bien es cierto que el particular contaba con autorización para la exhibición de cetáceos, también lo es que, posterior a la emisión de la autorización, la autoridad consideró urgente y vital establecer determinadas condiciones concretas a través de una norma oficial mexicana, respecto de cómo garantizar la protección y bienestar de los mamíferos marinos en cautiverio, prohibiendo su exhibición temporal o itinerante, circunstancia que de ninguna manera puede estimarse que viola el artículo 14 constitucional, pues con el surgimiento de esa norma la autorización que tenía la agraviada para realizar este tipo de actividad quedó limitada, razonablemente subordinada y reducida a preservar los intereses de la comunidad.

Luego, no es correcto pretender basar la inconstitucionalidad de una norma obligatoria, en situaciones hipotéticas o particulares de la quejosa, dada la característica de generalidad con que cuentan las leyes o normas administrativas como las que se reclaman en la especie.

**Así, si el quejoso aduce que la sentencia impugnada por este medio, transgrede la garantía prevista en el artículo 14 Constitucional de debido proceso legal, porque pretende siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana, para lo cual solicitó autorización a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, es una supuesta situación de autoconsumo lúdico debido a que ni siquiera consta en autos que el quejoso efectivamente sea un consumidor de dicho** psicotrópico (agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento), **de tal suerte que resulta ser un dato incierto; luego, de ser una situación particular y propia del quejoso, no puede oponerse a la naturaleza de carácter general, abstracto e impersonal de todo ordenamiento legal, ni puede fundarse su inconstitucionalidad en circunstancias particulares como las argumentadas por la quejosa.**

Sirve de apoyo al anterior argumento, por analogía, la tesis 2a./J. 88/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que expresa:

**"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDOTIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.** Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley."

QUINTO TRIBU  
MATERIA ADI  
PRIME

Finalmente, es de resaltar que las razones expuestas por la parte quejosa no se encuentran encaminadas a combatir los razonamientos establecidos por el A quo en la sentencia hoy combatida, por lo tanto, los agravios hechos valer por la parte quejosa deben desestimarse por inoperantes. Como ha quedado demostrado, no guardan relación alguna con las consideraciones jurídicas que sirvieron como base para determinar negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Esto es así, ya que la quejosa a lo largo de escrito de revisión, sólo reitera las manifestaciones que vertió en los conceptos de violación de la demanda inicial de amparo, situación que torna inoperantes sus argumentos. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 109/2009, Página: 77, que a la letra dice:

**AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.** Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.

**SEGUNDO** - de manera particular en los agravios, segundo a quinto la quejosa argumenta en esencia:

a) Que el A quo omite analizar el derecho con que cuenta el quejoso como persona física, respecto de los derechos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, a la disposición a la propia salud personal, a la autodeterminación, pues carece de objetividad y vulneran los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues tales derechos se defienden desde el punto de vista subjetivo del quejoso quien manifiesta estar consiente de disponer de su cuerpo y su vida conforme a su propia concepción de lo es que bueno para él, mediante el consumo responsable y consciente de Cannabis.

b) El A quo en la sentencia impugnada, viola el derecho del quejoso a disponer de la salud propia, respetando las decisiones de salud personal.

c) Los únicos argumento que vierte la sentencia de amparo nos refieren a la violación al derecho a la disposición de la salud propia, sino a la supuesta facultad del Estado para restringir tal derecho, reiterando los argumentos que vertió en su escrito inicial de demanda relativo al derecho que le asiste, consistentes en titularidad del derecho

de autodeterminación, libertad individual.

d) El A quo omite analizar el argumento de los quejosos, relativo a que sin la política prohibicionista no se generaría menor consumo de estupefacientes y que sin la misma tampoco habría aumento en el consumo, esto es así ya que la prohibición no es una forma efectiva para combatir las adicciones y el consumo. Además, señalan que dicha políticas sólo han generado un mercado ilegal.

e) El A quo dejó de valorar que el autoconsumo de Marihuana no perturba a la sociedad, el mero consumo no genera ningún efecto nocivo sobre la sociedad en general, no frente a terceros, es el consumidor quien recibe todos los perjuicios o beneficios del consumo de tal planta.

f) El A quo realiza una indebida valoración de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pues con dicho documento no se acredita que la política prohibicionista cumple con los exámenes de escrutinio y proporcionalidad a los que deben ser sujetos las normas que restringen derechos humanos.

g) El A quo realiza omitió analizar que los artículos reclamados aplican una política prohibicionista para la siembra y autoconsumo de cannabis sativa que no superan los exámenes de escrutinio formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la restricción de derechos fundamentales en relación con los derechos de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia.

En relación con dichos argumentos, es de señalar que las restricciones impuestas en la LGS están debidamente justificadas de conformidad con lo establecido por nuestro máximo órgano de control constitucional en la Tesis 1a.LXVI/2008, cuyo rubro es **"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VALIDAS"**, atendiendo a lo siguiente:

1. Son admisibles, en tanto y cuanto se dirigen a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, consagrado en el Artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el de los propios consumidores.

La restricción contenida en la Ley General de Salud, en materia de drogas, busca garantizar los derechos fundamentales contenidos en los párrafos cuarto,





83

- 27 -

séptimo y octavo del artículo 4º Constitucional, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 4º. (Primer párrafo derogado.)

...

**Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.** La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federales materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

..

**Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.**

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. **El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.**

...

De tales disposiciones constitucionales, se advierte, en primer término, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que especial cuidado merece la salud de los niños y las niñas por ser un sector vulnerable de la población, siendo sus padres o tutores los obligados a preservar tal derecho, estando obligado el Estado a proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de tales derechos. En cumplimiento a tal obligación, se establecieron los ordenamientos legales impugnados en el juicio de garantías en comento.

2. Son necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción, es decir, en el caso en particular está demostrado científicamente que los efectos del consumo de Cannabis y/o THC, es perjudicial a la salud física y psicológica de las personas, por lo que prohibir su consumo y las actividades relacionadas con dicha planta, se encuentra válidamente justificada y necesaria para evitar el deterioro a la salud de las personas que la consumen y a la de los consumidores pasivos que inhalan el humo generado del consumo. Lo anterior es así, ya que no consumir dicha droga es la forma idónea para evitar perjuicios físicos o psíquicos a las personas, no hay posibilidad de que exista algo menos restrictivo, es decir, que su consumo sea permitido dado que con alguna otra cosa se pueda contrarrestar los efectos negativos de su consumo, pues no existe forma de evitar el deterioro físico (DE LA SALUD) de las personas con el consumo de Cannabis y/o THC, incluso en algunos casos puede tener efectos irreversibles, Lo anterior es así, ya que de conformidad con la información proporcionada por el

AL COLEGIO DE  
INSTRUMENTOS DE  
CIRCUITO

Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), el estímulo de receptores de Cannabinoides puede dar lugar a las siguientes respuestas:

- ❖ Sensación de euforia, sedación y relajación;
- ❖ Alteraciones de la percepción temporal;
- ❖ Actividad analgésica y antiinflamatoria;
- ❖ Actividad orexígena y antiemética;
- ❖ Ataxia, debilidad muscular;
- ❖ Disminución de la presión intraocular;
- ❖ Hipotermia;
- ❖ Broncodilatación;
- ❖ Hipotensión y taquicardia;
- ❖ Efectos neuroendócrinos;
- ❖ Inmunoestimulación a dosis bajas e inmunosupresión a dosis altas;
- ❖ Efectos antiproliferativos.

Respuestas que indiscutiblemente, no otorgan al individuo una integridad personal ni lo ayudan a desarrollarse como persona; careciendo por tanto de un alto nivel de vida físico y psíquico. El consumidor de dichas drogas, no actúa con libertad, sino impulsado por una fuerza sensitiva, pierde su libre albedrío y está sometido a la fuerza sensitiva. No puede haber libertad contra la dignidad. Aun cuando sea un acto privado, el consumo de drogas no constituye un acto indiferente sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general. Por lo tanto la ley debe prohibirlo, a fin de lograr los fines del Estado Social de Derecho, y evitar que se vulnere la dignidad humana.

3. Son proporcionales, porque el grado de la restricción sobradamente es recompensada por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad, tal y como se demuestra a continuación:

- Actualmente, el Instituto Nacional de Salud Pública (<http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001538>) realiza estudios en donde quedan acreditados:

a) Que "En general existe poca tolerancia social para el consumo de drogas, más de 90% de los varones y de las mujeres afirmaron que sus papás, y 83 y 91% que sus amigos verían mal si ellos o ellas usaran drogas; la percepción sobre la aceptación del consumo entre los jóvenes es mayor, 38% de los varones y la misma proporción de mujeres consideraron que los jóvenes en

general ven bien o, con indiferencia, el consumo. Sin embargo, al analizar la relación entre la percepción de aceptación y el consumo de drogas se encuentran diferencias interesantes, **siendo más frecuente el uso cuando el menor percibe aceptación social hacia el consumo**; solamente 3% de quienes perciben poca tolerancia en sus padres aceptaron consumir drogas, en comparación con 14% de quienes perciben tolerancia; la misma tendencia se observa en relación con la tolerancia por parte de amigos cercanos, 1.8 y 5.2% entre hombres y mujeres, respectivamente" (sic)

b) Que **"Uno de los factores que más consistentemente se ha asociado con el consumo de drogas es la disponibilidad"**,<sup>18,26</sup> cada vez más jóvenes experimentan con drogas por tenerlas disponibles en su medio, de hecho los datos de la encuesta señalaron que a 35% de los adolescentes les era fácil obtener drogas y que el riesgo de experimentar con ellas se incrementaba 1.89 veces cuando esto ocurría" (sic)

- Además, de acuerdo con la información proporcionada por la Directora de Vinculación y Coordinación Operativas de la CONADIC ([http://www.cenadic.salud.gob.mx/prensa/2013/legalizacion\\_090813.html](http://www.cenadic.salud.gob.mx/prensa/2013/legalizacion_090813.html)):

a) **Hay cifras oficiales que muestran una fuerte asociación entre las conductas ilícitas y el consumo de drogas**, pues a escala nacional el 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de sustancias psicoactivas;

b) 95 por ciento de los reclusos en centros penitenciarios del país son consumidores de algún enervante, y sólo 40 por ciento de ellos usaban dos o más drogas en promedio antes de ser apresados, mientras que el resto empezó su consumo en la cárcel;

c) 65 por ciento de quienes están privados de su libertad son poli-consumidores (ingieren alcohol y al menos dos drogas más), y 55 por ciento de los menores infractores reportan el uso de alguna sustancia ilícita o de bebidas embriagantes.

- Asimismo, se tienen datos de que no sólo se carece de la infraestructura médica necesaria para atender la demanda de atención, sino de los recursos económicos suficientes para otorgar a esa población una rehabilitación integral. El sistema de salud cuenta con un presupuesto de mil 200 millones de pesos, para atender 112 millones de personas con algún grado de adicción o predisposición.

Bajo esta óptica, por defender la libertad individual no se puede atropellar los bienes fundamentales de los asociados como los derechos a la vida, a la paz, a la salud, a la seguridad, a la convivencia, al bienestar, etc.; lo anterior es así ya que no puede haber libertad sin racionalidad.

Aunado a lo anterior, es necesario tomar en consideración:

- Que el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, son garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo, mismas que no pueden suspenderse ni restringirse.
- La gravedad del consumo de Cannabis y/o THC en México donde diariamente del 100% de las causas de fallecimiento de las personas, el 7 % son atribuibles al consumo de dicha droga (Según tabla de CONADIC/SSA/DGAE, Pág. 20), además de ocasionar un perjuicio contra la salud, el medio ambiente y el gasto en salud;
- Que el uso de los productos del cannabis constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en el mundo, causando una gran proporción de mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles.
- Que el humo de Cannabis y/o THC de segunda mano, compuesto por más de 6 mil sustancias tóxicas es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos, causando enfermedades graves en los adultos y, en particular, en los niños. (Información de CONADIC Pág. 44-45)
- Que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana, que no son conscientes del grado y de la naturaleza del daño causado por los productos de Cannabis y/o THC, y que debido a las propiedades adictivas de este y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo (dependencia).
- **Que ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de Cannabis y/o THC en vidas, así como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles.**

Es de advertir que en diversos países se ha tratado de usar la marihuana y/o THC con fines médicos para diversos tratamientos, no obstante a la fecha no se ha



demostrado la efectividad que tienen los compuestos en comparación con los fármacos habituales empleados, contrario si está demostrado que se generan un elevado número de eventos adversos de diversa gravedad, así como dependencia.

Finalmente, es de resaltar como una consideración *prima facie*, que se advierte que el cúmulo de derechos fundamentales contenidos en los artículos que la quejosa invoca le son vulnerados, se contienen los derechos de identidad personal, principio de pluralismo, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación personal y corporal, libertad individual, dignidad humana y derecho a la salud, no obstante, se circunscriben única y exclusivamente en relación con el ser humano, conceptuado como persona física, como atinadamente lo estableció la A quo en la sentencia dictada en el juicio de amparo citado al rubro.

En efecto, si bien el párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Federal, establece que "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."; se entiende que el término persona, lato sensu, refiere tanto a personas físicas así como a personas morales o jurídico colectivas.

Sin embargo, existen derechos fundamentales inherentes y atinentes única y exclusivamente a la persona física como centro de imputación normativa y titular de derechos concernientes a sí misma, pero dichos derechos no pueden estar por encima de los de la colectividad y de los grupos vulnerables.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Es aplicable el criterio sustentado en la tesis P. LXV/2009, página 8, tomo XXX, diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo rubro y texto disponen:

**"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.**

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad."

Bajo ese contexto, debe señalar que el concepto de "dignidad humana" es propio de la "naturaleza humana", a la que hizo referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-4/84, de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (atinenta a la "propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la naturalización"), la cual establece, en lo que interesa, lo siguiente:

"55. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incurso en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

"56. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente

discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose 'en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos' definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando 'carece de justificación objetiva y razonable' [Eur. Court H.R., Case 'relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium' (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34].

Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

"57. No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana."

VAL COLEGADO  
MINISTRATIVA DE  
R CIRCUITO

Criterio consultivo que es conforme a los artículos 62 y 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen:

**Artículo 62** "1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al secretario general de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial."

En el caso en particular la quejosa impugna los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479, todos de la Ley General de Salud, del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que dicha Ley, considera como un estupefaciente la **cannabis sativa**, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas, así como sus isómeros o cualquier otro producto derivado o preparado que contenga tal sustancia, los de naturaleza análoga o cualquier otra sustancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General.

Asimismo, se precisa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, en este caso la **cannabis sativa**, está sujeto a las disposiciones de la propia ley y que tales actos sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Además, se impone una prohibición absoluta en el territorio nacional, para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, entre otras sustancias, de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, ello en virtud de contener, en términos de la propia ley, escaso o nulo valor terapéutico y poder constituir un grave problema para la salud.

Así, del ejercicio de ponderación y análisis entre las disposiciones legales que contienen los derechos fundamentales transgredidos en relación con los artículos de la Ley General de Salud, tildados de inconstitucionales a la luz de los motivos de disenso expuestos, debe señalarse que éstos resultan **inoperantes**, dado que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales que dice se transgreden en su contra, ya que éstos son personalísimos y de tipo subjetivo e inherentes a la naturaleza humana es aplicable, por el criterio que informa la tesis P. LXVI/2009, página 7, tomo XXX, diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala:

**"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.** De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u





- 35 -

objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, **sólo a ella corresponde decidir autónomamente.**"(Lo resaltado es propio)

En tal virtud, toda vez que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales absolutos que considera se transgreden en su perjuicio al ser incompatibles con su naturaleza jurídica, se reitera, devienen inoperantes los motivos de disenso que expuso. Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/33, página 1406, tomo XX, agosto de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala:

**"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR.** Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al que se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir."

Finalmente, es de resaltar que para el caso que sus Señorías, consideren analizar las violaciones que esgrime el quejoso, relativas la violación de sus derechos humanos, es de resaltar que no existe una prohibición como tal, de consumir cannabis sativa, en

virtud que de conformidad con el artículo 479 de la Ley General de Salud existe permisión de consumo personal de acuerdo con la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato de diferentes sustancias, en el caso, de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, en una cantidad de 5 (cinco) gramos, la citada autorización atiende al contenido de la exposición de motivos que prevé la necesidad de dar atención a las adicciones, sin descuidar la organización de la estructura punitiva contra las organizaciones criminales que promueven el consumo de drogas entre nuestra juventud; así como de dar un combate más eficiente al narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo que lacera en lo más profundo las redes sociales y familiares de nuestra sociedad y al sector más vulnerable de la misma que son las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se precisa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, en este caso la cannabis sativa, está sujeto a las disposiciones de la propia ley y que tales actos sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

También, se impone la prohibición absoluta en el territorio nacional, para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, entre otras sustancias, de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, en virtud de contener, en términos de la propia ley, escaso o nulo valor terapéutico y poder constituir un grave problema para la salud.

De conformidad con los artículos 1, 2 y 3, fracción XXI, de la Ley General de Salud, se deduce que el objeto de la Ley General de Salud es, entre otros, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, en este sentido, la constitucionalidad de los artículos impugnados no puede hacerse depender de la situación personal del quejoso, al tratarse de una norma de carácter general, impersonal y abstracta, cuya finalidad es ser garante del derecho constitucional a la protección de la salud, entendida como el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud **que contribuyan al desarrollo social.**

- 37 -

De esta forma, la prohibición contenida en los artículos impugnados no son arbitrarias, ni caprichosas; no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga al quejoso a revelar aspectos de su vida no conocidos por otros y que, por tanto, cada sujeto puede decidir revelar, esto es, el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás no se ve violentado con los artículos reclamados, **en virtud de que éstos no interfieren en el poder de decisión de los quejosos sobre datos relativos a su persona, quedando intocada la disponibilidad sobre su vida y decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás.**

Tampoco, no se vulnera en perjuicio del quejoso el desarrollo de su personalidad, pues las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

De igual forma, no existe violación a la intimidad de su persona, pues los numerales que consideran inconstitucionales no pretende coartar su libertad de decidir qué aspectos de su vida deciden revelar, pues la disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás no se ve afectada, sin que ello signifique ocultar información, sino que puedan desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admiten exponer a conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana.

MINISTRATIVA DE  
H. CIRCUITO  
Ciertamente, en el caso, no se observa que los principios de identidad personal, intimidad, imagen y desarrollo de la personalidad que se encuentran ligados al derecho fundamental de la dignidad humana se encuentren limitados o vulnerados, pues la finalidad de los preceptos legales que nos ocupan, como quedó establecido en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, **es de dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4º constitucional,** bajo el respeto de la dignidad humana de las personas, evitando trasgresiones al orden público, preservando derechos de terceros y del orden público, pues el individuo tiene y conserva el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.

Asimismo, no existe violación al principio de autodeterminación, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

De concluir que las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y cualquiera de los derechos fundamentales de los gobernados, entonces, no sería razonable la prohibición contenida en los mismos, tratándose de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, pues debe tenerse en cuenta que la protección de la salud, en definitiva, es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo justificador de la limitación a la libertad de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga.

Así la dignidad humana, está situada en casi cualquiera de sus ámbitos de ejercicio en el centro de un entramado regulatorio muy intenso, destinado a garantizar ése y otros muchos contenidos constitucionalmente relevantes, cuya protección se vería puesta en peligro por un ejercicio de la misma no debidamente limitado desde la perspectiva de objetivos e intereses públicos como los que las previsiones legislativas impugnadas sitúan en el centro de sus propósitos.

Así, contrario a lo señalado por el quejoso, no existe violación al derecho fundamental de la dignidad humana en perjuicio de persona alguna, reclamado éste con los principios de personalidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, pues como quedó señalado, en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en el párrafo tercero del artículo primero que *"queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas"*, atiende a la dignidad de la persona humana que fundamenta la diferencia en el trato de las personas y las cosas, subrayando que la jerarquía de la persona humana es algo que se establece en relación con los demás seres corpóreos, pero no en relación de unas personas con otras; esto es, cuando se habla de la dignidad en relación de unas personas con otras no existe ese significado de

superioridad, sino un significado de igualdad, pues la dignidad la poseen todas las personas por el mero hecho de tener naturaleza humana.

Así, las disposiciones impugnadas de ninguna manera ponen en peligro el derecho fundamental de la dignidad de las personas, pues el hecho de prohibir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, no genera riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios de la norma, ya que no tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, pues no se vulneran los principios de personalidad, propia imagen, intimidad, desarrollo de la personalidad y autodeterminación, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto, máxime que las normas reclamadas no imposibilitan a los destinatarios ejercer todos sus demás derechos fundamentales necesarios para desarrollar integralmente su personalidad.

En este orden, es obligación del Estado proporcionar a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, como en el caso, de las adicciones y la lucha contra ellas, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud.

En ese sentido, es infundado el concepto de violación hecho valer, pues la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

Por otra parte, respecto al tema del derecho a la salud, la prohibición contenida en los artículos impugnados es una medida instrumentalmente apta para alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud que el legislador legítimamente busca proteger, por tanto, no se viola en perjuicio de ninguna persona sus derechos de identidad personal, autodeterminación y disposición de la salud propia; pues contrario a lo señalado por los quejosos, no se imponen modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de

trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

Además, cabe recordar, que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y la impetrante de garantías pretende defender el derecho a la salud en su aspecto negativo, máxime que el consumo de marihuana no es un derecho fundamental; de ahí que la restricción contenida en los artículos impugnados debe considerarse como constitucionalmente válida, ya que en términos del artículo 3° de la Ley General de Salud, es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

De modo que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general, es decir, la disminución en los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud.

Así, la salud es una necesidad primordial en la vida de las personas, como sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales, por tanto, la salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento, en otras palabras, es el primer requisito para el bienestar.

Ahora, dado que la salud es un derecho fundamental del ser humano, el uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, de ahí que contrario a lo señalado por la parte quejosa sea necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que puede causar problemas tan graves como la drogadicción.

Además, en sentido contrario a lo que aduce la quejosa, los preceptos que impugna, si bien es cierto establecen una prohibición, ésta se sujeta al principio de menor restricción, ya que no todos los habitantes del país requieren consumir cannabis o marihuana y sí, por el contrario, necesitan que se garantice **(EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTECCION A LA )su salud**, de modo que la afectación que la peticionaria de amparo pudieran resentir, encuentra justificación

constitucional, más aún cuando lo que se procura es garantizar el derecho a la salud de terceros, por los motivos que se han venido señalando en el presente.

Así el derecho de acceso a la salud no se relaciona directamente con el derecho de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia, porque, **se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.**

Sin que pase por desapercibido para ese H. Tribunal, que la quejosa sostenga que el consumo de marihuana no genera graves daños a la salud, sino un riesgo de daño a su salud; porque tal afirmación se trata de una situación particular de la quejosa, **la que pretende darle el carácter de derecho negativo, con el fin de obtener una autorización en su beneficio;** sin que en este caso se encuentre demostrado lo aducido por ésta, y sí, por el contrario, permitiría que gozará de una autorización que puede llegar a afectar a la salud de la población en general, por ejemplo en su consumo con la emisión de humo de segunda mano que afectara a las personas a su alrededor, lo que no es jurídicamente permisible y que tampoco genera la inconstitucionalidad de la ley, el derecho del particular, debe ceder ante el interés público.

En relación a que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero, contrario a lo aducido, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, que permitan establecer que la medida no es proporcional para alcanzar los resultados deseados, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por la accionante de garantías.

Además, cabe señalar además que la quejosa parte de un premisa errónea, pues considera como un derecho la siembra, cultivo de marihuana, sin embargo, la prohibición contenida en los artículos impugnados es constitucionalmente válida, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte lo han constituido como un derecho; por tanto, los artículos impugnados no son inconstitucionales, en virtud de que no se puede hablar de una restricción de un derecho cuando éste no existe como

tal, de ahí que contrario a lo señalado por el impetrante de garantías, los artículos impugnados no deban cumplir con los requisitos necesarios para restringir un derecho.

Aunado a lo anterior es de resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Este criterio se desprende del texto de la tesis número 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; página 457, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, cuyo rubro es **"DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."**

Es decir, el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad, cuyo contenido e interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Así, se observa de los siguientes ordenamientos, el párrafo 1° del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como "Protocolo de San Salvador", 6, 24, 25 y 26, de la Convención sobre los derechos del niño, que han establecido entre otros de los puntos a destacar, lo siguiente:

- a) Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
- b) Que los Estados Parte en dichos Pactos, Tratados y Convenciones, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social.
- c) La reducción de la mortalidad y de la morbilidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.



d) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

e) El reconocimiento por parte de los Estados, del derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de la salud.

Concomitantemente, es necesario traer a colación que en el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, entre otros, el artículo 1º de la Constitución Política, incorporando al texto constitucional la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en dicha Ley Suprema como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Para optimizar la aplicación de dicha enmienda, el Constituyente puntualizó en los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, **tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Luego entonces, todas las autoridades del país deben atender a cabalidad proteger los derechos humanos de los habitantes de México, como una obligación inherente, en términos del artículo 1º, Constitucional y en términos de la tesis número P. LXI/2010, cuyo rubro es el siguiente: "DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO".

En este orden, la protección del derecho a la salud, exige entre otras de las obligaciones de los Estados, que para garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo.



Lo mismo se desprende de la Observación General No. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la cual no es una mera declaratoria, sino que constituye una obligación de hacer para el Estado Mexicano al ser uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, que firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, dicha disposición establece lo siguiente:

*Observación General No. 14*

33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligación a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directamente o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, **la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.**

En este orden, en cumplimiento al artículo 4º, constitucional y los diferentes ordenamientos internacionales que México ha suscrito, entre ellos los citados por la demandante, el poder legislativo emitió los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en donde se respeta el derecho a la salud, ya que se protege a la sociedad, previniendo e inhibiendo la venta de marihuana que ocasiona daños fatales e incluso irreversibles a largo plazo.

Por lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado debe confirmar la sentencia recurrida y en su caso, subsidiariamente, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos por los citados argumentos.

Por lo expuesto y fundado; **a usted C. Magistrado Presidente**, atentamente pido:

**Primero.-** Tenerme por presentada en tiempo y forma, interponiendo Revisión Adhesiva al recurso promovido por la impetrante de garantías en contra de la resolución definitiva citada.

- 45 -

**Segundo.-** Admitir a trámite la presente revisión adhesiva.

**Tercero.-** Atendiendo los argumentos contenidos negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa.

**Atentamente**  
**La Subdirectora de Recursos Administrativos**



**Lic. Ana Lucia Tlahuech Rivera**



L COLEGIADO DE  
ISTRATIVA DE  
IRCUITO

**Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada**  
**Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1\_1.pdf**  
**Secuencia: 1603781**

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	VITO860328HDFLBS05			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000002bb	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/10/2017T14:18:26Z / 18/10/2017T09:18:26-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	90 8f b5 99 84 ab 12 b6 db 9a 37 ad 57 c7 91 e2 15 b6 6d 83 0a 89 d0 8b 20 6b 99 0c 1b 58 88 f3 97 b3 c1 9d dc e8 f9 d3 31 f7 ff 8b 2d 0b 7a 12 b3 52 2a d9 22 85 65 c0 90 40 50 cf 26 b2 7e 01 f1 7f 36 ce 2e ed b2 7a a5 d3 ce 11 33 47 55 9f a7 79 2c fd 91 67 7f ed 22 4c e6 b7 eb a4 c1 56 d6 11 77 7a b6 0a 33 9f 8e 68 c7 03 3f 4c 43 94 e1 a2 3c 23 7f b2 51 e0 f9 6a c1 a2 9f cf a2 3d 8e 3c 4e d1 a5 77 ca 10 a9 d5 91 bf e5 f1 91 6a 58 89 e0 e0 5a 3b 65 d7 06 8a b9 9f 7b 6d 6f 1f 8c 9e 8a f3 f4 e8 c1 3b 30 d0 bf 29 8b 59 f5 d5 a8 2f c4 71 3b 88 79 d0 d7 df 4e 12 d8 e6 32 d8 33 7b a2 9e 7d 14 3b 98 b3 95 99 bd 5e 9b 0b d2 0c 56 b3 0b ce 57 33 de 9d 44 a7 87 82 ce 95 cf f4 df 95 48 0e 0c 01 38 1b 86 89 5b 65 31 c5 70 99 88 df 0e 75 31 d2 8f d6 55 54 32 ab 1b eb bf			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/10/2017T14:18:27Z / 18/10/2017T09:18:27-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e00000000000000000000000002bb			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/10/2017T14:18:26Z / 18/10/2017T09:18:26-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1606302			
	Datos estampillados:	6653E6972ED435520517D6409AE529EC29A75410			